

ÍNDICE

Así afectarán los cambios en la nueva ley educativa a la vida real de las escuelas. EL PAÍS	Pág 2
FAES subraya que la enmienda del castellano de la 'Ley Celaá' "desterrará el español del sistema educativo catalán". EUROPA PRESS	Pág 5
El castellano, la concertada y la educación especial, en juego hoy con la votación del dictamen de la «ley Celaá». ABC	Pág 6
Ciudadanos ofrece al Gobierno poner en la Ley Celaá que el castellano es vehicular o blindar el 25% de clases en esta lengua. EL MUNDO	Pág 7
El PSOE justifica la Ley Celaá: "El 40% vive con otra lengua". LA RAZÓN	Pág 8
Obligaciones, alguna prohibición y reparto equitativo de alumnos: los frentes de batalla de la concertada y la nueva Ley de Educación. EL DIARIO.es	Pág 8
La escuela de la ciudadanía. EL DIARIO.es	Pág 11
La 'ley Celaá' provoca una batalla política en el Congreso. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 13
Aprobado el dictamen de la «ley Celaá» que destierra castellano e incluye la materia «Cultura de las religiones». ABC	Pág 14
El Gobierno aprueba en comisión la 'Ley Celaá' con el apoyo de ERC y PNV. EUROPA PRESS	Pág 15
Aprobado el dictamen de la ley Celaá, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas. EL PAÍS	Pág 16
La libre elección de centro, bandera de 25 años de gobiernos populares. ABC	Pág 17
Contagios 'al salir de clase': los brotes de COVID-19 son el doble en Secundaria que en Primaria, pero se dan fuera de las aulas. EL DIARIO.es	Pág 18
La reforma educativa de Celaá entierra definitivamente la ley Wert. LA VANGUARDIA	Pág 19
La asignatura de Lengua Cooficial pasará a llamarse Lengua Propia en la Ley Celaá. EL MUNDO	Pág 21
El PSOE rechaza el 25% de las clases en español. LA RAZÓN	Pág 23
La 'ley Celaá' y el español en Cataluña: ¿cesión política o acuerdo inocuo?. EL PAÍS	Pág 24
El 'misil' de la ley Celaá pone al borde del abismo a la educación concertada. LA INFORMACIÓN	Pág 26
Si quieres que tu hijo tenga más memoria y aprenda mejor, no descuides su escritura manual. ABC	Pág 28
La Comunidad de Madrid dejó de invertir 55 millones en la educación pública en 2019. CADENA SER	Pág 29
El frío que viene... en el aula. LA VANGUARDIA	Pág 30
Sin rastro de las 500.000 tabletas y ordenadores prometidos por la Administración antes de fin de año. EL PAÍS	Pág 31
Casado dice que si llega a Moncloa derogará 'Ley Celáa' y que ahora irá al TC y recogerá firmas en la calle para pararla. EUROPA PRESS	Pág 32
Hacia una concertada de interés público. EL PAÍS	Pág 33
Las asociaciones de estudiantes exigen que la enseñanza continúe siendo presencial. EUROPA PRESS	Pág 34
La RAE se posiciona a favor del español como lengua vehicular de la educación. EL MUNDO	Pág 34
La concertada registra escritos dirigidos al Congreso solicitando la paralización de la 'Ley Celaá'. EUROPA PRESS	Pág 35
Más del 50% de los estudiantes suspende a sus profesores por su formación 'online'. EL DIARIO.es	Pág 35
Centenares de colegios concertados leerán a los alumnos un manifiesto contra la 'ley Celaá'. EL PAÍS	Pág 37
Celaá reprocha al PP que el castellano no ha sido vehicular en la enseñanza hasta 2013: "Fuera catastrofismos". EUROPA PRESS	Pág 37
Retrasos que hieren. EL PAÍS	Pág 39
Sindicatos y oposición reclaman mantener todos los contratos Covid de los centros educativos hasta final de curso. EUROPA PRESS Madrid	Pág 39
El purificador de aire en las aulas, un aliado para evitar contagios de covid-19. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 41
Batalla en Educación para mantener los contratos de los profesores de refuerzo. ABC Madrid	Pág 41
El Gobierno decidió controlar por ley la educación concertada tras los efectos de 20 años de políticas del PP en Madrid. EL DIARIO.es	Pág 42
Cuatro de cada 10 españoles apuestan por la educación totalmente presencial mientras dure la pandemia. EUROPA PRESS	Pág 44

Salman Khan: "Solo medimos las habilidades académicas. Pero el humor, la empatía o la creatividad son también importantes". EL PAÍS	Pág 44
Un total de 31 proyectos de FP recibirán 408.000 euros en ayudas de la Fundación Bankia y FPEmpresa. EUROPA PRESS	Pág 47
El PSOE, a la concertada: «Para qué nos vamos a reunir, está todo pactado». ABC	Pág 48
Educación en tiempo de pandemia: ¿reforma o mejora?. EL PAÍS	Pág 48
La debilidad de la Lomloe. EL PAÍS	Pág 49
El nivel de inglés de España no mejora y se estanca en el ranking mundial, según un estudio. EUROPA PRESS	Pág 50
José Antonio Marina: "Hacer una ley de educación con la que está cayendo es estar en la luna". EL CONFIDENCIAL	Pág 50
La concertada se echa a la calle y utiliza alumnado menor de edad para protestar contra la 'ley Celáa'. ELDIARIO.es	Pág 54
Ganar el futuro educativo para todos. EL PAÍS	Pág 54
El Gobierno saca adelante la 'Ley Celaá' en el Congreso con los apoyos de Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. EUROPA PRESS	Pág 56
Hacer o no hacer: la importancia de la ética en la enseñanza. THE CONVERSATION	Pág 57
Cómo fomentar el espíritu crítico en los jóvenes sin convertirlos en opinadores de todo. THE CONVERSATION	Pág 59
La ley Celaá llega el jueves al Congreso con enmiendas "vivas" para hacer cambios. MAGISTERIO	Pág 60
Salud digital, la clave para abordar la digitalización. MAGISTERIO	Pág 61
Lomloe, nueva oportunidad perdida. MAGISTERIO	Pág 62
Luces y sombras de la reforma educativa. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 62
Casi un siglo después, sigue siendo cierto que 'en España el respeto es revolucionario'. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 64
La clase social importa para la educación digital. ESCUELA	Pág 66
La organización escolar y las enmiendas al proyecto de reforma educativa de la LOMLOE. ESCUELA	Pág 66
Los cambios de la Ley Celaá, a corto y a largo plazo. ESCUELA	Pág 69
La institucionalización de la palabra «no» en el contexto educativo. ESCUELA	Pág 71

EL PAÍS

Así afectarán los cambios en la nueva ley educativa a la vida real de las escuelas

Las autonomías crearán comisiones de escolarización para evitar que los alumnos con menos recursos se concentren en los llamados colegios gueto. La universalización del 0-3 años no se logra

ELISA SILIÓ. ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID - 13 NOV 2020

La tramitación de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, se acerca a su recta final. Este viernes se vota en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados el documento definitivo con las enmiendas que se incorporarán al texto. Durante casi dos meses, PSOE y Unidas Podemos —que gobiernan en coalición— han debatido y pactado con los diferentes grupos políticos más de 320 propuestas que, en caso de obtener este viernes la mayoría de los votos, se adherirán a la normativa (que posteriormente se someterá al voto del Pleno del Congreso y del Senado).

Durante las últimas semanas, la negociación de las enmiendas ha generado una tormenta política que podría afectar incluso a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza —una de las principales banderas del partido en Cataluña— si quiere su apoyo para los Presupuestos.

Más allá de la guerra política, ¿qué cambios reales suponen las nuevas enmiendas para el día a día de las escuelas? A continuación, diferentes expertos analizan las principales transformaciones que podrían generar las nuevas medidas en las aulas.

El castellano ya no será "lengua vehicular"

Sin duda, se trata de una de las enmiendas más polémicas. Socialistas, Podemos y ERC pactaron eliminar la referencia al castellano como "lengua vehicular" en todo el Estado, un término que introdujo por primera vez el PP en la Lomce (ley educativa aprobada por este partido en solitario en 2013). Según los promotores de la enmienda, el objetivo es "facilitar los programas de inmersión lingüística" de las autonomías con lengua cooficial.

Con la Lomce, el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, incluyó por primera vez artículos relativos al español que más tarde fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Uno de ellos establecía que las

autonomías costearían la matrícula en centros privados o concertados de aquellas familias que quisieran que sus hijos estudiaran en castellano —en una clara referencia a Cataluña—. El llamado “cheque Wert” fue solicitado por 154 familias (el 0,04% de los alumnos catalanes). Diferentes familias en Cataluña —ocho desde 2019 de un total de 1,5 millones de estudiantes— han acudido a los tribunales para solicitar que sus hijos estudien todas las asignaturas en castellano (con el programa de inmersión actual, solo se estudia en castellano la asignatura de Lengua). El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han fijado en diferentes sentencias que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano. El Tribunal Constitucional estableció en su sentencia sobre el Estatuto (en el año 2010) que el castellano tenía que ser también lengua vehicular en la enseñanza.

¿Qué cambio supone ahora la eliminación del concepto “lengua vehicular” del texto normativo? Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sostiene que en la práctica toda esta “guerra política” no va a modificar la lengua en la que aprenden los alumnos catalanes. “La Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada en 2009, establece que todas las personas tienen derecho a recibir enseñanza en catalán y contempla que la dirección de cada centro puede modular el uso de esa lengua en función de las características y necesidades de su alumnado”, explica Arbos. “Cosa diferente es lo que sucede en la práctica; la tónica general es mantener el catalán como lengua vehicular”, añade. En su opinión, mientras no se impugne esa ley autonómica, el sistema continuará funcionando igual. “La dinámica seguirá siendo la misma; las familias seguirán acudiendo a los tribunales para pedir que sus hijos estudien en castellano, pero es una proporción muy reducida de la población”, asegura.

Para Fernando Ramallo, profesor de Lingüística de la Universidad de Vigo, es “incomprensible” que este debate esté en el centro del huracán político en el siglo XXI, “donde nos dirigimos hacia la inclusión y la diversidad”. “Se requiere de manera urgente un apoyo explícito a las lenguas cooficiales si queremos que se hablen en los próximos 100 años”, explica en alusión a la advertencia del Consejo de Europa en su último informe de diciembre de 2019. “Hasta ahora las reclamaciones en Cataluña han sido muy escasas y el hecho de que se elimine el concepto de lengua vehicular no supone ningún cambio; el castellano se aprende en este país por impregnación social, se escucha en la calle, es la lengua mayoritaria de los medios y de la Administración central”, expone. “No corre peligro”.

Medidas para frenar los colegios gueto

Otro paquete de enmiendas persigue frenar la proliferación de los llamados colegios gueto (aquellos en los que más del 50% de los alumnos tienen pocos recursos económicos). España es el sexto país con mayor segregación escolar de Europa, según un informe de dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), una cuestión por la que ha recibido una llamada de atención por parte del relator de Naciones Unidas.

Gran parte de los cambios van dirigidos a mejorar la distribución del alumnado vulnerable entre la escuela pública y la concertada. La pública (donde está matriculado el 67% del alumnado), acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta.

Las medidas contemplan, por ejemplo, la creación por parte de las autonomías de comisiones de escolarización que supervisen el proceso de admisión para evitar la discriminación del alumnado por motivos socioeconómicos. Según el estudio de la UAM, Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras que en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—.

Además, las autonomías tendrán que distribuir en diferentes centros y de manera “equilibrada” a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo —bien por problemas en el aprendizaje o por una situación de vulnerabilidad sociocultural—. Para ello, tendrán que reservar una parte de las plazas a ese tipo de alumnos desde el comienzo del periodo de matriculación en marzo hasta el inicio del curso en septiembre y podrán autorizar un incremento de hasta un 10% en el número máximo de alumnos para poder acoger a los que se matriculan de forma tardía (bien inmigrantes recién llegados al país o familias con empleos más precarios que se mudan de barrio).

“Son herramientas muy novedosas y necesarias; no hay éxito escolar si no se invierte en revertir las desigualdades que se generan en los propios centros”, considera Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, dedicada a la investigación educativa. “Hasta el momento, ninguna ley de educación ha contemplado medidas para garantizar que todo centro tenga una composición social equivalente a la población del barrio en el que está”, añade. Según una investigación que realizaron con más de 200 familias en Barcelona, a la hora de matricular a sus hijos en el colegio, las familias con más recursos no tienen problema en escoger las que están lejos de sus casas, mientras que las más pobres matriculan a sus hijos en los centros más cercanos. “España es un país con poca segregación urbanística y mucha segregación escolar; el 80% no se da en barrios marginales sino en barrios mixtos, por eso es vital que la Administración intervenga para corregir esos desequilibrios”.

La no universalización de la etapa 0-3 años

Pese a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de universalizar la educación gratuita en la etapa de cero a tres años, finalmente la nueva ley educativa solo contemplará el compromiso de las autonomías de “incrementar progresivamente” la oferta de plazas. Eso sí, solo en la red pública (la concertada ha quedado excluida en este punto). En el proyecto de los Presupuestos para 2021, se contemplan 200 millones de euros para la creación de nuevas plazas. “Pese a que la Comisión Europea ha urgido a los países miembro a asegurar la calidad de la educación infantil, España se va a quedar atrás respecto a otros países que ya ofrecen esa etapa de forma universal como Dinamarca o Alemania”, indica Álvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children. En los países nórdicos, las plazas también están aseguradas en la red pública, aunque las familias pagan cuotas en función de su renta y solo para aquellas sin recursos es gratuito.

Sobre el segundo ciclo de infantil, la etapa comprendida entre los tres y los seis años, la enmienda contempla que las comunidades “garantizarán una oferta suficiente” de plazas en centros públicos y concertados. También se recoge el compromiso del Gobierno en colaboración con las autonomías de elaborar un plan de ocho años de duración para que el 0-3 “avance hacia una oferta pública suficiente”, dando prioridad en el acceso al alumnado en situación de riesgo de pobreza. En 2018, el 62% de los menores de tres años no estaban escolarizados en España.

La concertada sin suelo público, pero mejor financiada

La enseñanza concertada no se toca como tal, pero sí se trata de evitar que sea un negocio. Una enmienda prohíbe ceder suelo público para levantar colegios privados y anima a las Administraciones a “cooperar” para que se construyan otros públicos. Así se pone freno a la ley Wert de 2013, que daba carta blanca a la concesión de terrenos, aunque cuando esta se aprobó la transferencia de suelo —por un plazo de 75 años— era una práctica ya muy extendida en Madrid. Ahora se juzga si el vicepresidente madrileño Francisco Granados amañó con la trama Púnica el regalo de terrenos a cambio de mordidas de alrededor de un millón de euros por centro.

La concesión es, en todo caso, un buen negocio para las autonomías porque se ahorran costear un edificio y engordar su plantilla. Durante la anterior crisis, Madrid, en vez de usar el suelo dotacional —destinado a usos y servicios públicos— para edificar escuelas, optó por ceder los terrenos a la concertada y poner en lista de espera los centros públicos o construirlos por fases, sin biblioteca, gimnasio o comedor. UGT calcula que cada uno de los colegios concertados costó a las empresas en Madrid entre 10 y 12 millones. Para tener beneficios, este gasto termina repercutiendo en las “cuotas voluntarias” de las familias, cuando la enseñanza debe ser gratuita.

El PP valenciano, en sus años en el poder, quiso copiar el modelo madrileño. Llegaron a licitarse dos colegios —de los 10 previstos—, pero se terminaron declarando desiertos los concursos convocados por falta de solvencia económica de las adjudicatarias. Así que no hizo falta que la izquierda, tras ganar las elecciones, les quitase el concierto como había anunciado. Según el PP, 60 empresas y 20 municipios estaban interesados en edificar.

“En Murcia se cedió mucho terreno en régimen de concesión de 50 años, pero hace cuatro o cinco años que ya no es negocio. Todo el que pedía suelo lo conseguía fácilmente, desde una escuela infantil a la Universidad Católica de Murcia”, explica Nacho Tornel, secretario general de CC OO en la región. En otras zonas de España este mercadeo no es habitual. De hecho, esta enmienda ha contado con la abstención de ERC y PNV, que gobiernan en Cataluña y País Vasco, donde la concertada está muy extendida pero no con este modelo.

La enmienda frena la fundación de nuevos colegios concertados, pero en otra se aborda un problema de infrafinanciación de estos centros que difícilmente se puede esconder. Desde que se pusieron en marcha en 1985 con los socialistas en el Gobierno, los módulos de concierto no se han tocado. La intención es que una comisión —con presencia de las patronales de la concertada y los sindicatos— “valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad” para incluir sus conclusiones en el plan de incremento del gasto público. El PP llegó a crear una mesa de negociación en 2011, pero hasta que llegó la ministra Isabel Celaá —con la que el enfrentamiento es absoluto— esta no se convocó. Fue en octubre de 2018 y Escuelas Católicas —que agrupa a 6.000 centros concertados religiosos— llegó a agradecerle el encuentro.

Los concertados argumentan que cobran las cuotas “voluntarias” para paliar su déficit en las cuentas por la infrafinanciación pública. Pero la nueva concertada —las aportaciones en los colegios religiosos o las cooperativas son bajas— consigue un buen rendimiento económico pese a estar registrada como fundación que se desgrava. El Gobierno central no puede controlar que no se abonen cantidades —son las autonomías— pero sí prohibir, y eso plantea una enmienda, que las actividades complementarias de pago se incluyan en el horario lectivo.

Los colegios segregadores, sin concierto

“Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación y no separarán al alumnado por su género”, afirma la enmienda promovida por Podemos. Eso de facto supone anular el concierto de los centros que separan por sexos, pero el texto no tiene visos de tener recorrido pues ya el Tribunal Constitucional ha tumbado intentos de retirada en Andalucía. En una entrevista en febrero Celaá fue cauta, pero Pablo Iglesias se ha salido con la suya: “En nuestra ley hemos puesto que

preferentemente recibirán concierto los centros que sean coeducadores, porque es preciso que las niñas y los niños aprendan en los centros a convivir y a respetarse. Eso dice el proyecto de ley, veremos qué enmiendas se presentan". Con la actual ley los centros segregadores tienen que contar con un plan de igualdad para mantener el concierto.

Unas escuelas más autónomas

"Los profesores enseñan planes de estudios, pero no son dueños de su práctica, no tienen tiempo de estar con los compañeros, no pueden participar en las decisiones del centro... Es como si trabajasen en una cadena de producción", denunció el director del informe PISA de la OCDE Andreas Schleicher. Un lamento de los docentes que aumentó con la ley Wert, que constriñó aún más el currículum. Serán ahora las comunidades las que determinen el porcentaje de libertad de los centros. La LOMCE permite trabajar por ámbitos interdisciplinarios y no por asignaturas con los alumnos que necesitan refuerzo, pero este proyecto se extiende con la ley Celaá a cualquier aula. En Portugal, la estrella emergente en PISA, ha funcionado. "Dejamos que las escuelas trabajen un 25% del programa con su propia estrategia. Suelen fusionar asignaturas —Historia y Geografía, o Matemáticas y Física—, trabajan experimentalmente o diseñan proyectos anuales", contó su ministro, Tiago Brandao, en este diario. "No hay que ser impositivo, las escuelas ven que se confía en ellas y han respondido muy bien".

"Nosotros estamos a favor de terminar con cualquier división en compartimentos estancos", se alegra el presidente de la federación de directores de primaria, Vicent Mañés. Aunque es consciente de que en los colegios tienen ya menos corsés que en secundaria, tienen "unos mínimos" y luego hacen "adaptaciones". Pero recuerda que en la Comunidad Valenciana en este curso de pandemia ya se está trabajando por ámbitos en muchos institutos. Raimundo de los Reyes, presidente de los directores de instituto, también acoge bien esta libertad, pero precisa: "Para que haya verdadera autonomía se necesita la profesionalización de los equipos directivos y dotar de fondos a los centros".

En Portugal, expertos de la universidad e inspectores visitan durante una semana la escuela y emiten un informe que trata de mejorar el proyecto pedagógico. Falta por ver cómo se auditaría en España. Lo que sí se sabe es que habrá un mayor control de la tarea del profesor en el aula. De forma que si Inspección Educativa observa "una notoria falta de rendimiento" el docente podría tener que abandonar su puesto para hacer "otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado", señala otra de las nuevas enmiendas. Mañés sostiene que no habría que llegar a ese extremo si las oposiciones para el acceso no fuesen meros ejercicios de memorización, sin tener en cuenta las competencias del candidato o su labor durante el periodo de prácticas. De Reyes, sorprendido, coincide y añade: "No es realista, tendrá que ser en casos extremos".

europapress.es

FAES subraya que la enmienda del castellano de la 'Ley Celaá' "desterrará el español del sistema educativo catalán"

"Todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional, pero solo una es común a todos", expone

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación FAES también ha entrado a valorar la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto de reforma educativa (LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá') que suprime la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Según la entidad, esta enmienda "en la práctica, desterrará el español del sistema educativo catalán" y "deja de respetar el 'deber de conocer' y el 'derecho a usar' el castellano consagrados en el artículo 3 de la Constitución".

FAES recuerda que el Tribunal Constitucional avaló en 1995 el modelo de "conjunción lingüística" en el que los poderes públicos competentes pueden determinar la proporción en la que son empleadas como vehiculares las dos lenguas oficiales en los territorios en los que, además del castellano, exista otra lengua cooficial. Y se establecía la cautela de que el castellano no podía ser excluido como lengua vehicular o docente.

Además, destaca que cuando en la redacción del Estatut se planteó que la lengua catalana fuera, en exclusiva, vehicular en la enseñanza, el Tribunal Constitucional dejó claro, en una sentencia de 2010, que en ningún caso eso podía suponer que el castellano dejara de serlo, precisamente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución.

"El despropósito no sólo degrada al castellano como lengua común, lo que ya de por sí es de una gravedad extrema, sino que ignora, de nuevo, la realidad lingüística en Cataluña, arrastrado por la obsesión hegemónica

e impositiva del nacionalismo", critica FAES, que resalta los datos de IDESCAT, la agencia oficial de estadística de Cataluña, referidos a 2018.

Según esta agencia, el catalán es utilizado como lengua habitual por el 36,1% de los ciudadanos, el castellano lo utiliza como lengua habitual el 48,6%, mientras que un 7,4% utiliza ambas lenguas indistintamente. "Esa es la realidad que constituye una concluyente expresión de pluralismo que tiene que ser respetado y defendido, aunque, precisamente por representar pluralismo, al nacionalismo le resulte frustrante e inaceptable", señala, para recalcar que "en nuestro país contamos con una lengua común, cultivada y desarrollada en todas las Comunidades, que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar".

En este sentido, FAES reivindica que "los titulares de derechos no son las lenguas sino sus hablantes, y estos no tienen raíces que les sujeten a los territorios sino pies que les permiten trasladarse de uno a otro".

"Todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional, pero solo una es común a todos los españoles y puede exigirse su uso a cualquiera de ellos --expone--. Las lenguas cooficiales deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva".

Por último, FAES recuerda a los nacionalistas que el castellano es un idioma hablado por más de 600 millones de personas en todo el mundo, una realidad que "se impone al absurdo arbitrio de los que pretenden desalojar al castellano de Cataluña y que, lejos de albergar ningún verdadero propósito de convivencia lingüística, aspiran a un estricto e imposible monolingüismo". "La realidad, la Constitución y los derechos de todos los españoles, empezando por el derecho a la igualdad ante la ley, tienen que ser respetados", zanja.



El castellano, la concertada y la educación especial, en juego hoy con la votación del dictamen de la «ley Celaá»

Este informe, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas

La concertada se concentrará en el Congreso y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar la tramitación de la norma.

Josefina G. Stegmann. 13/11/2020

Hoy se vota en la Comisión de Educación del Congreso el dictamen de la «ley Celaá», así como las enmiendas que quedaron fuera de él (llamadas «vivas»).

Este informe, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; la que elimina a la concertada como garantista del derecho a la educación; la que propone una asignatura de «Cultura de las religiones» para acabar con la Religión o la que facilita la promoción de curso.

Estas enmiendas forman parte de un polémico texto que también quiere acabar con la educación especial con una disposición adicional (la cuarta) que alude, en un texto ambiguo, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Es el mismo texto que (en cuyo redactado original) también permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa y que ahora flexibiliza la promoción de curso, a través de una enmienda pactada con Bildu, que permite los alumnos repetir como máximo dos veces a lo largo de toda la enseñanza obligatoria.

Solo seis días

El dictamen será votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento). Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Pero ya para hoy también se espera una dura jornada ya que tendrán que votarse a partir de las 9.30 de la mañana todas las enmiendas no incluidas hasta ahora, además del dictamen, que se dejará para el final. Para los grupos parlamentarios esto supone una gran dificultad ya que tienen solo un día para discutir más de 1.000 enmiendas (las incluidas en el dictamen y las que no entraron en él).

La preocupación de la oposición se centra, sobre todo, en si durante la votación se incorporará alguna de las enmiendas que Podemos presentó en solitario, pese a que Mari Luz Martínez Seijo, secretaria general de Educación y Universidades del PSOE, le prometió a la concertada en una reunión que no lo haría, asegura el sector. Esta promesa ya se rompió con la aprobación de una enmienda del grupo morado que impide la entrega de suelo municipal por parte de los ayuntamientos para la construcción de centros concertados. El

texto dice ahora que «los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos». El texto original de la ley vigente, es decir, la Lomce (la Lomloe no lo toca) no especificaba el tipo de centro.

Manifestación y entrega de firmas

La concertada se concentrará hoy en el Congreso en contra de la «ley Celaá» y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar su tramitación en el Congreso.

El sector se ha unido, junto a otras asociaciones, por ejemplo, de defensa de la educación especial, bajo la Plataforma Más Plurales. A través de la misma han organizado una serie de acciones para frenar la ley, si bien su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, reconoció cuando se lanzó la campaña, el pasado 28 de octubre, que «esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre». Además de concentraciones en el Congreso, colocaron lazos naranjas en las fachadas en contra de la ley y prevén realizar una caravana de coches en toda España. Priego aclaró que la campaña no es únicamente de la concertada, sino que es en defensa de la libertad de enseñanza por lo que invitó también a la educación pública a sumarse.

EL MUNDO

Ciudadanos ofrece al Gobierno poner en la Ley Celaá que el castellano es vehicular o blindar el 25% de clases en esta lengua

La Comisión de Educación del Congreso vota más de un millar de enmiendas para aprobar el jueves la Lomloe en el Pleno

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Viernes, 13 noviembre 2020

Ciudadanos ha ofrecido al Gobierno dos propuestas para transaccionar la Ley Celaá en las que o bien se recoge en la ley la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza o bien se blindan que el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial.

En pleno tira y afloja de los Presupuestos, y cuando Inés Arrimadas ha condicionado su apoyo al Gobierno a que se garantice la presencia del castellano en la reforma educativa, los naranjas han enviado a Moncloa dos enmiendas y están a la espera de respuesta. Hasta ahora no la han recibido.

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha contado durante la Comisión que su partido ha presentado dos propuestas de transacción a la polémica disposición adicional **38**. En una se recoge que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".

"El castellano y las lenguas cooficiales tienen consideración de lenguas vehiculares, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", añade. Es el redactado original, tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros.

Además, Cs ha enviado a Moncloa otra propuesta alternativa por si la primera no les convence. Se trata de asumir que no haya ninguna referencia a la vehicularidad ni a la oficialidad pero añadiendo una frase que diga: "Adicionalmente, deberá impartirse en castellano al menos un 25% de la carga lectiva durante el horario escolar en todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada comunidad autónoma".

Martín ha dicho que "de momento, el PSOE no ha aceptado las enmiendas". "Salvo que en la Comisión lo acepten, hasta anoche el PSOE rechazaba esa transacción", ha apuntado.

La mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la enseñanza ha desaparecido de la Lomloe. Es una de las principales novedades de la reforma y encalla la negociación del Gobierno de coalición con Ciudadanos. El PSOE argumenta que nada cambia en lo esencial, porque el articulado sigue haciendo referencia a la Constitución.

Este viernes los diputados votan en Comisión el más de millar de enmiendas a la reforma durante una jornada maratónica, con la idea de aprobar la ley en Pleno el próximo jueves y tenerla ya aprobada a principios del año que viene. El dictamen de la ponencia se votará al final de la jornada, aunque el articulado aún puede sufrir modificaciones en los próximos días, hasta que llegue al Pleno.

Martín ha denunciado que la ley "no tiene garantías democráticas" y presenta un "vicio de tramitación", por lo que ha adelantado que lo van a denunciar. "Presentamos alternativas para que no quede duda de nuestra voluntad de llegar a un acuerdo", ha recalcado.

El PSOE justifica la Ley Celaá: “El 40% vive con otra lengua”

MATEO GONZÁLEZ ALONSO. 13-11-2020

Ajena a toda pandemia, la Lomloe, conocida como «Ley Celaá», sigue inexorablemente con su calendario. A pesar de las enmiendas, reclamaciones, firmas o concentraciones... el Ejecutivo espera aprobar el nuevo sistema educativo a final de mes. Impulsado por la ministra de Educación Isabel Celaá; la última concesión que se ha hecho pública es la referida a las lenguas cooficiales. En este tema, la ley no contempla un blindaje expreso al castellano, hasta ahora lengua «vehicular» que deben acatar las comunidades autónomas. Frente a los críticos con esta medida, para los socialistas, según un documento interno del partido al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la problemática es «nueva maniobra de distracción» de la derecha.

Según el documento, la ley es «absolutamente respetuosa con la Constitución, que no habla de lenguas vehiculares de la enseñanza» y pide «especial respeto y protección» para las lenguas cooficiales. Una afirmación, que el Gobierno de Sánchez interpreta de forma distinta la pretendida protección del castellano en Cataluña de la «ley Wert» y que, según los socialistas, ha generado importantes «problemas judiciales».

Ahora bien, el argumentario destaca que «el castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua cooficial» y consideran que la ley «garantiza el pleno y equivalente dominio del castellano y de la lengua cooficial» junto con un idioma extranjero.

Sin mencionar las concesiones con los partidos nacionalistas, destacan que la ley «impulsará la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas». Es decir, se deja en manos de las autonomías la potestad para establecer los umbrales de la lengua castellana y la regional. «La administración autonómica deberá aumentar, por ejemplo, las horas de enseñanza de la lengua cooficial en una zona donde la lengua predominante sea el castellano y de castellano donde la lengua socialmente más implantada sea la cooficial», ejemplifican sin negar que la autonomía haga lo contrario.

El trasfondo que se quiere vender con este guiño a los nacionalistas es que el «Gobierno socialista defiende la realidad plurilingüe de España» al destacar que «el 40% de la población vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano». «Nuestra voluntad es que la lengua no sea motivo de conflicto ni de separación entre la ciudadanía», ratifican.

Una de las grandes perjudicadas de esta ley es la escuela concertada, a la que el proyecto legislativo presenta como claramente elitista y como obstáculo para el desarrollo de un sistema educativo público con destacados niveles de calidad. «La Lomce, impuesta por mayoría absoluta del PP, ampara y alienta la privatización del servicio público que bajo el relato de ‘demanda social’, se oculta el derecho a seleccionar al alumnado y el profundo deterioro del derecho a la educación para todos», apuntan los socialistas sin disimular sus recelos. Precisamente el documento insiste en el criterio de «demanda social» —el que tiene en cuenta las demandas de las familias en una zona para establecer las plazas educativas— porque ha sido una de las pocas modificaciones que los populares han hecho en el sistema de conciertos, creado en 1985 por el Gobierno de Felipe González.

Ante esto, defienden que con Celaá «las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro pero la ley pretende garantizar que el proceso de admisión a los distintos centros sea más transparente y que la Administración verifique que los centros educativos concertados no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza». Si bien, una de las últimas modificaciones aprobadas en el Congreso prevé que la organización educativa puede redistribuir alumnos de los centros concertados, aunque estos tengan plazas vacantes. Algo que se suma a las reivindicaciones de la Plataforma Más Plurales creada para la ocasión.



Obligaciones, alguna prohibición y reparto equitativo de alumnos: los frentes de batalla de la concertada y la nueva Ley de Educación

La LOMLOE pretende revertir los cambios que, según el Gobierno, privilegiaron a la concertada con la LOMCE y obligar a los centros sostenidos con fondos públicos a cumplir la ley. La patronal de la concertada se rebela

Daniel Sánchez Caballero. 13 de noviembre de 2020

Como ocurre prácticamente cada vez que se habla de cambiar la normativa que atañe a los conciertos educativos, las patronales de los centros privados sostenidos con fondos públicos se revuelven contra la LOMLOE y han empezado una campaña de protesta en las calles, con concentraciones frente al Congreso, y en las redes. La nueva ley educativa, en trámite estas semanas en el Congreso, "es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de

nuestro sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática", denuncia *la plataforma Más plurales*, que agrupa a los propietarios de escuelas concertadas por todo el país y creada *ad hoc* para esta batalla.

Es incontestable que la LOMLOE trae cambios para la escuela concertada. Eliminar el concepto "demanda social" como eje sobre el que se vertebra la programación de plazas educativas; prohibir segregar al alumnado por sexo y ceder suelo público a los centros concertados; garantizar un reparto "equilibrado y transparente" del alumnado por los centros para evitar guetos; priorizar la creación de plazas públicas; y garantizar la gratuidad de todo el sistema son algunos de los principales cambios que propone la ley –según la redacción actual y las enmiendas pactadas por el Gobierno– que afectan directamente a la escuela concertada y que previsiblemente serán aprobados en el Congreso porque el Gobierno parece contar con los apoyos necesarios para ello. El Ejecutivo también le da a la concertada, aunque esto no va vía LOMLOE sino Presupuestos, un aumento del 5% en el precio que paga por módulo concertado.

Para cada uno queda la interpretación que se haga de estos cambios y si suponen o no una amenaza para la misma existencia de este tipo de centros, tal y como asegura Más plurales. Fuentes parlamentarias socialistas explican que "no se había modificado nada respecto a los conciertos desde la LODE (1985) hasta la LOMCE (2013), que es cuando se invirtió todo" y que esta nueva ley no supone una vuelta de tuerca a nada, sino volver a lo que había *prelomce*. "El debate no es sobre la titularidad pública o privada sino sobre la función social que ha de tener la educación sostenida con fondos públicos, que ha de regirse por la excelencia, la equidad, la igualdad y la inclusión, haciendo efectivo el derecho a una educación de calidad para todos".

Añaden estas fuentes que "la ley plantea que ambas redes deben prestar el servicio público" y que "en ningún sitio se ha dicho jamás que la educación concertada sea subsidiaria de la pública, ni siquiera en la LOMCE. Es un invento". El objetivo de la LOMLOE, añaden, es que todos los centros (públicos y concertados) "tengan las mismas obligaciones".

El derecho a la educación ¿pública? y la "demanda social"

Más plurales protesta porque la LOMLOE "se inventa un derecho a la educación pública" que, afirman, no existe. "El único derecho existente es el derecho a la educación", aseguran. En todo el articulado de la ley no aparece la expresión "derecho a la educación pública". Fuentes parlamentarias explican que "la ley refuerza el carácter de la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo" y que se pretende "priorizar la creación de plazas públicas, y eso tiene un sentido: corregir el déficit que se ha producido por años de recortes y las medidas que aparecían en la LOMCE sobre demanda social y suelo público". Los datos dicen que en 2008 había en España 1.946.678 alumnos en la escuela concertada, un 26,1% del total. Diez años después, último año con estadística consolidada, estas cifras eran de 2.102.403 (una subida del 7,9%) y el 25,5% (una caída del 2,3%), respectivamente.

Es en este apartado de la ley, sin embargo, donde se concentran algunos de los cambios que más ampollas están levantando. El artículo 109 de la LOMLOE, en concreto, relativo a la programación de la red de centros, sufre algunas modificaciones. Así, en el punto 1, donde la LOMCE decía "las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales..." se explicita que esta garantía será "mediante una oferta suficiente de plazas públicas", aspecto que en la Ley Wert no aparecía.

El punto dos del citado artículo de la LOMCE contiene la ínclita expresión acerca de que la "demanda social" se tomará en consideración a la hora de programar los centros necesarios si hay necesidad de crear plazas públicas o concertadas (antes de la ley Wert no se podían concertar colegios no existentes, era necesario un proyecto ya en funcionamiento). Esta expresión, la "demanda social", inexistente antes de Wert, se traducía en que si en una determinada zona las familias pedían mayoritariamente matricularse en un centro concertado, se entendía que había demanda de este tipo de educación (y al revés). El PSOE argumenta que se utilizó en algunas administraciones (siempre con el ojo en Madrid) para favorecer a la concertada con un mecanismo sencillo: si en un barrio determinado no hay escuela pública, las familias se apuntan a la concertada y se crea esta sensación de que es eso lo que quieren. La pescadilla que se muerde la cola. "La demanda social ha servido para propiciar que en determinadas zonas de nueva población no exista oferta educativa pública, o esta se encuentre saturada", argumentan fuentes parlamentarias socialistas.

Para corregir esta situación, la LOMLOE elimina la expresión de la ley y se añade un tercer punto al artículo 109: "En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población". El punto 4 acaba de completar el artículo 109 sobre la programación de centros: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

Libertad de elección y distribución del alumnado equitativa

"No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias", explican desde Más Plurales. "¿No es más igualdad que la familia elija el centro

que crea el mejor para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?", se preguntan. Fuentes parlamentarias socialistas replican: "Al restablecer la programación general de la enseñanza, aumentará la libertad de las familias que demandan escuela pública y que no tenían la opción de elegirla en lugares donde no se invertía en pública". Cuestión de puntos de vista.

El apartado sobre admisión en los centros educativos, a partir del artículo 84 de la ley, es uno de los que más pretende cambiar el Gobierno y que más critican los defensores de la educación concertada, que ven peligrar la "libertad de elección de las familias" que, afirman, se desprende del artículo 27 de la Constitución. Este dice, en su apartado 3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Y da pie a la patronal de la concertada a afirmar que "la pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos".

El Gobierno replica: "La LOMLOE no altera el mecanismo de elección y preferencia de centro que expresan las familias. Pero sí refuerza las garantías de una distribución equilibrada del alumnado mediante la programación general de la enseñanza, reforzando el papel de las Comisiones de Escolarización para garantizar un reparto equilibrado y transparente de la demanda y la matrícula escolar, evitando sesgos de selección y exclusión en la creación y asignación de plazas".

¿Qué dice la LOMLOE? El punto 1 del artículo 84 mantiene "la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales" como principio rector de la elección de centro, pero añade como novedad que "se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza". También se añade otro punto, el 7, que primará en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la LOMCE, pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género", dice la LOMLOE.

Asimismo, y esto también es novedad, el artículo 86 establece que las administraciones tendrán que crear "áreas de influencia" para los centros, públicos o privados concertados, que "permitirán garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea". Este mismo artículo añade que las comisiones de garantías de admisión, que deben intervenir cuando un centro tenga más demanda de plazas que oferta y que ya existían, deberán "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación".

Una 'amenaza' que sube la financiación

Aunque esto no es estrictamente de la LOMLOE porque aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno va a subir (más) la financiación de la escuela concertada. Lo hará en un 5,62% respecto a 2018, en concreto, "un incremento derivado de las subidas salariales acumuladas", aclaran fuentes socialistas. No es la única novedad con la financiación de los módulos de los conciertos.

"La LOMLOE ha recogido diversas demandas de los centros educativos concertados y de las administraciones autonómicas para la determinación de los módulos económicos de los conciertos a través de la creación de una mesa en la Conferencia Sectorial", una reivindicación histórica del sector que nadie ha atendido hasta ahora. La voluntad está ahí, falta ver que de verdad se ejecuta.

Ni suelo público ni segregación en la concertada

Dos de las novedades más comentadas de la ley, aunque no serán, en principio, las que más impacto tendrán. La LOMLOE prohibirá ceder suelo público para la construcción de centros concertados, una práctica muy madrileña y que en el mejor de los casos obviaba la ley, al menos en su momento. No hay queja de la patronal concertada respecto a esta disposición, quizá porque no se considera afectada.

Esta medida relaciona con la ya explicada demanda social y la programación de la red de centros. "Ha servido para propiciar que en determinadas zonas de nueva población no exista oferta educativa pública, o esta se encuentre saturada, mientras se cede suelo público y se garantizan los conciertos a centros privados con ánimo de lucro creados por empresas a las que se toleraba el cobro de cuotas ilegales y en ocasiones muy altas", aclaran fuentes del PSOE, que también explicitan que esta práctica atañe sobre todo a la conocida como "nueva concertada", en la que han entrado empresas con ánimo de lucro sin tradición en el mundo pedagógico y de la educación. "Generó una de las tramas de corrupción del caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional (los autos judiciales señalan cómo Francisco Granados cobraba sobornos de 900.000 euros por cada colegio concertado creado al que se cedía suelo público para su construcción)", añaden las fuentes.

Tampoco permitirá la LOMLOE otorgar conciertos a los centros que segreguen a su alumnado por sexo. La LOMCE establecía por primera vez en una ley que "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos", lo que abrió la puerta a concertar estos centros. La LOMLOE retira la expresión e insta a concertar "preferentemente" los centros mixtos y con proyectos de coeducación, debiendo justificar los centros que ejecutan la llamada "educación diferenciada" cómo respetan la educación en igualdad entre hombres y mujeres.

Gratuidad y control de las cuotas

Bajo el axioma de que si están sostenidos con fondos públicos deben ejercer como escuelas públicas, la LOMLOE introduce algunos cambios en el artículo 88, sobre las garantías de gratuidad. Este artículo en la LOMCE de Wert tenía dos puntos, que aludían a que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica", para luego excluir "las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario".

La LOMLOE introduce un par de añadidos para reforzar esta idea, que no se acaba de cumplir (siendo generosos). "Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro". Con esta medida se pretende poner coto a ciertas prácticas de algunos centros concertados, que cobran por estas actividades complementarias (refuerzos de lectura o idiomas, por ejemplo) y las incluyen a mitad de jornada escolar, dejando pocas opciones de rechazarlas a las familias, que se ven obligadas a pagar.

La modificación del artículo se completa con una obligación para las administraciones educativas: deben vigilar que no se paguen cuotas. "Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo", se lee.

Religión y Valores, en la diana

Aunque este apartado no atañe exclusivamente a la escuela concertada, las patronales han puesto su foco en las asignaturas de Religión y la creación (recuperación, si se quiere) de una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos. "Uno de los objetivos tradicionales de los Gobierno de izquierda es su opción por el laicismo activo (...) y lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad", expone el manifiesto de Más plurales respecto a la Religión, **olvidando** quién financia esos centros, sean o no de su titularidad. El principal cambio que trae la LOMLOE respecto a la materia es que dejará de contar para la nota media, elemento que introdujo la LOMCE, y no tendrá asignatura espejo (alternativa), lo cual promete crear más de un quebradero de cabeza a las direcciones de los centros, porque no se puede tener alumnos sin clase en mitad de la jornada escolar. Por lo demás, seguirá siendo, como hasta ahora, una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y realización optativa para el alumnado.

La asignatura de Valores, que se cursará si nada cambia en 3º de la ESO. Dice el proyecto de LOMLOE: "En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia". Para un conocimiento más detallado de los contenidos habrá que esperar al desarrollo del currículo de la asignatura, que llegará en una segunda fase legislativa. Pero en la concertada ya saben de qué va a ir la materia: "Otra Educación para la ciudadanía [la asignatura que creó Zapatero y que también le costó muchas protestas] no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento".

EL PAIS

La escuela de la ciudadanía

La información y el conocimiento están desigualmente distribuidos, y ante esto la nueva ley educativa ofrece avances, pero tiene algunas carencias y preocupa que niegue al español la condición de lengua vehicular

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA. 13 NOV 2020

La escuela es la institución a la que confiamos la formación de los ciudadanos. Sustituye a la familia, de modo parcial, pero nada marginal, en el cuidado de los menores y prefigura de manera progresiva su vida adulta en sociedad. Esto es más cierto en esta era en que la información y el conocimiento, que antes llegaban casi en exclusiva a través de ella, están amplia aunque desigualmente distribuidos por el tejido social. Es por eso por lo que podemos utilizar esta vara de medir como criterio esencial, aunque no sea el único, para cualquier política educativa y cualquier ley, ahora la LOMLOE.

El cambio que más consenso puede suscitar —aunque no unánime, pues en educación es difícil y en España se antoja imposible— tal vez sea el conjunto de medidas contra los mecanismos divisorios dentro de la escolaridad obligatoria, en particular la eliminación de las reválidas, la práctica supresión de los itinerarios y las restricciones a la repetición. Todo ello debe contribuir a que la práctica totalidad del alumnado supere el periodo obligatorio y tenga ante sí alguna vía de continuidad que culmine en algún tipo de cualificación profesional. La única sombra es que la ley parece olvidar que tanto suspenso y, en consecuencia, repetición, fracaso y abandono, que situaban y sitúan a España a la cabeza de lo que no debería ser y no hacen justicia al nivel de competencia de nuestros escolares, tienen como origen inmediato la cultura profesional de los docentes, que son los únicos examinadores hasta las puertas de la universidad. Se habría agradecido, pues, más presión contra la repetición, menos peso de centros y docentes y más para alumnos y familias en el recurso de última instancia a itinerarios profesionales y un examen de Estado como vía de segunda oportunidad para la titulación.

También es buena noticia que la religión, sagrada para unos, pero indiferente o incluso indeseable para otros, quede fuera del horario escolar y el itinerario académico, y ojalá pronto del presupuesto público; eso sí, sin excesos al servicio de los nuevos curas (y monjas) en su batalla contra los viejos, pues, además de educación, la escuela debe ofrecer cuidado, por lo que sería difícil entender que la religión, tan esencial para tanta gente, se viese expulsada por una puerta mientras por otra entra el *mindfulness*. Y sólo cabe celebrar que vuelva, aunque rebautizada, la educación para la ciudadanía, pues aquí y en todo el mundo estamos aprendiendo, si no lo habíamos hecho ya, que la vida social y política, cada vez más compleja, requiere un conocimiento sistemático y un esfuerzo reflexivo a los que no se llega por simple maduración biológica ni desde la mera transversalidad o impregnación.

Era hora, en fin, de adoptar una política activa y proactiva para lograr más igualdad entre los centros, en particular en su composición social, proscribiendo guetos y burbujas. Bien, pues, que se imponga y se haga efectiva la obligación de que todos los centros sostenidos con fondos públicos (aunque yo preferiría todos, sin más) sean microcosmos de la sociedad en y para la que están, reflejando su diversidad social y cultural, asumiendo su cuota de alumnos con necesidades especiales y contribuyendo por igual a su éxito. Requerirá, claro está, respetar los límites de lo razonable, poner los medios adicionales necesarios —los alumnos más difíciles también salen más caros, y con eso no podrá por sí sola la eficiencia privada— y no olvidar que también hay desigualdades, y muy serias, entre los centros públicos. Dicho lo cual he de añadir que el eslogan de “una oferta suficiente de plazas públicas” se me hace tan engañoso e interesado como el de “atender la demanda social”: el segundo daba pie a que cualquier empresario hábil en mercadotecnia reuniese las firmas suficientes para obtener suelo y fondos públicos, así como para el reforzamiento recíproco de guetos y burbujas; el primero refleja el apetito burocrático-corporativo de crear puestos incluso donde no se piden, ni se quieren, ni se esperan, para a continuación reclamar el cierre de centros concertados y recoger los alumnos para los públicos, como ya hemos visto en no pocas guerras escolares locales. Y bien, cómo no, que se deje de financiar la enseñanza diferenciada por sexos, no porque sea ni conduzca de cabeza al horror —muchos crecimos en ella y nos hemos portado bien—, ni porque los argumentos no ideológicos que la sustentan, como el distinto ritmo de maduración, sean falsos, sino porque hay mucho que perder —conocimiento mutuo, comprensión, convivencia— y poco o nada que ganar (mal andaremos si la escuela no puede lidiar con la diferencia entre el alumno y la alumna medios, pues es mucho mayor entre sólo las alumnas o sólo los alumnos).

Más que preocupante resulta la supresión del mandato de covehicularidad en las comunidades con lengua propia. Es de toda lógica que la cooficialidad de las lenguas exige la covehicularidad en la escuela, ya que la lengua es el primer objetivo, el medio dominante y el principal producto de ésta, y que la promesa de que los alumnos saldrán de la escuela dominando las dos lenguas sólo es un brindis al sol; si con eso bastara, ¿por qué no permitir la escolarización en casa de los alumnos cuyas familias puedan asegurarles el mismo nivel que la escuela? La respuesta viene sola: convivencia, socialización, los iguales... o sea, la ciudadanía. Negar al español la condición de lengua vehicular en las escuelas de Cataluña es un mensaje granítico: aquí sólo somos y formamos catalanes. Está por ver su alcance jurídico: llegó con la LOMCE, no estaba en la LOE, luego mal podrá apreciar inconstitucionalidad el Alto Tribunal si no lo hizo entonces. No hay sombra de duda de que el Constitucional ha dicho y repetido que cooficialidad significa covehicularidad, aunque pueda modularse a favor de la lengua más vulnerable; pero el Tribunal lo ha dicho, la Generalitat ha desobedecido, la Alta Inspección no estaba y los Gobiernos de España, casi siempre necesitados de unos pocos votos nacionalistas, se han puesto de perfil: la ciudadanía por un plato de lentejas. Con la letra de la ley en la mano, esta (re)omisión no blindo, como se afirma, la sumersión —mal llamada inmersión— lingüística, pero no hay duda de que quiere hacer cambiar el espíritu ni de que debilita a quienes reclaman una escuela bilingüe, deslegitima a los constitucionalistas y enardece a los nacionalistas.

Sin pretender exhaustividad, terminaré señalando dos carencias. Primera, que la ley apenas roza un problema esencial del sistema: su gobernanza, es decir, la distribución de competencias entre las distintas autoridades; de un lado, con la configuración del “autonómico” el Gobierno cedió masivamente competencias y presupuesto a las autonomías, que se enrocaron para no pasarlo a los entes municipales ni a los centros; del lado opuesto, los docentes siguen reinando en sus aulas ante la impotencia de las direcciones y órganos de participación social. Federalismo sin poderes federales y centros que no centralizan nada, lo que ha traído el espectáculo de inoperancia y reproches mutuos al que, salvo excepciones, asistimos desde el comienzo de la pandemia. Segunda, un impulso mucho más potente a la innovación y la transformación digital, objetivos en los que están

empeñadas las empresas, a los que ya se suman las Administraciones públicas, pero a los que todavía se resisten una mayoría de nuestras escuelas, las llamadas a formar a los ciudadanos del mañana.

Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense. Actualmente es director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

elPeriódico de Catalunya

La 'ley Celaá' provoca una batalla política en el Congreso

El Gobierno asegura que la nueva norma convertirá la escuela pública en el "eje vertebrador" del sistema

La oposición vaticina que las familias "dejarán de ser libres" en la educación de sus hijos

Olga Pereda. MADRID - VIERNES, 13/11/2020

La nueva ley de Educación ha provocado la enésima bronca política en el Congreso, donde el texto ha superado el último trámite parlamentario antes de ratificarse la semana que viene y encaminarse hacia el Senado. La diputada Inés Sabanés (Más País) ha asegurado que los problemas de la educación en España no son ni la lengua ni la religión sino "el fracaso, la falta de financiación y la segregación". A pesar de ello, los diputados de los partidos de derecha se han enfrascado en una batalla dialéctica, acusando a la futura normativa -que implica la práctica derogación de la controvertida LOMCE, más conocida como 'ley Wert' (2013)- de ser "un proyecto legislativo ideológico que resta libertad a las familias".

Ni PP ni Ciudadanos ni Vox ven con buenos ojos que la ley considere a la escuela pública como el eje vertebrador del sistema (no habrá cesión de suelo público para los centros privados). En España, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81%. El espíritu de la ley es ir ampliando esa cifra, algo que no gusta a los diputados de la derecha, partidarios de mantener la escuela concertada (y privada) en los mismos términos que ahora.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, siempre ha defendido que la norma no supone un ataque a la concertada. Pero los colegios de este ramo están movilizados en su contra. Un día más, han acudido a las puertas del Congreso de los Diputados con lazos naranjas como símbolo de protesta. La norma retira la expresión demanda social, requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. Lo que pretende el gabinete de Celaá es que la concertada asuma su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente.

Separados por sexos

Aquellos colegios que separan a sus alumnos por sexo (educación diferenciada, un modelo ligado al Opus Dei) no podrán seguir siendo concertados -y, por lo tanto, recibir fondos públicos- ya que una enmienda pactada con ERC así lo decreta. El PP y Vox han anunciado ya que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.

Educación especial

Uno de los puntos que más conflicto político ha creado es el capítulo de la educación especial. Los partidos de la derecha han acusado al Gobierno de cerrar dichos centros. La diputada del PP Sandra Moneo ha explicado que es madre de un alumno con necesidades especiales y ha anunciado, muy emocionada, que pondrá todo su empeño personal y profesional en retirar este punto de la ley. La socialista Mari Luz Martínez Seijo ha replicado que la futura norma apuesta no implica de ninguna manera la desaparición de los colegios de educación especial. Con el objetivo de la inclusión, la ley sí que concede 10 años para dotar a la escuela pública de recursos suficientes para atender a alumnos y alumnas con necesidades especiales y que en todo caso "se respetará la opinión de las familias" antes de su escolarización. Las familias, en todo caso, no se fían y muchas están también en plena batalla contra la iniciativa del Gobierno.

La lengua (y el modelo de inmersión de la escuela catalana) también ha sido un punto de conflicto. Los partidos de la derecha interpretan que la ley Celaá hará desaparecer el castellano de los colegios catalanes, vascos y gallegos dado que deja de ser lengua vehicular. En realidad, la norma lo que dice es que todos los alumnos de comunidades con lengua cooficial deberán demostrar su competencia en los dos idiomas al finalizar la etapa obligatoria y que si alguno tiene carencias, el centro educativo reforzará el aprendizaje. "El castellano no está en riesgo", repitió varias veces la diputada Sabanés, que también reprochó a sus colegas de PP, Vox y Cs su interés por la asignatura de religión (en la nueva norma no cuenta para nota y no tiene asignatura espejo) dado que "España es un estado aconfesional".

La ley elimina las reválidas (cuatro días de exámenes) impuestas en la época del ministro Wert y las sustituye por unas pruebas de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de ESO. También hace desaparecer los llamados itinerarios en la secundaria, que implicaban a los alumnos con menos capacidades a tomar un camino escolar de menor rango académico. "La evaluación perderá su carácter punitivo [en todos los cursos habrá una

evaluación más global y se podrá acceder al título de Bachillerato con un solo suspenso] y la repetición será el último recurso", ha concluido Guillermo Meijón (PSOE).



Aprobado el dictamen de la «ley Celaá» que destierra castellano e incluye la materia «Cultura de las religiones»

El Gobierno rechazó también la propuesta desesperada de Cs de incluir en la ley un 25% de castellano o que vuelva a ser vehicular

Josefina G. Stegmann. 13/11/2020

Este viernes ha salido adelante en la Comisión de Educación del Congreso el dictamen de la «ley Celaá» (también se votaron algunas enmiendas «vivas», es decir, las que están fuera de él, así como otras fruto del acuerdo entre partidos, es decir, las transaccionales). El dictamen ha salido adelante por 20 votos a favor 20 y 16 en contra.

El dictamen, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; la que elimina a la concertada como garantista del derecho a la educación; la que facilita la promoción de curso o la que se ha aprobado este viernes para incluir la asignatura de «Cultura de las religiones» para acabar con la Religión.

Cs intentó salvar de forma desesperada el castellano ofreciendo un acuerdo de mínimos al Gobierno: su vuelta al texto como lengua vehicular o su blindaje con la impartición en castellano «de al menos un 25 por 100 de la carga lectiva durante el horario escolar en todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada Comunidad Autónoma». Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraron a ABC que ya el jueves se había rechazado la propuesta.

Se trató una jornada maratónica de más de 10 horas en las que se votaron más de 1.000 enmiendas (que son el total de presentadas al proyecto de ley educativo, Lomloe).

Tensión con la educación especial

Estas enmiendas forman parte de un polémico texto que también quiere acabar con la educación especial con una disposición adicional (la cuarta) en el plazo de diez años. De hecho, posiblemente este tema haya sido el que más tensión generó durante todo el debate. «Voy a pelear hasta mi último aliento por quitar la disposición adicional cuarta», dijo la Sandra Moneo, del PP, visiblemente conmovido por la cuestión. Joan Mena, de Podemos, le criticó un exceso de «gesticulación». «¿Quiénes son ustedes para decidir por una madre?», espetó Óscar Clavell, del Partido Popular recordando que Moneo hablaba como diputada, pero también como madre.

El texto (ya estaba en su redactado original) también permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa y ahora también flexibiliza la promoción de curso, a través de una enmienda pactada con Bildu, que permite los alumnos repetir como máximo dos veces a lo largo de toda la enseñanza obligatoria.

A Pleno el jueves próximo

El dictamen será votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento). Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativa. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Concentración

La concertada se concentrará hoy en el Congreso en contra de la «ley Celaá» y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar su tramitación en el Congreso.

El sector se ha unido, junto a otras asociaciones, por ejemplo, de defensa de la educación especial, bajo la Plataforma Más Plurales. A través de la misma han organizado una serie de acciones para frenar la ley, si bien su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, reconoció cuando se lanzó la campaña, el pasado 28 de octubre, que «esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre».

El Gobierno aprueba en comisión la 'Ley Celaá' con el apoyo de ERC y PNV

La inmersión lingüística, los modelos de concertada y especial y la Alta Inspección Educativa, principales críticas de PP, Vox y Cs

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. El apoyo conseguido este viernes en la comisión, no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica. De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.

El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

DISCREPANCIAS ENTRE PSOE Y PODEMOS POR LA ÉTICA

A pesar del acuerdo de Gobierno, Unidas Podemos ha mantenido vivas numerosas enmiendas que tenían que ver con la bajada de ratios por aula, ampliación de oferta de plazas públicas, la empatía animal en el currículum, así como el mantenimiento en 4º de Eso de la materia de ética, que la LOMLOE relega a los dos cursos de Bachillerato.

En esta última, los morados esperaban el apoyo del PP ya que los 'populares' tenían una medida similar entre sus propuestas. La portavoz del PP en esta materia, Elena Castillo, ha pedido a su homólogo de Podemos, Javier Sánchez Serna un 'quid pro quo' con ambas enmiendas, pero, finalmente, no han llegado a un acuerdo y la iniciativa no ha prosperado.

En cuanto al debate, las críticas a la ley han llegado principalmente de PP, Vox y Ciudadanos, que se han centrado en los temas más polémicos que se han hecho públicos desde que se conoce el contenido de la LOMLOE o los acuerdos a los que se ha llegado en su tramitación: la inmersión lingüística, la repetición de curso y la situación de la concertada y de los colegios especiales o la Alta Inspección Educativa.

La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser "el peor enemigo de la educación" a través de una ley que "ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema". La portavoz de Educación 'popular' ha lamentado que el texto hable de "inclusión" sin tener en cuenta la "equidad" y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. "Con sus medidas hundirán al más débil", ha advertido.

UNA LEY DE "DUDOSA GARANTÍA DEMOCRÁTICA"

Para Vox, esta norma es "un entreguismo a quienes quieren romper España", según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Trías, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y ha advertido al Ejecutivo que cuando el TC se pronuncie "tendrán que implantar el 'pin parental' de Vox para cumplir con este derecho.

Muy crítica ha sido también la representante de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha calificado la ley como una "vergüenza" y considera que es de "dudosa garantía democrática". La diputada también ha criticado el "trampantojo" de las repeticiones, y ha recriminado al PSOE sus propuestas sobre la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, no son "democráticas". La diputada ha ofrecido a los socialistas, durante la sesión, un "acuerdo de mínimos", pero que "se ajusta a las sentencias del Constitucional" en este sentido, y que determina que en aquellas comunidades en las que se ha sometido a los alumnos a la inmersión lingüística tengan, al menos, el 25% de enseñanza en castellano. La propuesta ha sido rechazada.

La norma tampoco ha gustado al diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, para quien esta ley se ha tramitado con "escaso carácter democrático" y "totalmente de espaldas al sector de educación". A su juicio, es un

"castigo" a la escuela concertada, "anula" la educación diferenciada, algo "claramente inconstitucional", y con ella "va a ser difícil" poder estudiar en español en algunas comunidades.

DEFENSA DE LAS COMPETENCIAS

En el caso del PNV, su diputada Josune Gorospe, ha puesto sobre la mesa la importancia de la enmienda presentada por su grupo en materia de respeto competencial a las autonomías, así como la necesidad de introducir en la ley el concepto de lengua propia para referirse, en este caso, al euskera, unos textos que, finalmente, se han agregado a la norma con el apoyo de la mayoría.

También ha hablado de competencias, la portavoz de ERC, Montserrat Bassa, quien ha defendido que el "modelo de progreso" de la escuela catalana, "sólo es posible íntegramente desde su independencia". Aún así, ha reclamado que el Ejecutivo financie por igual a todos los modelos de enseñanza, una medida en la que coincide con el representante de Junts, Sergi Miquel. El diputado ha defendido un modelo "rico y diverso" en cuanto a modelos de enseñanza.

Por otra parte, la portavoz de Más País Equo, Inés Sabanés, sí se ha mostrado partidaria de la reforma del Gobierno. A su juicio, el marco actual es "una vuelta al pasado" con "recogida de firmas, amenazas y politización de la lengua", para esconder "los graves problemas que ha aquejado la educación" y que son "la desigualdad, el fracaso escolar, la falta de financiación y la segregación". "Eso es lo que trata de atajar la ley", ha zanjado Sabanés.

EL PSOE ACUSA A LA DERECHA DE GENERAR BULOS

Mientras, los partidos en el Gobierno han defendido el texto de Celaá. Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha criticado que la derecha haya dedicado el debate a "repetir mantras" que "no son verdad". Así, ha negado el cierre de colegios especiales, que no se haya contado con la comunidad educativa para la redacción del texto o que los inspectores no vayan a acceder a la Alta Inspección Educativa a través de oposición.

Su compañera socialista Maribel García, ha reprochado, además, al PP que acusen al PSOE de atacar la concertada cuando ellos "atacan a la pública" donde gobiernan y cuando en sus años de Ejecutivo han reducido su financiación hasta 10 veces más que a la concertada.

El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, por su parte, ha indicado que la LOMLOE va en dirección de "blindar" la educación pública y "hacia una escuela más moderna, más diversa, donde la igualdad sea ley". Además, ha dicho que la nueva ley "nace de la participación de la comunidad educativa porque recoge muchas de las demandas que ha hecho" frente "a los oídos sordos" del PP. Del mismo modo, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha lamentado que "las derechas" hable en sus discursos de "igualdad" y se "olviden de las oportunidades".

EL PAÍS

Aprobado el dictamen de la ley Celaá, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas

Las 320 enmiendas, que suponen nuevas limitaciones para la red de escuelas concertadas y que ponen freno a la proliferación de colegios gueto, han salido adelante con 20 votos a favor y 16 en contra

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID 13 NOV 2020

PSOE y Unidas Podemos (UP) han logrado este viernes sacar adelante las más de 320 enmiendas que durante los últimos dos meses han debatido y pactado con diferentes partidos en la oposición. El dictamen final de la ponencia ha sido aprobado con el apoyo de ERC, PNV, Más País y Bildu. PP, Ciudadanos, Vox y UPN han votado en contra. 20 votos a favor y 16 en contra. La votación, que se ha realizado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ha estado acompañada por un duro enfrentamiento entre los partidos por dos cuestiones clave: la eliminación del término "lengua vehicular" del texto legal para referirse al castellano y las limitaciones a la red de escuelas concertadas.

La tramitación de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, ya está más cerca de su recta final. En principio, el próximo jueves se llevará al Pleno del Congreso y requerirá mayoría absoluta para ser aprobada al tratarse de una ley orgánica. De ahí, pasará al Senado. La idea del Gobierno es que quede aprobada antes del 31 de diciembre. Más allá del contenido de las más de 320 enmiendas incluidas en el documento final —que se dividieron en cinco bloques y se negociaron en cinco sesiones diferentes—, la nueva normativa implica una serie de cambios respecto a la ley en vigor, la Lomce, aprobada por el PP en solitario en 2013. Entre ellos, uno de los que más ampollas ha levantado es que la asignatura de Religión dejará de puntuar en Bachillerato y, por lo tanto, no computará para el acceso a la Universidad.

Durante las últimas semanas, la negociación de las enmiendas ha generado una tormenta política que podría afectar incluso a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades con lengua cooficial —una de las principales banderas del partido en Cataluña— si quiere su apoyo para los Presupuestos. Este viernes, el partido naranja ha lanzado

un nuevo órdago a los socios de Gobierno (PSOE y UP) presentando una enmienda in extremis en la que proponían una segunda alternativa: que el texto de la nueva ley recoja la obligación de las autonomías con lengua cooficial de impartir al menos el 25% del horario lectivo en español. Una opción que el Gobierno ha declinado.

Socialistas, Podemos y ERC pactaron en una de las enmiendas eliminar la referencia al castellano como “lengua vehicular” en todo el Estado, un término que introdujo por primera vez el PP en la Lomce. Según los promotores de la enmienda, el objetivo es “facilitar los programas de inmersión lingüística” de las autonomías con lengua cooficial. El tema es especialmente espinoso porque los partidos de la derecha acusan a los socios de Gobierno de sucumbir a las exigencias de los nacionalistas catalanes para obtener a cambio su apoyo en los Presupuestos. Sobre la enseñanza del español en las aulas catalanas ya se ha pronunciado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han fijado que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano. El Tribunal Constitucional estableció en su sentencia sobre el Estatuto (en el año 2010) que el castellano tenía que ser también lengua vehicular en la enseñanza.

“Es sorprendente como han expulsado o no han reconocido el castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular”, ha denunciado Sandra Moneo, la portavoz de Educación del PP en el Congreso. En su opinión, este cambio en la ley “desprotege” a las familias que residen en Cataluña y quieren que sus hijos reciban la enseñanza en español. “No les va a quedar más remedio que seguir acudiendo a los tribunales para luchar porque la Generalitat incumple de forma continua las sentencias judiciales”, ha añadido.

Inés Sabanés, del Grupo Parlamentario Plural, acusó a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox de querer eliminar algunas lenguas del país bajo el pretexto de proteger el castellano. “El modelo de inmersión lingüística catalán funciona desde los años 80, y ningún miembro de sus partidos se quejó hasta que el ministro José Ignacio Wert (PP) introdujo en la ley educativa el término lengua vehicular. ¿Qué pasaba antes de 2013, entonces nadie consideraba nuestro modelo inconstitucional?”, les ha lanzado. Sabanés les ha acusado de no aportar ni un solo argumento pedagógico y de usar la lengua como arma arrojadiza. “Es una vergüenza que en el siglo XXI estemos centrando el debate educativo en la lengua y la religión”, ha añadido.



La libre elección de centro, bandera de 25 años de gobiernos populares en Madrid

La escuela concertada ha ganado alumnos y presupuestos, entre críticas de la izquierda

Sara Medialdea. 14/11/2020

Hay dos signos inequívocos de los gobiernos populares en Madrid: uno, la rebaja fiscal. Y dos, la libertad de elección. En el mundo educativo, esto se ha reunido en una apuesta inequívoca por la escuela concertada, que desde los partidos de izquierda y los sindicatos se le ha recriminado por considerar que se hacía en detrimento de la educación pública. Si alguien apostó fuerte por ello fue Esperanza Aguirre en sus gobiernos regionales, que se prolongaron desde 2003 hasta 2015 –tomando los tres últimos años de presidencia de Ignacio González como continuidad de sus políticas–. La prueba más evidente es que si en 1999 había en Madrid 8.225 unidades concertadas, en 2019 se alcanzaban las 15.900.

Aguirre defendía la enseñanza concertada como la materialización del derecho constitucional a la Educación. Así lo defendió desde su primera campaña electoral. Los sindicatos aseguraban que desde que ella llegó a la Comunidad madrileña, la inversión en educación pública subió un 30 por ciento mientras que las partidas para la concertada crecieron un 92 por ciento.

Lo cierto es que esta batalla comenzó incluso antes. Yaunque muchos no lo recordarán, los conciertos educativos se generalizaron en el curso 89-90 de la mano de una ley de Educación y un ministro socialistas: José María Maravall. Fue él quien, tras una durísima batalla en las calles –con la carismática portavoz de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Carmen de Alvear, literalmente a la cabeza de las manifestaciones– incluyó estos conciertos.

Más alumnos y centros

Su éxito entre los padres fue evidente: en 1999 sumaban 219.896 alumnos, y en 2009 ya eran 302.797. Hoy son 364.168. De igual manera, han crecido las partidas destinadas a esta modalidad educativa presupuesto tras presupuesto. El número de centros concertados ha ido aumentando, entre críticas sindicales por tratarse, en muchas ocasiones, de centros construidos sobre terrenos públicos cedidos por las administraciones.

Pero el compromiso de los gobiernos populares con la enseñanza concertada no sólo no ha retrocedido un solo paso en las últimas décadas, sino que, por el contrario, ha aumentado. Y la coalición con Ciudadanos tampoco

ha variado estas políticas. De hecho, la última medida tomada en este sentido fue el anuncio del cheque Bachillerato, una aportación a los padres que mantienen a sus hijos en este tramo educativo –no obligatorio– en los mismos centros concertados donde han cursado el resto de la ESO. La idea partió del entonces presidente regional, Ángel Garrido, ahora consejero de Cs.

Otra guerra contra el Gobierno Central

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a iniciar otra guerra contra el Gobierno Central, en este caso por su política educativa. La llamada «Ley Celaá» es el blanco de sus iras, porque considera que incluye ataques a la escuela concertada y los centros de educación especial. Díaz Ayuso no piensa resignarse ante ella: ya ha anunciado una ley regional que «blindará» estos modelos educativos en la Comunidad de Madrid.

La nueva Ley de Educación, Lomloe, pasó ayer el primer filtro, el de la comisión de Educación del Congreso. Pero en Madrid no gustan muchas de sus características. En especial, que la escuela concertada no vea garantizada sus plazas en función de la demanda, como ocurre hasta ahora.



Contagios 'al salir de clase': los brotes de COVID-19 son el doble en Secundaria que en Primaria, pero se dan fuera de las aulas

En comunidades como Catalunya los brotes entre los alumnos de la ESO, Bachillerato y FP duplican a los de Primaria –815 afectados contra 400–, pero el Ministerio de Sanidad advierte de que la mayoría se vinculan con las "relaciones sociales que establecen" fuera de los institutos

Mónica Zas Marcos / Pau Rodríguez. 14 de noviembre de 2020

Los centros educativos se han convertido en *el tercer escenario de contagios que más preocupa a Sanidad* por detrás del social y el familiar. Ahí se concentran el 13% de los brotes de coronavirus originados en la última semana y desde los que se han trazado 1.286 nuevos positivos procedentes de los colegios. Sin embargo, dentro de los mismos hay diferencias, como indicó el viernes pasado Fernando Simón.

"Tenemos información de brotes por ciclos y la mayor parte se detectan en Secundaria", detalló el responsable de Emergencias y Alertas sanitarias, concretamente entre los adolescentes de 15 y 17 años. La incidencia en este rango de edad resulta "coherente" para Simón, pero no por un aumento del riesgo dentro de las aulas, sino precisamente por lo que ocurre fuera de ellas.

Qué casos surgen ajenos a los colegios y se transforman en brote una vez dentro, o viceversa, es algo difícil de medir. Lo que sí es cierto es que la mayoría de la transmisión se produce en el ámbito social (un 26% de los brotes en la última semana) y que afecta a gente de todas las edades. El cruce de ambas estadísticas, unido al *pico de contagios entre los 15 y los 24 años*, es lo que lleva a Sanidad a señalar a los alumnos de Secundaria (ESO y Bachillerato) y Universidad como "grupos prioritarios" de difusión de la COVID-19.

El cálculo no sorprende a los responsables de la educación secundaria, aunque esta información escasea por parte de las consejerías autonómicas. Según unos datos a los que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es en Catalunya, los brotes en Secundaria y FP actualmente duplican a los de Primaria. Se han registrado en concreto 143 brotes con 815 afectados frente a los 67 con 400 afectados que tiene el primer ciclo. Unas cifras que complementan a las expuestas este miércoles por el sindicato catalán de profesores ASPEPC, y que desvelan que el 52,5% de los centros infectados ahora mismo son de Secundaria y el 27% de Primaria.

En Catalunya, donde la vida social en locales se cortó de raíz hace un mes con el cierre de bares y restaurantes, los focos de contagio según su Red de Vigilancia Epidemiológica se han trasladado a la familia y a los centros escolares. Por ello, ASPEPC ha urgido a la Generalitat a tomar medidas para garantizar la distancia física de seguridad en las aulas, reducir las ratios y establecer docencia híbrida, así como a mejorar los equipamientos de higiene, ventilación y filtros en los institutos.

Estas súplicas representan al grueso de docentes de Secundaria españoles, que desde el inicio del curso han visto cómo se hablaba de "niños" o de "colegios" y se dejaba a los adolescentes e institutos fuera de la ecuación de la vuelta a las aulas. "En el sistema educativo no hay solo niños de Primaria, aunque así pareciera oyendo a epidemiólogos y a políticos", opina Esteban Álvarez, presidente de ADIMAD, asociación de directores de instituto de Madrid. "Un estudiante de la ESO y Bachillerato tiene 10 profesores a la semana y otras actividades que obligan a un intercambio de personas constante, así que los grupos burbuja ni se contemplan", afirma.

Las burbujas o grupos estancos han sido la medida estrella para evitar la expansión del virus entre niños de Infantil y Primaria, aunque sindicatos y profesores dudaban de su efectividad. Aún así, es más fácil mantenerlos cuando hay un único docente por aula y los alumnos se relacionan solo con su clase en los descansos, algo imposible entre los estudiantes de Secundaria. Pero no solo dentro de los institutos, también fuera. "Los adolescentes tienen un comportamiento muy distinto al de un niño de 10 años", asevera Álvarez.

"Los de 16 o 17 años funcionan igual que los universitarios, no están en grupos cerrados y, cuanto más avanzamos en la edad, más posibilidades tienen de contagiarse", admite el portavoz. De hecho, la Comunidad

de Madrid comenzará a hacer pruebas de antígenos a adolescentes de esas edades para comprobar la incidencia de coronavirus en los ciclos de Secundaria. elDiario.es ha contactado con la Consejería de Sanidad para ampliar los detalles del estudio, pero no han ofrecido más información. "La preocupación por que el virus se cuele desde fuera es lógica, pero gran parte de los alumnos está dando una respuesta ejemplar dentro de las aulas", cree el representante de ADIMAD.

A medida que la incidencia baja en ciertas regiones, de forma directamente proporcional lo hace el número de brotes en las aulas de instituto. Y así ha ocurrido en Madrid. "A principio de curso teníamos 16 contagios a la semana y ahora apenas son dos o tres", explica Marian, directora de un colegio en San Sebastián de los Reyes. Pero, en su opinión, esto también tiene que ver con que "los chavales vienen concienciados de casa". "Se han vuelto muy dóciles, incluso demasiado", bromea la directora sobre el respeto que tienen sus alumnos por las normas sanitarias y su rigor en el uso de las mascarillas. Para ella, señalar a la Secundaria "emite un prejuicio inaceptable hacia los jóvenes".

Esteban Álvarez recoge este testigo y abunda en que la comunicación con ellos es constante. "Nosotros les recordamos que deben ser igual de prudentes en la calle que en el centro, donde reconocemos que están funcionando muy bien", explica el portavoz de los directores de instituto. El temor a exponer a sus familias al virus o a una cuarentena es, según él, lo que ha hecho reaccionar a la mayoría en esta segunda ola de la pandemia. "También te admiten cuando lo hacen mal, no retuercen los argumentos, pero están dolidos por las generalizaciones y son conscientes de que no es algo específico de los jóvenes", recuerda.

Para el Sindicato de Estudiantes de España, esta solo es una forma de escurrir el bulto por parte de las autoridades. "Una vez más culpabilizan a la gente de los contagios apelando a la 'responsabilidad individual' de cada uno y siguen criminalizando especialmente a la juventud de los rebotes", expresan. Pero el miedo al contagio no es patrimonio único de los mayores y por eso desde la plataforma reclaman medidas de seguridad y denuncian que se les obligue a ir a los centros aunque detecten positivos en sus clases.

Una crítica que recoge el portavoz de los directores madrileños: "La medida que reclamamos en los institutos es que se cumpla lo que se prometió al principio: es decir, test PCR o de antígenos para los compañeros o contactos de un infectado. La única forma de resolver la incertidumbre son las pruebas".

Más pruebas PCR y cuarentenas obligatorias

Los equipos directivos y docentes sienten que les responsabilizan de la subida de casos en los institutos, mientras que los protocolos sanitarios para los contactos se relajan cada vez más. "Tenemos una cierta inseguridad respecto a lo que pasa con nuestros alumnos", reconoce la directora del instituto de San Sebastián de los Reyes. "Nos llaman los padres diciéndonos que su hijo tiene COVID-19 y que ha dado positivo en un test y nos lo tenemos que creer, porque no hay otra forma de hacer rastreo", lamenta.

"La situación es buena, mejor de la que nos esperábamos. Pero se sigue sin hacer pruebas a los que van a clase con un positivo y no se pueden cerrar aulas salvo que haya más de tres casos en un mismo grupo", comenta Álvarez, de ADIMAD. "El porcentaje de asintomáticos es muy elevado, pero desconocemos la incidencia", concluye. Desde CCOO van a pedir expresamente a las consejerías que Salud Pública instaure un protocolo adecuado de pruebas COVID entre los alumnos de instituto y que comunique el resultado del rastreo inmediatamente al centro. "Ahora mismo no se está haciendo y a los responsables COVID, que no son sanitarios, solo les queda fiarse de lo que les dicen por teléfono", critica Isabel Galvín, portavoz del sindicato en Madrid.

"Pedimos lo que ha tenido Ayuso: dos pruebas y cuarentena preventiva para el caso sospechoso y para su entorno", compara Galvín con el caso de la presidenta de Madrid, que tuvo contacto con un positivo de COVID-19, le hicieron una PCR y una prueba de anticuerpos, y en cuanto recibió los resultados levantó su confinamiento. Un protocolo que no se sigue para los adolescentes ni para el grueso de la población adulta. "Incluso con los recursos que nos dan actualmente y las medidas insuficientes que se han tomado, los centros de Secundaria están haciendo un esfuerzo enorme y el alumnado está reaccionando en su interior con una actitud ejemplar", resume.

LA VANGUARDIA

La reforma educativa de Celaá entierra definitivamente la ley Wert

Varía métodos y evaluaciones, rebaja currículo y habrá cultura de religiones

CARINA FARRERAS, BARCELONA. 14/11/2020

La octava ley de educación española durante el periodo democrático entra en su recta final después de que ayer se aprobara en la comisión de Educación en el Congreso el proyecto de ley de la Lomloe (ley orgánica de Modificación de la LOE). La ley Celaá deroga la Lomce (o ley Wert) que ha regido en los últimos siete años.

Nacerá, como las demás, sin un consenso político amplio, con 1,5 millones de firmas recogidas y el Partido Popular ya ha anunciado que, si se aprueba, la recurrirá al Tribunal Constitucional por temas como el castellano, la escuela concertada y las de educación especial. Ayer, para más polémica, se aprobó la enmienda presentada por ERC de sustituir religión por cultura de las religiones en primaria y secundaria y como enseñanza no confesional. Esta reforma, de salir, ya será aplicable en el curso 2021-2022.

Al margen de estas polémicas, la ley llega para cambiar aspectos fundamentales en las metodologías, el currículum, la evaluación y la docencia en un proyecto muy ambicioso que va a requerir financiación. El compromiso es aumentar el presupuesto en educación hasta el 5% del PIB antes del 2025.

“El primer cambio que exige la educación es el del enfoque”, subrayó la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una de las comparecencias del Congreso. Hasta ahora, las leyes de educación se establecían en función de los objetivos que debían cumplir los niños en cada etapa, sin importar sus competencias personales, sus capacidades, orígenes y circunstancias socioeconómicas y culturales con las que nacían o crecían. De modo que los retos académicos prevalecían en una suerte de carrera de obstáculos para todos igual, aunque no partieran del mismo sitio.

Este esquema ha supuesto para muchos hogares una losa y una pérdida como sociedad. El riesgo de quedarse al margen es una realidad tanto para los alumnos con dificultades de aprendizaje como para los hijos de las familias menos favorecidas (por su origen, lengua, bagaje cultural familiar, recursos técnicos...), lo que termina para estos colectivos con altas tasas de abandono escolar, repeticiones de curso y menos posibilidades para progresar hacia una educación superior.

La novedad en la ley es “su enfoque” porque pone al niño como principio rector del sistema y responsabiliza a la escuela de que le acompañe en su progreso, encargándole que subsane desigualdades de partida, dando más refuerzo y oportunidades de aprendizaje, las considere en su evaluación y potencie sus competencias al máximo. La administración educativa seguirá la evolución del alumnado con pruebas sistémicas.

Así, se impone una nueva cultura de evaluación orientada a formar y no a sancionar. Se busca el progreso del alumno. Por tanto, las repeticiones serán excepcionales y se podrá pasar con materias suspendidas si los docentes, de forma colegiada, consideran que las materias no superadas permiten seguir con éxito el curso siguiente. Este “enfoque” ha abierto el debate sobre el riesgo de una rebaja académica.

La etapa 0-3 años es una de las claves tanto para la detección precoz de trastornos como para dotar al niño de contextos socioeconómicos desfavorecidos de conocimientos y hábitos equivalentes a los de un niño de familia media. Las carencias de aprendizajes esenciales en esta etapa, que en familias de contextos culturales medios ya se dan, predice la falta de éxito educativo futuro.

La norma quiere consagrar el ciclo de 0-3 años. Así, regula los requisitos mínimos del currículum, espacios, ratios y la titulación de los profesionales y centros estará bajo la supervisión de las comunidades autónomas. Asimismo, insta a las administraciones a incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años y el concierto con privadas hasta que existan suficientes plazas públicas. El presidente del gobierno anunció que se utilizarán fondos europeos para impulsar la creación de 60.000 plazas.

El proyecto de ley reduce también el currículum, tal y como se entiende actualmente, eliminando “contenidos enciclopédicos y memorísticos”, según describe la ministra de Educación, manteniendo las enseñanzas mínimas en cada etapa y dando un enfoque de aprendizaje por competencias e interdisciplinar, como se está incorporando en el sistema educativo catalán. El Estado marcará el 50% del currículum y las autonomías el restante (los centros también contarán con un porcentaje). En la Lomce, el porcentaje autonómico con lengua propia era del 45% del horario escolar.

La ley Celaá da un plazo de 10 años para avanzar en una escuela inclusiva y las escuelas de educación especial se convertirán en proveedoras de recursos. En Catalunya ya se aprobó el decreto de la escuela inclusiva en el 2017 aunque no se ha desarrollado.

Se exigirá la formación del profesorado en atención a la diversidad, la codocencia y las nuevas metodologías pedagógicas y los docentes podrán ser desplazados a tareas que no requieran la atención directa a los alumnos si se considera que no colaboran. Los titulados que vayan a ser docentes en centros educativos deberán pasar antes un periodo de MIR en una escuela, como los médicos en los hospitales.

En centros públicos en los que se imparten varias etapas educativas, los profesores de primaria podrán dar materias a los estudiantes de secundaria y los docentes especialistas de la ESO podrán contribuir en proyectos y prácticas de los de primaria.

Además, se introducen cambios metodológicos que promueven en todos los centros la atención personalizada, con metodologías activas como el aprendizaje por proyectos. En este sentido, en la ESO se rompe la clasificación de materias de la Lomce (troncales, específicas y de libre configuración) y todas tendrán el mismo nivel jerárquico. Se fomentará el uso de “ámbitos de conocimiento” que promueve la colaboración de docentes, como el científico matemático (matemáticas, física y biología) y da más libertad a los centros.

Por otra parte, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.

Como novedad, aparece el bachillerato a tres años. Por otra parte, la ley otorga mayor capacidad a las administraciones educativas de incidir en las pruebas de acceso en la universidad lo que abre la posibilidad de que las PAU sean más competenciales con su impacto en 2º de bachillerato.

Las novedades de la LOMLOE

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado este viernes su dictamen a la Lomloe o ley Celaá, la octava ley educativa de la democracia, que incorpora cambios al texto inicial a través de enmiendas sobre el castellano o los centros concertados, y que han puesto de relieve las discrepancias entre los partidos con representación parlamentaria.

A continuación se resumen algunas de las nuevas claves incorporadas:

Educación infantil

- El primer ciclo 0-3 tendrá carácter educativo con requisitos mínimos y propuesta pedagógica.
- Orientada a compensar los efectos de las desigualdades de origen cultural, social y económico en el aprendizaje infantil.
- Impulso a la detección precoz y atención temprana a las dificultades.

Educación primaria

- Autonomía de los centros para flexibilizar las áreas, metodologías, espacios y tiempos.
- Se recupera la organización de la etapa en tres ciclos.
- Educación en valores éticos y cívicos en el tercer ciclo.
- Podrá impartirse Cultura de las religiones como enseñanza no confesional.
- Inclusión educativa, atención personalizada y prevención de dificultades de aprendizaje.
- Medidas preventivas y limitadoras para reducir repeticiones.
- Fomento de la creatividad, las TIC, el aprendizaje competencial y el espíritu científico.
- Informes a la familia, de refuerzo en cada ciclo y al finalizar la etapa.

ESO

- Se eliminan los itinerarios y la jerarquía de materias.
- Se refuerza el acompañamiento para una transición exitosa entre la primaria y la ESO.
- Autonomía de los centros para agrupar materias en ámbitos interdisciplinares.
- Programa de diversificación curricular.
- Se limita la repetición, que pasa a ser un recurso excepcional.
- Podrá impartirse Cultura de las religiones como enseñanza no confesional
- Refuerzo de la orientación con perspectiva de género.

Bachillerato

- Se eliminan las reválidas y se recuperan las PAU.
- Estructura de bachillerato por modalidades.
- Se garantiza una oferta de materias mínimas y común a todos los centros.
- Las administraciones educativas regulan las condiciones para un bachillerato a tres años.
- Como excepción, se puede dar el título por compensación.
- Evaluación continua y diferenciada según las materias y según las necesidades de apoyo educativo.
- Refuerzo en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
- Facilita cursar FP de forma compatible con la actividad laboral.
- Renovación más ágil de contenidos y títulos ajustados al empleo y cambios productivos.
- Más flexibilidad en el acceso a la FP, elimina la edad y permite el acceso desde enseñanzas de régimen especial.
- Refuerzo de la orientación profesional con perspectiva de género.
- Impulso a la acreditación de la experiencia laboral y a pruebas de acceso con formato más flexible.
- Formación complementaria para completar títulos de FP media y superior.
- Creación de una red de centros para la transferencia de innovación y experiencias de éxito.

La asignatura de Lengua Cooficial pasará a llamarse Lengua Propia en la Ley Celaá

Es una concesión del PSOE y Unidas Podemos al PNV, que rehúye del concepto de "lengua cooficial" porque implica reconocer que hay dos lenguas y así se invisibiliza el castellano

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Sábado, 14 noviembre 2020

La asignatura de Lengua Cooficial y Literatura va a pasar a llamarse Lengua Propia y Literatura. Es una de las concesiones que PSOE y Unidas Podemos hicieron ayer al PNV en la Comisión de Educación del Congreso que dictaminó el proyecto de la Ley Celaá. Los nacionalistas vascos insistieron mucho en la importancia del concepto de «lengua propia», avalado por el Estatuto de Gernika, porque dicen que «confiere al euskera la significación de lengua vehicular de la enseñanza».

La enmienda aprobada ayer únicamente le cambia el nombre a la asignatura, que se denominaba Lengua Cooficial y Literatura desde los tiempos de la LOE del PSOE, pero da cuenta de hasta qué punto hilan fino los nacionalistas y cómo, poco a poco, van ganando la batalla de las palabras. Rehúyen el concepto de «lengua cooficial», porque implica reconocer que hay dos lenguas, y tratan de que se sustituya en el imaginario colectivo por el de una única «lengua oficial» en donde se invisibiliza el español.

Las 10 horas que duró la Comisión de Educación sólo sirvieron para incidir en este tipo de diferencias. Cada diputado insistió en lo suyo y no hubo lugar para acercar posturas. Ni siquiera se hizo alusión al comodín del pacto de Estado, que se ve más lejos que nunca. Hay diputados que ni se hablan. Se han roto todos los puentes. El dictamen de la ponencia fue aprobado por 20 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. A un lado, los partidos del Gobierno de coalición, Más País y sus socios nacionalistas. A otro, PP, Ciudadanos, Vox y UPN.

El PSOE rechazó las dos ofertas del partido de Inés Arrimadas, que ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a la retirada de la enmienda que borra la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza. Le propuso que o bien en la ley se recupere lo tachado o bien se blinde que el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial, como dicen los tribunales. Pero el PSOE votó en contra de las dos propuestas y no salieron adelante.

No prosperó la alianza entre el PNV y ERC para vaciar de contenido a la Alta Inspección del Estado, pero la aprobación del dictamen implica que este órgano ya no va a poder «velar por el cumplimiento de las normas» sobre el uso de las lenguas en las escuelas. Esta función ha desaparecido. Las familias que pidan más castellano ya no tendrán ninguna puerta del Estado a la que llamar.

«No hay nada más garantista que lo que recoge esta ley», proclamó ayer la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo, argumentando que la polémica disposición adicional 38ª hace mención a la Constitución. Pero la norma deja en manos de las CCAA garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, y la Generalitat de Cataluña -que también se refiere al catalán como «lengua propia»- se niega a asegurarlo.

La octava ley educativa de la democracia cede más competencias a las autonomías en otras cuestiones, como darles más capacidad para determinar los contenidos que estudian los alumnos. La Selectividad también ha perdido para siempre el rango de «única», un logro del que presumió ERC. Pero la norma se escabulle de lo esencial. No ha querido entrar a fondo a regular la profesión docente, asunto que tampoco quiso tocar el PP porque incomoda a los profesores. Tampoco fija ratios de alumnos por aula ni refuerza el aprendizaje de asignaturas como las Matemáticas.

SIN LÍMITE DE SUSPENSOS

El texto que será votado el jueves en el Pleno del Congreso reduce la repetición de curso a la mínima expresión, da el título de Bachillerato con suspensos y permite pasar en la ESO sin límite de materias pendientes. PP y Vox advirtieron que ésta es una «traición» a los alumnos en desventaja socioeconómica, porque «se rompe la labor de la educación como ascensor social».

Sergio Sayas, diputado de UPN, recalcó que la asfixia a la concertada va también «en contra de la igualdad de oportunidades, porque hace que sólo puedan ir a determinados colegios aquellos alumnos que tengan dinero para pagárselo».

No hubo avances este viernes respecto a la concertada y se consolidó un modelo que elimina la demanda social, considera que la pública es «el eje vertebrador» de la escuela, contempla una programación donde el aumento de plazas sea sólo para la pública, elimina la cesión de suelo municipal a los concertados y prevé repartir a los alumnos por los centros sin tener en cuenta la elección de las familias, ya que lo decidirá una comisión de escolarización que «velará» por la presencia equilibrada del alumnado «en situación desfavorecida».

La educación especial fue el centro de los momentos más tensos del debate de la primera ley educativa que se tramita sin dar voz a sus protagonistas inmediatos. De la retirada del concierto a la educación que separa por sexos se habló poco porque todos asumen que esa guerra se librará en los tribunales.

No prosperó la propuesta de Podemos, ERC, Bildu y Más País para sacar la Religión del currículo. A cambio, se aprobó una enmienda de ERC para crear un área aconfesional de Cultura de las Religiones, una idea copiada de la Loce de Pilar del Castillo (PP). La Religión seguirá dentro del horario escolar, aunque ya no

contará su nota para la media ni para pedir becas ni tendrá una asignatura alternativa, tal y como estaba en la LOE.

A cambio, todos los alumnos estudiarán contenidos de «Memoria Democrática» y una asignatura de Valores Cívicos y Éticos donde se aprenderá la Constitución Española.

"EMPATÍA HACIA LOS ANIMALES"

PSOE y Unidas Podemos escenificaron ayer sus discrepancias en torno a la materia de Ética, que los *morados* pedían incluir en 4º de la ESO. Les respaldaron PP y Vox en una insólita alianza, pero los socialistas respondieron que ya había muchas asignaturas y que, si quería incluir ésta, habría que quitar otra. Podemos no quiso aceptar la transaccional de sus socios de Gobierno y ello provocó que su propuesta no prosperara.

Más acuerdo hubo con los nacionalistas catalanes y gallegos y Más País al incluir que los alumnos de la ESO se formen en «empatía hacia los animales» -para «fortalecer sus capacidades afectivas con el planeta y los demás seres sintientes», según JxCAT- y en «conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad». Habrá educación afectivo-sexual ya desde Primaria y los colegios tendrán que fomentar en 4º de la ESO «la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio». Es decir, se intentará que no haya tantos chicos en Tecnología ni tantas chicas en Biología.



El PSOE rechaza el 25% de las clases en español

La Comisión de Educación aprueba el dictamen de la ley que deja fuera la Ética en la ESO, pero introduce Cultura de las Religiones

ROCÍO RUIZ. 14-11-2020

La «Ley Celaá» sigue aguantando embestidas y cumpliendo trámites. Ayer, la Comisión de Educación del Congreso ha dado el visto bueno al dictamen de la ponencia sobre la norma con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. El PSOE tiene los 176 votos que necesita para que salga adelante una ley orgánica como esta y, por eso, casi con toda probabilidad, recibirá el próximo jueves el visto bueno del pleno de la Cámara.

Con los votos ya en la mano, el PSOE no está dispuesto a dar marcha atrás y a hacer cambios en la enmienda pactada con Podemos y ERC, que arrincona el castellano y evita que sea lengua vehicular en la educación en aquellas comunidades que tienen lengua propia. Ni aceptó el lunes el ultimátum de Inés Arrimadas para apoyar los Presupuestos, ni tampoco ayer tuvo en cuenta la propuesta de mínimos que ha presentado la formación naranja en su intento por salvar al castellano.

Los naranjas plantearon al PSOE una enmienda transaccional en la que se incorporaba que el castellano «es la lengua oficial del Estado» y que tanto el español como las lenguas cooficiales «tienen la consideración de las lenguas vehiculares», es decir, propone una vuelta al texto inicial del proyecto de ley.

Pero por si esta propuesta no satisfacía a los socialistas, había presentado otra alternativa a incorporar en el proyecto de ley: que el 25% de la formación que reciben los alumnos la hagan en castellano con independencia del modelo lingüístico que determine cada comunidad autónoma. El porcentaje incluido no supone más que el reconocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que establece que el 25% de la enseñanza en las comunidades con lengua cooficial debe ser en castellano (dos asignaturas). «Estamos planteando un mínimo de respeto al consenso mantenido durante años, es un derecho y un deber reconocido en la Constitución ¿o se va a vender el PSOE al nacionalismo?», dijo la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín. La diputada de Cs tildó la ley que se está tramitando en la Cámara como de «dudosa garantía democrática», que arrastra «vicios de tramitación y es una vergüenza». Su partido ya ha anunciado que va a acudir al Constitucional, lo mismo que el PP y Vox.

Los de Abascal también hicieron una encendida defensa del castellano. «Parece mentira la traición del PSOE y esa maniobra de entreguismo para romper la patria utilizando la educación», dijo el diputado Joaquín Robles.

En diez horas de comisión, la labor fundamental se centró en aprobar más de un millar de enmiendas de todos los grupos políticos, pero aún hubo un debate intenso sobre la educación especial. «Con sus medidas hundirán al más débil», echó en cara a Podemos la diputada del PP, Sandra Moneo, que lamentó que el texto hable de inclusión pero no de equidad. La derecha teme que se vacíen los centros de educación especial y se obligue a los padres a llevar a sus hijos a centros ordinarios. Pero desde la izquierda rechazaron «el mantra» de los populares. «La ley no dice lo que ustedes dicen que dice», replicó la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo.

La concertada también fue otro de los asuntos que concitó mayor debate. Podemos sacó pecho por que el proyecto de ley se ha endurecido para este modelo educativo gracias a sus aportaciones y desde Más País,

Inés Sabanés llegó a reclamar mayor transparencia de la concertada. «Que los padres sepan si las cuotas que cobran son excluyentes o no», apuntó. Pero el bloque de la derecha volvió a calificar la reforma de un «atentado con la libertad».

Aunque las líneas fundamentales de la Lomloe no se han modificado respecto al texto de la ponencia, ayer se introdujeron algunas enmiendas que cambian el texto. La Filosofía y, en concreto, la materia de Ética, que se estudia en 4º de la ESO, no se seguirá impartiendo. Ayer Podemos intentó rescatar la materia en el currículo, pero el PSOE votó en contra con el argumento de que en 4º de la ESO «los alumnos tienen ya demasiadas asignaturas», dijo Martínez Seijo. Pero no todo perdido. El PP intentará negociar de cara al pleno una transaccional. Si se introduce Cultura de las Religiones, por iniciativa de ERC, una materia reclamada por los profesores de Religión.

Tampoco ha sufrido modificación alguna la petición de Ciudadanos de que se incorpore la palabra “prueba” de la redacción del texto y se sustituya por “valoración” en el acceso a la Inspección educativa. Con la redacción final del texto Cs cree que no se garantiza que se acceda al Cuerpo a través del concurso-oposición. Esto indigna al sindicato de inspectores USIE, que considera que iría en contra del Estatuto Básico del Empleado Público y está dispuesto a ir a los tribunales. La portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, garantizó que el acceso seguirá siendo por oposición, aunque no quede recogido en el texto de manera literal la palabra “prueba”.

EL PAIS

La ‘ley Celaá’ y el español en Cataluña: ¿cesión política o acuerdo inocuo?

La eliminación del castellano como lengua vehicular en la ley educativa carece de efectos inmediatos pero supone un espaldarazo a las tesis nacionalistas

VERA GUTIÉRREZ CALVO. MADRID - 15 NOV 2020

El castellano va a desaparecer como “lengua vehicular de la enseñanza” en el texto de la nueva ley de Educación. Ese cambio —exigido por ERC, apoyado por Unidas Podemos y aceptado por el PSOE— significa que la ley orgánica ya no dirá, al menos expresamente, que el castellano debe ser una de las lenguas que se usen para impartir las asignaturas en la escuela, algo que la ley sólo recogía desde 2013 y que en estos siete años tampoco ha servido en la práctica para que el castellano sea vehicular en la única comunidad en la que no lo es: Cataluña. La expresión “lengua vehicular” se sustituye por una más genérica: el derecho a “recibir enseñanzas” en castellano. ERC lo reivindica como un triunfo, y Podemos celebra que “blinda el modelo catalán de inmersión lingüística” (donde sólo figura el catalán como vehicular). Pero la cuestión no es tan sencilla, porque, aunque la ley orgánica ya no lo diga, el Tribunal Constitucional y el Supremo sí han dicho reiteradamente que el castellano debe ser vehicular, y esas sentencias —que en Cataluña no se cumplen— siguen ahí.

Lo sucedido esta semana en la comisión de Educación del Congreso, que aprobó la enmienda de ERC, PSOE y Unidas Podemos que ahora será elevada a pleno, viene a dar así otra vuelta de tuerca a una situación que viene de lejos. Y lo hace en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno, en la que los votos de ERC se han vuelto fundamentales para el Ejecutivo. Ciudadanos ya ha amagado con no apoyar las cuentas si la “enmienda del castellano” se mantiene, y, al igual que PP y Vox, la recurrirá al Constitucional.

La consecuencia práctica de esta enmienda, a corto plazo, es ninguna; sobre las consecuencias a medio o largo plazo, los expertos consultados discrepan.

La negociación: una exigencia de ERC

El proyecto de ley inicial del ministerio de Isabel Celaá mantenía la condición de “lengua vehicular” para el castellano (introducida por el PP en 2013). Incluía también el recordatorio de que el castellano es la “lengua oficial del Estado”. Ha sido ahora, en la negociación parlamentaria y tras la presión de ERC, cuando el ministerio ha renunciado a defender esas dos frases, que desaparecen del proyecto de ley. El portavoz de Unidas Podemos en la comisión, Joan Mena, lo explica: “Le dijimos al PSOE: necesitamos a ERC. Y acordamos que presentaríamos una enmienda conjunta”. Montserrat Bassa, portavoz del partido independentista, confirma: “Para ERC era una condición indiscutible desactivar ese punto de la *ley Wert* para blindar nuestro modelo de inmersión. Lo advertimos: sin eso, no íbamos a seguir hablando del resto del proyecto. No fue fácil, pero no podemos quejarnos del resultado”. Junts per Catalunya no apoyó la enmienda, por considerarla, aun así, insuficiente.

El párrafo de la ley, una vez enmendado, recoge que “las administraciones educativas” garantizarán el derecho de los alumnos “a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales”, sin aclarar el alcance de esas “enseñanzas”, es decir, si irán más allá de la propia asignatura de Lengua Castellana.

“Desde 2013 había una inseguridad jurídica: la ley autonómica catalana decía una cosa —solo el catalán es vehicular— y la orgánica decía otra —el castellano también lo es—. A partir de ahora quedará blindado el modelo de inmersión: porque lo dice Cataluña pero también porque lo dice España”, interpreta Mena.

La portavoz del PSOE en la comisión, Luz Martínez Seijo, defiende el cambio de posición de su partido. “Hemos querido buscar una redacción que evite los problemas que trajo la ley de 2013 y recoja el sentir plural”, dice. Ella sostiene que el de la vehicularidad es un “debate ficticio” porque el “objetivo” importante a preservar es que “todos los alumnos adquieran plena competencia en ambas lenguas”; eso, remarca, se ha incluido en la ley, dejando en manos de las autoridades educativas “los instrumentos de control, evaluación y mejora” para garantizarlo. Cuando se le pregunta si el cambio respondió a una exigencia expresa de ERC, la socialista contesta: “No voy a hablar de los detalles de una negociación. Cuando se negocia, no se negocia un artículo sino toda una ley”. Y a la pregunta de qué hacer con la sentencia del Constitucional que obliga a que el castellano sea vehicular, afirma: “Desde que somos Gobierno estamos intentando pacificar en estos conflictos lingüísticos. No miramos hacia el pasado sino hacia el futuro”.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, admite que, aunque el ministerio que dirige Isabel Celaá decidió inicialmente mantener el castellano como lengua vehicular, pronto les llegó “el aviso de que era un tema que generaba polémica”. Y resta importancia al tijeretazo posterior: “Esta cuestión genera muchas pasiones, pero nosotros nos centramos en el aspecto educativo: la garantía de que los alumnos deben terminar la escolarización con pleno dominio de ambas lenguas. Y siempre remitiéndonos a la Constitución”. ¿Cómo lograr ese pleno dominio si las clases son solo en una lengua, y cómo verificarlo? “Habrá que buscar una fórmula de evaluación”.

El contexto: la excepción catalana

El castellano, lengua oficial del Estado, es vehicular en la enseñanza en toda España, en distinto grado según las comunidades, salvo en Cataluña (en el País Vasco hay una opción en euskera, pero es optativa). En Cataluña, la ley autonómica, de 2009, sólo recoge el catalán como vehicular. Una situación que se mantiene desde hace casi tres décadas, cuando se instauró el modelo de inmersión lingüística, apoyado por la mayoría de los partidos catalanes. Eso quiere decir que las asignaturas —Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Química...— son impartidas en catalán, y solo las clases de Lengua y Literatura Castellana se dan en castellano.

Ninguna ley orgánica (nacional) de Educación dijo nunca expresamente que el castellano debía ser lengua vehicular. Hasta 2013. En ese año, el ministro del PP José Ignacio Wert lo incluyó en su ley, después de que la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut subrayara —aunque no era la primera vez que lo decía— que en Cataluña tanto el catalán como el castellano debían ser vehiculares, y que el Supremo añadiera que correspondía a las autoridades educativas decidir la proporción de cada una. Algo que la Generalitat nunca ha hecho. Esa *ley Wert*, por tanto, tampoco cambió nada en la práctica. El Govern se limita a esgrimir su ley autonómica, cuyo artículo 11 —el que establece la condición de vehicular del catalán y no del castellano— no ha sido recurrido por nadie y por tanto está en vigor.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña, la mayoría de la población catalana tiene el castellano como lengua madre (el 52,7%, frente al 31,5% que tienen como lengua madre el catalán, con datos de julio de 2019). También el castellano es mayoritario en Cataluña como lengua de identificación, la que los encuestados consideran como suya (46,6% frente al 36,3% del catalán), y es la principal lengua habitual (48,6% frente al 36,1%).

Cataluña es el único territorio bilingüe de Europa —a excepción de las Islas Feroe, según varios expertos— en el que sólo una de las dos lenguas oficiales es lengua docente.

Las consecuencias: un mensaje político

¿En qué cambiará la situación actual por el hecho de que la ley orgánica deje de mencionar al castellano como “lengua vehicular”, algo que tampoco hacía hasta 2013? “No creo que cambie mucho. La ley catalana dice lo que dice. Y las sentencias tampoco se pueden ignorar. El marco jurídico de la situación sigue siendo el mismo”, opina Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. “Es un cambio más simbólico que real... Igual que lo fue cuando Wert lo incluyó en su ley”, coincide Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en Santiago de Compostela y defensora de la inmersión. “El Constitucional ha dicho que en Cataluña debe haber dos lenguas vehiculares, no ha dicho que eso no se esté haciendo. Y la ley catalana está en vigor. Los tribunales no pueden obligar a Cataluña a legislar de una determinada manera”.

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Complutense, experto en políticas educativas y muy crítico con el modelo catalán, discrepa. Él también piensa que el principal efecto de la enmienda es político —“los nacionalistas se sentirán reforzados, mientras que aquellos que piden la covehicularidad en Cataluña reciben el mensaje de que el Gobierno no va a estar de su lado”, dice—; pero apunta que las consecuencias podrían ir más allá: “Es cierto que las sentencias que dictan que el castellano debe ser vehicular están ahí y deberían cumplirse, pero el tiempo pasa, y en algún momento este mismo tribunal u otro podría cambiar el paso en su interpretación, y decidir tener en cuenta que la voluntad del legislador ha sido esta, que hubo una opción de apostar por la covehicularidad y se abandonó. ¿Ocurrirá? Imposible saberlo”.

ÉXITO O FRACASO DEL MODELO DE INMERSIÓN

Los defensores del modelo de inmersión catalán arguyen que los resultados lo avalan, y que los escolares catalanes tienen una comprensión lingüística y un dominio del castellano igual o superior a la media española. El pedagogo Jaume Carbonell, que dirigió durante años la revista Cuadernos de Pedagogía, afirma: “Lo importante, lo que hay que garantizar, es que al término de la escolarización todos los niños dominen ambas lenguas. Y este modelo lo garantiza”. Quienes reivindican un modelo bilingüe replican que ese argumento es una falacia porque en España no hay evaluaciones homologables para todos los territorios. “Los exámenes de PISA se hacen en catalán. Y la Selectividad, que sí tiene una prueba de castellano, la hace la Generalitat, con lo que su umbral de exigencia es discutible”, dice José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y vocal de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB). Coincide con él Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada, experto en Economía de la Educación y autor, junto a Álvaro Choi, de un estudio de 2019 que, con datos de PISA, concluía que el modelo de inmersión perjudica a los niños de familias castellanoparlantes. Calero se pregunta cómo puede sostenerse que “milagrosamente” los alumnos obtienen un dominio del castellano similar al del catalán si todas las clases las reciben en catalán. El sociólogo Mariano Fernández Enguita sostiene que el modelo catalán es una herramienta en manos del nacionalismo, y apunta: “Si el objetivo fuera sólo resultadista, ¿por qué no permitir la enseñanza en casa?”. “Cooficialidad significa covehicularidad. La mal llamada inmersión, que es en realidad sumersión, pretende instaurar la idea de una lengua de culto y otra vulgar”. La lingüista Mercè Vilarrubias, que critica “los términos del debate, politizados por parte de todos los partidos”, lamenta que el modelo educativo catalán esté siendo utilizado “al servicio de la idea de ‘una sola lengua’”. “Para decir ‘vamos a trabajar en las dos lenguas’ tienes que sentir que las dos son tuyas”, subraya.

SENTENCIAS INCUMPLIDAS

En Cataluña solo el catalán es lengua vehicular en la escuela, en contra de lo que han determinado varias sentencias a lo largo de los años. Son estas:

- *El precedente de 1994.* El Tribunal Constitucional avaló en 1994 la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat de 1983. Aquel fallo afirmaba: “Es legítimo que el catalán [...] sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso”. Y subrayaba que esto implicaba “no solo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente”.
- *“Constitucionalmente obligado”.* Fue en junio de 2010, en la sentencia sobre el Estatuto catalán, cuando el Constitucional se mostró más tajante: “Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares”, dictó. E insistía: “Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular”.
- *El Supremo insta a la Generalitat.* A esa sentencia siguió en diciembre de 2010 otra del Tribunal Supremo, que, refiriéndose específicamente a los recursos de tres familias, les daba la razón e instaba a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza” a lo dicho por el Constitucional, reintroduciendo el castellano “como lengua vehicular de la enseñanza”. Le emplazaba, además, a fijar ya la proporción de vehicularidad de cada lengua. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo lo mismo poco después, pero la Generalitat respondió con el silencio y siguió adelante con su modelo.
- *Un goteo de resoluciones.* Finalmente, y ante los recursos presentados por varias familias —unas 80, según la Asociación por una Escuela Bilingüe—, el Tribunal Superior de Cataluña decidió fijar por su cuenta un porcentaje “mínimo”: al menos el 25% de las materias, y al menos una troncal, debían impartirse en castellano. El Supremo ratificó en 2015 esa proporción mínima. Desde entonces, un goteo de resoluciones ha ido reconociendo ese 25% a las familias que pleitean, pero la sentencia sólo se aplica a la clase del escolar cuya familia lo ha reclamado, no a todo el colegio y mucho menos a todo el sistema educativo.
- *Una norma no recurrida.* En 2019, el Constitucional avaló la mayor parte de la Ley de Educación de Cataluña de 2009. El PP había recurrido varios artículos de esa ley, pero no precisamente el artículo 11, el que menciona únicamente al catalán como lengua vehicular. Así que el Constitucional no se pronunció sobre eso. Sí dejó dicho en la sentencia, no obstante, que es “consolidada doctrina” que el castellano debe ser vehicular.

LA INFORMACIÓN

El 'misil' de la ley Celaá pone al borde del abismo a la educación concertada

Los centros concertados denuncian agravios en su contra y señalan que la nueva reforma educativa limita la libertad de enseñanza al eliminar el criterio de “demanda social” para determinar las plazas.

MARÍA LEÓN ESCRIBANO. 15.11.2020

El ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, avanza a base de polémicas y división hacia la aprobación de la nueva reforma educativa que implica la LOMLOE. La denominada 'Ley Celaá' ha abierto una brecha entre los centros educativos públicos y los concertados y privados, dejando de manifiesto que las sensibilidades respecto a la nueva ley y la concepción de educación entre ambos es diferente: la educación concertada se rebela ante los agravios en su contra que -afirman- se incluyen en el texto legislativo y que amenaza su supervivencia, mientras la pública defiende su labor como "pilar básico de la educación".

El punto clave que ha movilizado a los centros concertados es la supresión de la demanda social como criterio para aumentar sus plazas. De esta manera, se incluye la posibilidad de que las administraciones educativas, a través de comisiones u órganos de garantías de admisión, determinen la admisión de alumnos cuando la demanda de plazas supere la oferta. El objetivo -aseguran desde el ministerio- es velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, desde la plataforma 'Más Plurales' afirman que esa decisión pone en riesgo su continuidad ante la reducción de plazas que habrá.

Jesús Muñoz de Priego, portavoz de esta plataforma a favor de "una escuela plural y democrática", denuncia que la principal consecuencia será la reducción de los centros concertados. "Supone la pérdida de unidades concertadas con demanda social en beneficio de la pública sin demanda social". Una situación que, según afirma, ya se está dando "en comunidades con gobiernos socialistas o en coalición con Podemos". "La ley pretende dar argumento jurídico a estas actuaciones", añade. En ese sentido, los centros concertados Claretianos destacan la medida que "pone en grave peligro el futuro de varios miles de colegios concertados y amenaza los puestos de trabajo de decenas de miles de educadores".

José Luis Andrés, director del colegio concertado Santa María del Pilar Marianistas, asegura que con la reforma el número de plazas que habrá en cada centro dependerá de la administración, "no tenemos forma de decidir aunque nuestra capacidad sea mayor". Aún así, explica que ante esta situación los tribunales ya les han dado la razón porque va en contra de la "libertad de elección, marcada en la Constitución".

Los centros concertados y privados, englobados en la plataforma 'Más Plurales', valoran la reforma educativa como "desastrosa en todos los aspectos" y, además, señalan que la imposibilidad de elegir centro educativo "limita la libertad de enseñanza y de elección de las familias". Esta limitación afirman es una consecuencia del "intervencionismo del Estado" que repercute sobre "la libertad y la democracia". Una cuestión que, dicen, no solo afecta a centros concertados, "los alumnos de los públicos tampoco van a poder elegir".

Sin embargo, esta denuncia contra la libertad no la comparten desde la educación pública. La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) afirma que la interpretación de la eliminación del término de 'demanda social' es "una cuestión política, de enfoque". Su presidente, Raimundo de los Reyes, defiende la educación concertada como "un complemento necesario y útil, pero la pública debe ser siempre el pilar esencial". En ese sentido, exige garantizar que "la oferta concertada da la misma respuesta que el Estado", a través de la educación pública. Pese a los mismos parámetros que deben cumplir concertada y pública, FEDADI marca distancias: "Los políticos hablan como tres enseñanzas, pero la concertada es privada".

Esta diferenciación no la hace Carmen Pellicer, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema que gestiona varios centros concertados, quien defiende que "la educación concertada es tan pública como la estatal". En ese sentido, señala que la concertada es un modelo de gestión a través del cual "se organiza la sociedad civil para gestionar un bien público". "El Estado debe garantizar la pluralidad", añade

Se eliminan las cuotas a los centros concertados

Por otra parte, la ley también prevé que los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias. Este cambio, según el portavoz de 'Más Plurales', "solo desvía la atención, nuestra financiación no cambia". Defiende que los centros concertados están "sostenidos con fondos públicos y los servicios educativos básicos son gratuitos".

Sobre esta cuestión el director del colegio Santa María del Pilar Marianistas pone el foco en el concierto educativo, que "no llega a cubrir el coste de la plaza escolar". Para subsistir "contamos con cuotas voluntarias, los padres están de acuerdo, pero si se prohíbe ese voluntarismo, los colegios serían insostenibles". No obstante, afirma que no todos los alumnos cuentan con el mismo nivel económico y algunos centros concertados cuentan con becas, "más allá de las becas estatales". La situación es más complicada actualmente por la crisis que atraviesa el país y por eso insiste en "ajustar el precio del concierto educativo". Aún así, subraya que "el problema es más político que real, en Zaragoza si el colegio está dentro de su zona puede venir".

En relación a la financiación de la educación concertada, Pellicer se muestra de acuerdo con eliminar las cuotas, pero subraya que "siempre que la financiación sea equiparable para todos los alumnos". Afirma que el objetivo de estos centros "no es enriquecerse" y que la dotación de sus alumnos es "dos tercios menor que los de la pública".

La comunidad educativa coincide en la falta de consenso

Más allá de las polémicas por las interpretaciones de la 'ley Celaá', todas las partes de la comunidad educativa coinciden en señalar la falta de consenso en la nueva reforma educativa. "Lejos de lograr el consenso, no ha favorecido ni el diálogo", afirma Muñoz de Priego. En la misma línea se manifestaron los sindicatos de docentes ANPE, CSIF y CCOO. Tras reunirse con Educación, lamentaron que primasen "los intereses políticos frente al interés general y que no se haya tenido en cuenta a los representantes de los docentes en esta nueva reforma educativa".

"Lo que me temo es que no va a dar estabilidad porque no nace con el consenso suficiente", afirma el presidente de FEDADI. Un pacto de estado por la educación es una de las reivindicaciones del sector para dar estabilidad y "sería un factor de mejora porque los resultados serían más buenos, pero los políticos no terminan de aceptarlo". Una ley consensuada debería prolongarse 20 años, asegura de los Reyes, pero, por el contrario, España, hasta ahora, ha ido encadenando una nueva reforma educativa en cada legislatura. José Luis Andrés también defiende la importancia de un pacto educativo al margen de la situación política de cada momento para asegurar "una educación de calidad", en la línea de la presidenta de la Fundación Trilema, que reivindica "voluntad de pacto" para que la educación deje de ser "un arma política".

En relación a la necesidad de consenso, el informe sobre España del Monitor de la Educación y la Formación de 2020, que este jueves publicó la Comisión Europea para todos los Estados miembro, subrayó que el éxito de las medidas que puedan adoptarse en el ámbito educativo "dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero". La ley Celaá terminó este viernes su paso por la Comisión de Educación del Congreso, tras votar el dictamen sobre las cerca de 300 enmiendas parciales añadidas al texto que después deberá pasar al Pleno del Congreso. Tras este trámite llegará al Senado y finalmente volverá a la Cámara Baja para ser votado como ley definitivamente.



Si quieres que tu hijo tenga más memoria y aprenda mejor, no descuides su escritura manual

Los estudios demuestran que la escritura mejora la memoria; los estudiantes retienen mejor el aprendizaje cuando trabajan con nuevas ideas a través de la escritura a mano en vez de teclear

Carlota Fominaya. MADRID.15/11/2020

Neuroinvestigadores y psicopedagogos están de acuerdo en que escribir a mano tiene evidentes ventajas frente al teclado. Entre ellas, la de favorecer un mejor conocimiento de la ortografía, una mayor facilidad y fluidez en la redacción de textos, mayor capacidad y comprensión lectora y mejora de la memoria. Pero la realidad es que la escritura a mano tiende a usarse cada vez menos en el mundo educativo. La experta Eirini Petratos, senior user research manager de BIC, nos explica las múltiples razones para mantener esta habilidad, «como herramienta fundamental para la alfabetización, pero también para el desempeño de las matemáticas».

Según recuerda Petratos, hay múltiples investigaciones que muestran que la fluidez en la escritura está fuertemente relacionada con la calidad y cantidad de textos complejos de los estudiantes. Especialmente, resalta, «la escritura cursiva (o itálica), que puede activar partes del cerebro vinculadas con la fluidez del lenguaje. De hecho, la escritura cursiva reduce las distracciones aumentando el enfoque y fomenta la creatividad. Por lo tanto, es importante no solo seguir usando la escritura a mano en el sistema español, sino también aprovechar su uso para facilitar el proceso de aprendizaje», advierte.

La realidad es que los niños cada vez usan más las pantallas dentro y fuera del colegio pero, ¿por qué es tan importante que los niños sigan escribiendo a mano?

La escritura a mano es muy importante para los niños y su desarrollo cognitivo, ya que activa el cerebro más que el teclado e involucra habilidades motoras y cognitivas más complejas. Además, una buena escritura a mano contribuye a leer con fluidez porque activa la percepción visual de las letras. Asimismo, los niños que experimentan dificultades para dominar la escritura a mano pueden evitar escribir y, por lo tanto, producir un trabajo escrito deficiente. A estos niños les resultará difícil corregir su propio trabajo y es posible que les cueste detectar sus propios errores; además, su confianza puede decaer aún más. Los examinadores deben descifrar lo que está escrito. De lo contrario, los alumnos pueden conseguir notas más bajas, incluso cuando el contenido sea bueno. Muchas de las evaluaciones estandarizadas a nivel estatal y ensayos sobre escritura a mano enfatizan la importancia de la escritura manual. Sin una rápida y legible escritura a mano, los estudiantes pueden perder oportunidades de aprendizaje y tener un rendimiento académico insuficiente.

¿Por qué es tan importante la grafomotricidad y por qué hay que trabajarla toda la vida?

Las habilidades grafomotoras son aquellas que requieren un alto grado de precisión control que deben adquirirse gradualmente a través de la práctica a lo largo de la vida. Las investigaciones muestran que las habilidades grafomotoras comienzan en las primeras etapas de la infancia, por lo que los niños adquieren gradualmente el dominio del espacio y los instrumentos. Lo primero que aprenden son los movimientos de las pinzas y el agarre de diferentes objetos que se hacen cada vez más pequeños. Con el tiempo, estos procesos se automatizan, lo que permite a los niños profundizar y mejorar el nivel de delicadeza y precisión necesarios para escribir correctamente. Los buenos instrumentos de escritura pueden ayudar con este proceso.

¿Cómo incide esto en el aprendizaje?

El cerebro se involucra de manera diferente cuando escribimos algo a mano a diferencia de cuando lo hacemos a través de un teclado o tocando una pantalla. Los estudios demuestran que la escritura mejora la memoria; los estudiantes retienen mejor el aprendizaje cuando trabajan con nuevas ideas a través de la escritura a mano en vez de teclear.

Además, la investigación muestra que hay algo especial en el desarrollo del lenguaje y en el acto de escrito a mano. En algunos estudios, los niños que practican la escritura manual se desenvuelven mejor en lectura y ortografía. Algunos expertos creen que formar letras a mano mientras se aprenden sonidos activa circuitos de lectura en el cerebro que promueven la alfabetización.

¿Se activan distintas regiones del cerebro al escribir a mano que al teclear?

Sí. En general, el hemisferio izquierdo controla el habla, la comprensión aritmética y la escritura. El hemisferio derecho controla la creatividad, la capacidad espacial, las habilidades artísticas y musicales. Durante las tareas de mecanografía y escritura se activan tres regiones del cerebro: el lóbulo parietal superior izquierdo, la circunvolución supramarginal izquierda y la corteza premotora izquierda cerca del área de Exner.

¿Es cierta la creencia de que escribir apuntes ayuda a aprender, a memorizar?

La escritura a mano aumenta la actividad neuronal en ciertas secciones del cerebro, de forma similar a la meditación. Qué duda cabe de que la escritura agudiza el cerebro y nos ayuda a aprender. La investigación muestra que escribir a mano es bueno para mantener la materia gris en forma e incluso puede influir en nuestra forma de pensar. Los movimientos secuenciales de la mano, como los que se utilizan en la escritura manual, activan grandes regiones del cerebro responsables del pensamiento, el lenguaje, la curación y la memoria de trabajo.

Sin embargo, cada vez nos alejamos más de la escritura, y cada vez tecleamos en mayor cantidad y con mayores errores ortográficos en simples mensajes de texto, correos electrónicos... Escribir a mano, ¿favorece también una mejor ortografía o redacción?

Cada vez hay más datos que sugieren que un componente motor podría estar involucrado aún más en la adquisición ortográfica. Los movimientos específicos memorizados al aprender a escribir participan en el establecimiento de representaciones ortográficas en la memoria.

Además, la investigación muestra que el aprendizaje de la ortografía es más eficiente cuando está mediado por la escritura a mano que por otras prácticas como la ortografía en voz alta, cualquiera que sea la tarea de producción posterior a la prueba.



La Comunidad de Madrid dejó de invertir 55 millones en la educación pública en 2019

Sin embargo, el gasto aumentó en más de 50 millones en los centros concertados y subió en un millón de euros la partida destinada a pagar a los profesores de religión

LAURA GUTIÉRREZ. Madrid. 16/11/2020

La Comunidad de Madrid dejó de invertir 55.750.000 euros en la escuela pública del presupuesto inicial que se aprobó para los centros educativos públicos en 2019. Ese dinero quedó guardado en un cajón meses antes del inicio de la pandemia. Según denuncia el PSOE tras analizar la ejecución presupuestaria del año pasado, las partidas afectadas fueron las becas, las escuelas infantiles y la inversión en infraestructuras educativas donde el presupuesto, de por sí, ya es bastante bajo.

El gobierno regional dejó de gastar 46 millones de euros destinados a becas de alumnos de centros públicos. "Esto significa menos ayudas en transporte, menos ayudas en comedor o menos ayudas en educación infantil", explica a la SER Marta Bernardo, diputada socialista en la Asamblea y portavoz de educación del grupo del PSOE. Sin embargo, la consejería de educación explica que ese dinero se dejó de gastar en el programa Accede, de gratuidad de libros de texto, porque se presupuestó al alza y al final hubo

menos familias que se sumaron a este programa de préstamo gratuito. Ese dinero no se gastó. Tampoco los más de siete millones y medio de euros que se iban a invertir en la gratuidad de los centros de 0 a 3 años. Además, se guardaron en un cajón unos dos millones que iban a destinarse a infraestructuras educativas, a centros que están a medio construir o con fases planificadas. Son centros que, en su mayoría, este curso han tenido que pedir aulas prefabricadas para poder cumplir con las medidas de seguridad del Covid.

"Tan solo ha habido un gasto de 80 millones de euros en infraestructuras educativas", asegura Marta Bernardo, "lo que corresponde al 0,006% del presupuesto total de la consejería de educación. Según la portavoz de educación del PSOE en Madrid, "cualquier presupuesto y los expertos lo saben, en el gasto, en la inversión, es donde se ve la gestión de una consejería y este 0,006 resumiría la gestión que se está haciendo en la consejería de educación". Llama la atención del grupo socialista que en el caso de los centros privados subvencionados con fondos de la Comunidad, la balanza se inclinó. El gasto aumentó en más de 50 millones del presupuesto inicial fijado para estos centros concertados. "Una clara apuesta por un modelo educativo que nada tiene que ver con la educación de calidad que todos los madrileños se merecen", sentencia Bernardo.

Al PSOE le ha llamado especialmente la atención el gasto ejecutado en el capítulo I, referente al personal a cargo de la consejería de educación. "En la liquidación del presupuesto de 2019 en este capítulo, todas las partidas son aminoradas excepto dos: el incremento de más de un millón de euros en profesores de religión y el incremento en todas las partidas de los altos cargos de la consejería", explica la diputada socialista.

LA VANGUARDIA

El frío que viene... en el aula

Abrigos, bufandas y mantas, el nuevo material escolar en los colegios

JAVIER RICO, LLEIDA. 16/11/2020

"Qué si vamos a pasar frío este invierno en la escuela?" Sí, esa es la pregunta. Viene a cuento por la obligación de ventilar de forma periódica las aulas para prevenir contagios de la Covid-19 entre los alumnos. "Pues le respondo: a no ser que tengamos un invierno cálido, no tenga ninguna duda de que alumnos y profesores van a pasar frío los próximos meses en buena parte de los colegios de Catalunya".

El augurio, contundente, lo hace Pilar de Lara, directora del colegio público Parc del Saladar de Alcarràs (Segrià). En esa zona, como otras muchas del interior de Catalunya, ha hecho aparición la niebla y escolares y profesores empiezan a notar ya en sus carnes la factura climática del protocolo de ventilación. Todos, alumnos y docentes, tienen a mano sudaderas y abrigos para no tititirar cuando se abren las ventanas y puertas (varias veces al día) para que corra el aire por esas aulas.

Belén Tascón, presidenta de Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) parece tener también muy claro el futuro que se avecina, con esto de la ventilación, en los espacios educativos. "Ya sabemos de alumnos que empiezan a pasar frío en las aulas y aún no ha llegado el crudo invierno", alerta.

Tascón entiende, como la mayoría de directores de centros, que haya que ventilar las aulas. Nadie cuestiona las normas sanitarias impuestas para prevenir contagios del virus en el ámbito educativo. Pero lo que ha vuelto a sacar de sus casillas a la aFFaC con el tema de airear las clases "es que se deje otra vez solos a los colegios para que capeen ellos con todos los temporales que se avecinan con esta pandemia".

La presidenta de la entidad critica que con la ventilación de las aulas "está pasando lo mismo que ha ocurrido con la polémica sobre quién tiene que hacer las PCR a los escolares, o las distancias y uso obligatorio de mascarillas en las clases". Se dicta la norma, recalca Tascón, "y nadie se preocupa después de asesorar para que esos protocolos sean viables y puedan cumplirse".

Y si no que le pregunten a la directora del colegio de Alcarràs, Pilar de Lara. La realidad de este centro público del Baix Segre se repite en otros muchos centros de Catalunya. "Aquí tenemos 29 grupos; un total de 535 alumnos y todos los espacios están más que ocupados", afirma la docente.

¿Sacar a los alumnos del aula y llevarlos a otro sitio mientras la clase se ventila y vuelve a calentarse? Sería la mejor opción, "pero imposible en la mayoría de colegios que no han conseguido espacios alternativos, pese a las promesas de las autoridades educativas", critica Belén Tascón.

Así que la mayoría de alumnos siguen sentados en sus pupitres mientras el aire corre por las aulas con todas las ventanas abiertas de par en par cuando toca ventilar. ¿La solución para protegerse del frío? "Venir a clase con ropa de abrigo", como hacen la mayoría de escolares que viven en zonas donde ya asoma el invierno con las primeras nieblas. Es el caso de Alcarràs, un centro con escolares de edades comprendidas entre los 3 y 12 años.

Otra opción es pedir a los alumnos que pongan en sus mochilas una manta. Algunos centros ya han hecho llegar a los padres esta recomendación. Belén Tascón considera que esa opción "es la confirmación del problema, pues pedir a los alumnos que se pongan una manta encima cuando están en clase es lo mismo que decirles que se preparen porque van a pasar frío de verdad". La presidenta de aFFaC insiste que "así no se puede educar".

Pilar de Lara tiene claro que cuando llegue el frío de verdad (lo que ocurre ahora en muchas zonas del interior de Catalunya o los Pirineos solo es un aviso) "vamos a tener que capear con quejas de padres". Eso pasará

“cuando las niñas y niños lleguen a casa y cuenten, que pese a los abrigos o mantas han pasado frío en el aula”.

Blanca Barra, directora de la escuela pública Ruda de Salardú (Naut Aran), anuncia que en su centro –con 72 alumnos– van a hacer lo posible para que esas quejas de padres no lleguen nunca. “Aquí, cuando el invierno asome de verdad, lo tenemos muy claro: no vamos a permitir que nuestros alumnos pasen frío en las aulas”. Blanca Barra tiene asumido que para conseguir ese propósito no podrán cumplir a rajatabla el protocolo de ventilación, tal y como se ha fijado desde Ensenyament. “Solo pido una cosa –añade la directora de Salardú– que venga al centro una de esas autoridades y compruebe si se puede aguantar y dar clase en una de nuestras aulas con las puertas y ventanas abiertas de par en par para ventilar, en un día de nevada o ventisca”.

Barra estima que esa ventilación repetida varias veces durante una clase o de 15 minutos entre hora y hora “igual puede hacerse en Torredembarra, sin que la temperatura de las aulas se desplome; pero no en los Pirineos”. Ni repartiendo mantas entre los alumnos. “Esa no tendría que ser la solución, ni tampoco confiar en que el problema del frío en las aulas que se avecina en muchos centros se va a subsanar animando a los escolares a ponerse el anorak y el gorro en clase”, opina esta docente.

En Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) son más optimistas. Kiko Peris, jefe de estudios de la escuela La Closa, recalca que los alumnos de este centro “están curtidos con el frío, así que por ahora nadie se ha puesto aún en clase el anorak”, revela.

Y otra factura que se avecina: la del gasto de calefacción. Las calderas o equipos de gas de los colegios ubicados en las zonas más frías que hace ya días ventilan de forma periódica o tienen abiertas ventanas durante todo el día, funcionan a pleno rendimiento. “Ya veremos que dirá, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Alcarràs –teme Pilar de Lara– que el pasado curso ya se quejó por la factura de la calefacción”. Que se preparen, pues, los que tienen que asumir ese gasto de los centros educativos.

EL PAIS

Sin rastro de las 500.000 tabletas y ordenadores prometidos por la Administración antes de fin de año

Cinco meses después de que se anunciara la compra para combatir la brecha digital, está previsto que hoy se liciten los primeros seis concursos de los 19 para comprarlos. Educación dice ahora que los primeros llegarán a finales de enero

BEATRIZ LUCAS. MADRID. 16 NOV 2020

A Flor Pérez Carrillo se le abrió el cielo cuando la llamaron del colegio para decirle que la Administración iba a prestar dispositivos a las familias que más lo necesitaban. “Mis niñas se pasaron la cuarentena apañándose con mi móvil para hacer las tareas, pero los datos que teníamos contratados no aguantaban, y lo pasamos mal. Al final lo hacíamos en papel y lo fotocopiábamos en un locutorio y lo llevábamos al colegio”, explica esta madre, que cría sola a dos hijas de seis y nueve años. Pero, cinco meses después de la promesa del Ministerio de Educación, los dispositivos no han llegado a los centros y los primeros concursos comienzan a licitarse esta semana. Una portavoz del ministerio aseguró ayer que los primeros aparatos llegarán a final de enero, aunque el medio millón de ordenadores o tabletas para familias vulnerables debería haber estado listo para el primer trimestre del curso.

En España había en 2018 un 9% del alumnado sin acceso a dispositivos o Internet, según el informe PISA, lo que supone cerca de medio millón de estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, a la espera de las tabletas o portátiles. La directora del colegio de las hijas de Flor, Nuria Hernández, explica que en mayo y de nuevo en septiembre envió el listado a la Consejería de Educación de Madrid con las referencias de las 100 familias de su centro que no disponen de un dispositivo con conexión. “No he vuelto a saber, y tengo 80 alumnos más, la mayoría recién llegados a España que también lo necesitarían”, explica esta directora madrileña.

Flor, que fue gerente de una agencia de viajes en Venezuela, lleva dos años en España, adonde llegó con sus maletas y poco más. Con la covid perdió su empleo y ahora viven sus hijas y ella de los 242 euros que gana como monitora en el comedor del colegio. No le llega siquiera para pagar su piso de 350 euros. Hasta ahora han tirado de ahorros. “Saldremos de esta, pero lo que más me angustia es que nos vuelvan a confinar y que por falta de medios no podamos conectarnos al blog del colegio para seguir el curso”, confiesa.

El Ministerio de Educación prometió el pasado 15 de junio entregar en el primer trimestre del curso 500.000 dispositivos electrónicos con conexión. Tienen previsto comprarlas entre el Gobierno y las comunidades autónomas y a ello destinarán 260 millones de euros pagados con fondos Feder: un 74% del gasto lo asumirá el ministerio a través de la empresa pública Red.es; el 26%, las autonomías. El programa se llama Educa en

Digital y su objetivo es cerrar la brecha digital en los centros educativos, que acrecentó las desigualdades entre alumnos durante el confinamiento de la pasada primavera.

Las escuelas no han vuelto a saber nada de las tabletas y portátiles prometidos. Hasta este domingo no se había licitado ninguno de los 19 concursos previstos para comprar los dispositivos. Sin embargo, en el portal de contratación pública se colgó el domingo 15 el anuncio de los seis primeros pliegos de contratación cuyos detalles se sabrán esta semana: Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Ceuta y Melilla serán las primeras regiones en recibirlos. Eso sí, los plazos que contempla la ley de contratos hacen prácticamente imposible que los aparatos se entreguen antes del año que viene, como se había prometido.

“Estamos haciendo horas extra para llegar. Pero la tramitación de cualquier convenio se hace larga y farragosa. Cada comunidad ha tenido que adherirse al programa, y hasta que no lo hicieron todas no pudimos empezar el proceso inicial. Este concluyó la primera semana de octubre con la aprobación de los convenios en el Consejo de Ministros”, explica un portavoz de la Secretaría de Estado de Digitalización. “El procedimiento es muy complejo y hay algunas comunidades que ni siquiera han resuelto los pasos previos que les corresponden”, explicó ayer una portavoz del Ministerio de Educación, que calcula que los primeros dispositivos —para las seis comunidades que van más adelantadas— llegarán a las escuelas a final de enero.

El retraso de un mes respecto a la fecha anunciada tiene que ver con la enorme complejidad burocrática del proceso, con trámites en cada comunidad, a la que se suman los retrasos en el abastecimiento de productos tecnológicos en el mercado por el exceso de demanda. En algunas consejerías, como la madrileña, no cuentan con la llegada de los portátiles o tabletas “hasta la próxima primavera”, según un portavoz.

Para que ese medio millón de tabletas y portátiles llegue a los alumnos deben superarse una docena de trámites relevantes, en unas Administraciones sobrepasadas, al estilo de las *Doce pruebas de Astérix*. Y aunque los tiempos han acortado a la mitad, al tramitar el procedimiento por vía urgente, el camino es aún sumamente árduo.

En los seis primeros concursos, cuyos detalles se conocerán en los próximos días, no podrán valorarse las ofertas económicas que hagan las empresas hasta el 11 de diciembre. Después habrá que adjudicar los proyectos y deberá respetarse un plazo de alegaciones. Imposible resolverlo en tres semanas. Además, en 13 comunidades están aún en fases mucho más iniciales. El proceso allí será aún más lento.

Un laberinto burocrático con 19 convenios

Solo en firmar los 19 convenios —uno con cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla y a tres bandas (Ministerio de Educación, Red.es y Gobiernos regionales)— se tardaron tres meses desde el anuncio en junio. Una vez redactados los convenios, debían aprobarse y publicarse en el Consejo de Ministros. Hasta la primera semana de octubre no se publicaron todos. Luego cada comunidad autónoma debía validarlo en sus Consejos de Gobierno o debían aprobarlos sus consejeros, pero algunas regiones ni siquiera han realizado este trámite aún, como la Comunidad Valenciana, donde aseguran que “es inminente”. Otras lo llevaron la primera semana de noviembre, como Madrid, Murcia, Castilla y León, Andalucía o País Vasco.

Concluido el trámite autonómico, debe publicarse en el BOE. “También ahí hay un atasco porque cuando se entrega el convenio no hay un plazo fijado para su publicación oficial”, explican fuentes conocedoras del proyecto. Hasta ahora solo 9 de los 19 territorios han publicado sus convenios en el BOE, entre el 24 y el 30 de octubre (Galicia, Ceuta, Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura).

Galicia es una de las comunidades que antes concluyeron sus trámites regionales. “Fuimos de las primeras comunidades en firmar el convenio y movilizar la cofinanciación, pero la tramitación depende del órgano licitador, Red.es”, explica una portavoz de la Agencia para la Modernización tecnológica de Galicia. En esta comunidad entregarán 14.500 ultraportátiles convertibles táctiles de 11,6 pulgadas incluyendo el servicio de conectividad móvil.

Retraso en los proveedores

Es probable que se alarguen aún más los plazos de este laberinto burocrático por la situación del mercado tecnológico. Aunque las comunidades autónomas cuentan con ello y ya se están aprovisionando de dispositivos con sus programas autonómicos de digitalización. “La Xunta ha lanzado en paralelo la compra de 3.000 equipos para las necesidades más perentorias”, explica una portavoz. En Madrid cuentan con un stock de 750, y aseguran que este mes enviarán 40.000 dispositivos a las aulas, y en Cataluña tienen previstos 300.000, que tampoco han llegado.

Xavier Tarragó, responsable de empresa de MediaMarkt Business Educación, reconoce que en las grandes superficies “hay problemas de abastecimiento debido al aumento de la demanda”. Pero también señala que “desde el ministerio llevan tiempo trabajando con los fabricantes y distribuidores para hacer frente a lo comprometido”. Y añade: “Es posible que tarde más de lo previsto y quizás otros sectores pueden ver retrasada la entrada de mercancía porque se dé prioridad a los pedidos de educación”.

Respecto a sus clientes asegura que los pedidos realizados en plena crisis, en mayo y abril, se acabaron de entregar en septiembre. Y explica que las ventas de estos dispositivos se han duplicado estos meses, pero según Tarragó es algo global: “En algunos países se han realizado pedidos de dos millones de dispositivos para afrontar este curso escolar, y los fabricantes, sobrepasados ante esta demanda, en algunos casos no han conseguido los componentes para acelerar la fabricación”. Desde la asociación de consumidores OCU aclaran

que los problemas de abastecimiento se notaron más en abril y mayo debido a que las fábricas chinas no estaban operando, pero que ahora no han recibido quejas al respecto.

Y mientras los dispositivos tratan de hacerse paso por el farragoso laberinto burocrático y comercial, cientos de miles de alumnos en toda España continúan esperando. Como las hijas de Flor: "Mis niñas, que tienen unas ganas locas de estudiar, se van a quedar atrás por esta situación, si no tenemos medios. ¿Sabes cuándo llegan?", pregunta.

europapress.es

Casado dice que si llega a Moncloa derogará 'Ley Celáa' y que ahora irá al TC y recogerá firmas en la calle para pararla

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que si gana las próximas elecciones generales y llega al Palacio de la Moncloa derogará la "injusta" 'Ley Celáa', pero ha añadido que en este momento su partido saldrá a la calle para recoger firmas contra esta reforma de la educación y presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"El PP va a salir a la calle para recoger firmas y parar esta contrarreforma educativa y garantizar la libertad de educación", ha manifestado Casado en la Junta Directiva de Nuevas Generaciones del PP, que ha convocado formalmente el XV Congreso de la organización juvenil para los días 23 y 24 de enero.

Casado ha afirmado que con la 'Ley Celáa' --que se votará este jueves en el Pleno del Congreso-- el Gobierno de coalición "ha cruzado una línea roja" porque "a cambio" de aprobar los Presupuestos ha decidido "excluir" el castellano "como lengua vehicular en toda España". "Es algo que no entenderían en ningún lugar del mundo", ha exclamado, para recordar que el español lo hablan 500 millones de personas en el mundo. Casado ha señalado que el PP va a salir a la calle para recoger firmas diciendo a los españoles que "se comprometan a través de su firma" para poner un "freno" a esta norma, que su partido recurrirá en el TC "en cuanto sea aprobada".

ACABAR CON "DISPARIDAD" DE LA EDUCACIÓN EN LAS CCAA

El presidente del PP ha indicado que su partido también acudirá a las instituciones europeas, que, según ha añadido, hoy han dicho que "los países tienen obligación de hacer leyes educativas con un consenso parlamentario porque si no van a fracasar". Además, ha subrayado que Bruselas ha pedido "acabar con la disparidad de la educación" en las autonomías porque eso "también cotiza en bolsa".

Tras denunciar el "sectarismo de la izquierda" con la educación, el presidente del PP ha confirmado que su partido, en cuanto llegue al Gobierno, "derogará esta injusta ley" y volverá a "un sistema educativo justo, equitativo y de calidad".

EL PAIS

Hacia una concertada de interés público

La libertad de elección de escuela no es un derecho de carácter absoluto (el número de plazas de una escuela es finito) y por lo tanto requiere de algún tipo de regulación y ordenación

XAVIER BONAL. 16 NOV 2020

La movilización de las patronales de la escuela concertada contra la denominada *Ley Celáa* nos devuelve a algo que ya es recurrente cada vez que se anuncia una nueva ley educativa impulsada por la izquierda: la oposición al supuesto intervencionismo público en educación. Desde la aprobación de la LODE en 1985, que produjo una movilización sin precedentes del sector privado de la enseñanza, la respuesta de las principales patronales de la escuela concertada es un lamento al intrusismo del Estado en la libertad de las familias para elegir escuela.

En esta ocasión, hay una novedad en el eslogan con el que el sector ha animado a la movilización: *más libres, más plurales, más iguales*. Más allá del (debatible) oxímoron entre pluralidad e igualdad, llama la atención la inclusión del concepto de igualdad en el eslogan. No es casual ni gratuita. Hace tiempo que desde posiciones políticas conservadoras se insiste en que lo realmente equitativo es asegurar la libertad individual para elegir en el mercado. La desigualdad en educación, según esta tesis, no sería la consecuencia de la falta de oportunidades o de condiciones de escolarización, sino el resultado de la coacción que impide que las familias elijan la mejor escuela para sus hijos. "¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?", se puede leer en la web que llama a parar la Ley Celáa.

La tensión entre libertad de elección de escuela y la necesidad de planificar según las necesidades de escolarización ha estado presente en nuestro sistema educativo desde que existe el artículo 27 de la Constitución Española, ambiguo en la regulación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Esta ambigüedad se ha proyectado en la polarización entre las leyes educativas del PSOE y del PP. El PP se atrevió a introducir en la LOMCE por primera vez el hecho de que las administraciones educativas tuvieran en cuenta la demanda social en la planificación de las plazas escolares (una política, por otra parte, ya practicada en muchos territorios antes de la LOMCE). Tener en cuenta la demanda social supone reconocer *de facto* la existencia de un derecho al concierto. El Estado se ve obligado a 'seguir' la demanda y planificar en consecuencia, ignorando los posibles efectos que ello pueda tener sobre las desigualdades en las condiciones de escolarización. Supone, en definitiva, sacrificar el principio de equidad en la planificación escolar en favor de optimizar los deseos de escolarización de las familias.

La supresión del principio de demanda social que anuncia la LOMLOE no es, en ningún caso, un atentado a la libertad de elección de escuela. Las familias pueden seguir y seguirán expresando sus preferencias por las escuelas que desean, y el acceso se regulará en los casos de más demanda que oferta por los mismos mecanismos de prioridad que estableció la LOE y que la LOMCE tampoco alteró: proximidad, presencia de hermanos en el centro y renta. Como nos recuerdan los juristas, la libertad de elección de escuela no es un derecho de carácter absoluto (el número de plazas de una escuela es finito) y por lo tanto requiere de algún tipo de regulación y ordenación. Lo que la LOMLOE contempla es, quizá por primera vez, una materialización real del principio de equidad en educación, a través de dar prioridad a la planificación de plazas públicas, otorgar un carácter subsidiario a la enseñanza concertada y, sobre todo, a abrir la puerta a medidas que ayuden a reducir la segregación escolar. La diferencia en la composición social de los centros no solo es injusta desde el punto de vista de la desigualdad de oportunidades que genera, sino que es ineficaz para conseguir otros objetivos, como la reducción del abandono educativo prematuro o la mejora de los resultados escolares. Y son muchas las evidencias que tenemos de cómo la política educativa que prioriza la elección escolar por delante de la equidad genera mayor segregación.

Sería razonable esperar, como algunas escuelas concertadas reivindican, mejoras en una financiación pública insuficiente para asegurar la gratuidad real y eliminar las barreras económicas a la inclusión. Sin embargo, la oposición a la ley lo que refleja es el objetivo de seguir accediendo a dinero público casi sin contrapartidas, como si de un subsidio y no de un contrato se tratara. Como ha reflejado un informe reciente, las aportaciones de las familias no solo compensan la diferencia entre la financiación pública y el coste de la plaza escolar, sino que en ocasiones la superan ampliamente. Por supuesto, esto no ocurre en todos los centros. Quizá con la nueva ley estemos ante la primera oportunidad de distinguir entre los centros concertados de interés público y los que no lo son.

XAVIER BONAL es Catedrático de Sociología en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Special Professor of Education and International Development en la Universidad de Amsterdam.

europapress.es **DÍA INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE**

Las asociaciones de estudiantes exigen que la enseñanza continúe siendo presencial

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha elaborado, con motivo del Día Internacional del Estudiante, que se celebra este martes 17 de noviembre, un documento en el que recoge ideas, propuestas y prioridades para mejorar el sistema híbrido de enseñanza, y en el que pide en primer lugar que la enseñanza continúe siendo presencial, siempre y cuando sanitariamente sea posible.

Para ello, CANAE reclama garantizar que se pueda mantener la distancia de seguridad en el aula, ya sea mediante la reducción de ratios o la ampliación de aulas y espacios acondicionados para ello, si es necesario; y proveer a los centros educativos de gel hidroalcohólico, mascarillas, y todo aquel material que precisen para cumplir con las medidas protocolarias.

Además, considera necesario para que se pueda dar la presencialidad, facilitar a todos los estudiantes el plan sanitario que especifique el protocolo de actuación en caso de rebrotes en el centro, y realizarlo o adaptarlo en caso de que no exista en dicha comunidad o centro; fomentar diferentes tipos de ocio para realizar actividades seguros durante los descansos; y habilitar salas de estudio y bibliotecas para que los estudiantes puedan disponer de ellas cumpliendo todas las medidas de seguridad necesarias.

No obstante, el documento también recoge propuestas en caso de no poder garantizarse la presencialidad de todos los estudiantes. En ese caso, lo primero que pide es priorizar a aquellos estudiantes más vulnerables.

Si la enseñanza fuese online, CANAE exige facilitar los recursos económicos o materiales necesarios para continuar con las clases a las personas que no dispongan de ellos; garantizar que todos los estudiantes disponen de los medios electrónicos adecuados (tablets, ordenador) para poder seguir la docencia y establecer mecanismos para identificar aquellos que no los tienen; garantizar el acceso a Internet de todos los estudiantes que lo precisen; e impulsar la digitalización de la educación (a través de la regulación pertinente).

EL MUNDO

La RAE se posiciona a favor del español como lengua vehicular de la educación

"Ante la aparente marginación del idioma en ciertos ámbitos educativos, esta casa quiere protestar por esas iniciativas que solo pueden generar confusión ciudadana y que no tienen ninguna cabida fuera de la polémica política"

ANTONIO LUCAS. Madrid. Martes, 17 noviembre 2020

La RAE prepara una nota en la que se posiciona en la defensa del español como lengua vehicular de España. Así lo ha manifestado a EL MUNDO su director, Santiago Muñoz Machado, que está en estos momentos trabajando en la redacción de esa nota -que no informe- donde la institución quiere, el jueves, con el consenso de todos los académicos mostrar su postura frente a la polémica levantada por la nueva Ley de Educación.

Los miembros de la RAE consideran que el español no debe ser, en ningún momento, puesto en tela de juicio como nuestra lengua vehicular y ante la "aparente marginación del idioma en ciertos ámbitos educativos, esta casa quiere protestar por esas iniciativas que solo pueden generar confusión ciudadana y que no tienen ninguna cabida fuera de la polémica política".

La posición de la RAE está clara: la defensa absoluta del español. El director expone que no van a redactar ningún informe, pues no hay ninguna voluntad de generar un texto que tenga ningún valor normativo alrededor de este asunto, sino tan solo manifestar cuál es el lugar de la RAE.

Por supuesto, la institución se ofrece como órgano de consulta -como ha sido siempre- para cualquier duda que, desde el ámbito de la política se pueda tener sobre el español como herramienta y lengua vehicular de España.

También entiende Muñoz Machado que no es necesario entrar en estas polémicas porque "la realidad es la que es". La lengua española, el español, es el idioma que nos une a todos y no deben hacerse confrontaciones entre el resto de lenguas cooficiales del Estado, porque la convivencia ha sido siempre la actitud y el lugar natural en el que el español y las lenguas cooficiales han existido.

Primar a uno sobre otros no tiene sentido y, sobre todo, cuando hay una de ellas, que es el español, que vehicula toda la articulación del Estado.

europapress.es

La concertada registra escritos dirigidos al Congreso solicitando la paralización de la 'Ley Celaá'

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones de la enseñanza concertada, han registrado este martes escritos dirigidos a la presidenta del Congreso, Maritxel Batet, y a los grupos parlamentarios solicitando la paralización de la LOMLOE, la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá'.

Según la Plataforma, "los apoyos recibidos en las últimas semanas constatan la enorme preocupación y rechazo que el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación genera en una parte importante de la sociedad".

Las organizaciones integrantes de la Plataforma aseguran que la 'Ley Celaá' es un proyecto "fuertemente intervencionista" que promueve "la restricción de derechos y libertades ciudadanas" y "atenta contra la pluralidad" del sistema educativo español.

"La pluralidad educativa y la libertad de elección de las familias del tipo de centro que consideren más adecuado para la educación y formación de sus hijos conforme a sus convicciones, deben ser aspectos fundamentales en la organización y planificación del sistema educativo y ambas cuestiones se ven seriamente amenazadas por la LOMLOE", se quejan.

En este sentido, desde Más Plurales afirman estar "firmemente convencidos" de que en el sistema educativo "todos" son necesarios para contribuir a la formación de los alumnos y, "desde la convivencia y el respeto a la pluralidad y libertad", avanzar en la mejora de la sociedad civil.

Por todo ello, apuntan: "Hemos solicitado que no se acepten en el trámite parlamentario los textos y enmiendas que ocasionan un grave perjuicio a una importante parte de la sociedad que elige libremente, promueve y trabaja en centros de enseñanza concertada y de educación especial".

NUEVA CONCENTRACIÓN

De hecho, la Plataforma recuerda que volverá a pedir la retirada de esta Ley frente al Congreso de los Diputados este jueves 19 de noviembre, coincidiendo con la votación en el Pleno del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y FP. Con esta, sería la cuarta vez que salen a la calle para protestar contra el proyecto.

Además, como parte de las acciones de la campaña 'Más Libres, Más plurales, Más Iguales', el próximo sábado 22 se celebrarán en Madrid, y numerosas ciudades de todo el territorio nacional, manifestaciones con vehículos contra la 'Ley Celaá'



Más del 50% de los estudiantes suspende a sus profesores por su formación 'online'

La campaña 'Estudiantes en cuarentena' da voz a los alumnos para que sean ellos quienes puntúen al profesorado durante la pandemia y propongan mejoras para el sistema híbrido de esta segunda ola

Mónica Zas Marcos. 17 de noviembre de 2020

Estrés, agobio, depresión, aburrimiento, incertidumbre... son las primeras palabras que asaltan a los estudiantes cuando les piden describir su estado mental durante el confinamiento, según una encuesta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE). En estos meses se ha abordado la crisis educativa desde el punto de vista de los equipos directivos, los profesores, los padres y las madres, pero no se ha tenido demasiado en cuenta la opinión directa de sus protagonistas.

Por eso, con motivo del Día Internacional de Estudiante que se celebra hoy, CANAE lanza los resultados de su sondeo entre centenares de alumnos de 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato y un documento con propuestas para enmendar lo que no salió bien en la primera ola. "Se ha hablado mucho sobre las medidas sanitarias, como por qué puerta entrar y por cuál salir o cómo equipar las aulas, pero echamos en falta la reflexión sobre las medidas educativas", piensa Andrea G. Henry, presidenta de la asociación.

Es vital, opinan desde CANAE, "que las administraciones desarrollen metodologías híbridas, semipresenciales, tratando de potenciar lo mejor de cada estudiante". Las nube de palabras es una muestra de que, sin la motivación suficiente ni unos programas acordes a las necesidades, la enseñanza a distancia perjudica la salud mental de los estudiantes.

Uno de los puntos sobre los que arroja luz la encuesta es, por primera vez, la valoración del nivel de los profesores según los alumnos y no viceversa. En ese sentido, el 53,6% cree que "no estaban suficientemente formados para impartir docencia online". Un 32,1%, en cambio, lo valora de forma distinta respecto a cada materia.

"Creo que muchos profesores se han resguardado en no saber utilizar muy bien las plataformas digitales o en la comodidad de que en la web hay muchas herramientas para no mantener el contacto de los alumnos", piensa uno de los encuestados.

Otro de los porcentajes llamativos es el que responde a la pregunta: "¿El profesor o centro hizo alguna evaluación tras finalizar el proceso sobre cómo han vivido los estudiantes esta situación?". Un 52,4% responde que no y un 27,4% que sí. Por ello, entre sus propuestas, instan al profesorado a que se preocupe por la situación del alumnado con el fin de adaptar la carga de trabajo diario y los plazos a cada uno.

Por último, un 23,8% de los estudiantes pasó más de 9-10 horas frente a una pantalla y un 22,6% entre 7-8 horas. La media es de 7,1 horas. No obstante, de todo ese tiempo, según otra parte de la encuesta, dedicaron 5,1 horas de media a cuestiones relacionadas con el estudio. Aún así, CANAE ha identificado un incremento de la sobrecarga de tareas. "Que no se presuponga que vivimos por y para los estudios únicamente", pide otro de los consultados.

Los estudiantes pasaron una media de 7,1 horas al día delante del ordenador en la cuarentena

¿Cuántas horas de media consideras que has pasado durante esta cuarentena en el ordenador?

Más de 10	11,9 %
De 9 a 10	23,8 %
De 7 a 8	22,6 %
De 5 a 6	19,0 %
De 4 a 5	11,9 %
De 3 a 4	8,3 %
Menos de 2	1,2 %

Fuente: CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes)

Priorizar la presencialidad entre los más vulnerables

Los estudiantes abogan por una educación presencial siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. Al no ser posible en la enorme mayoría de comunidades autónomas, CANAE ofrece una serie de propuestas para mejorar el sistema híbrido. La prioridad, para ellos, es evitar las clases online al máximo y, en caso de no poder, primar que al menos los estudiantes más vulnerables tengan acceso a clases presenciales. Además, la disponibilidad a los dispositivos y herramientas necesarias para el online es dispar, por lo que habría que garantizarla de forma universal.

Por otra parte, apuestan por que la evaluación sea continua "especialmente en las asignaturas con mayor carga lectiva online"; por que todos los estudiantes puedan realizar la PAU adaptándola al contexto actual; por mejorar la "formación digital al profesorado, familias y estudiantes" para evitar los porcentajes de suspenso anteriores; y por reformular los mecanismos de canalización de la participación estudiantil en los espacios virtuales.

La mitad de los alumnos suspende a sus profesores en su formación online

¿Consideras que el profesorado estaba suficientemente formado para impartir la docencia online?

En general no	50,0 %
Depende de la materia	53,6 %
NS/NC	32,1 %
En general sí	13,1%

Fuente: CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes)

"Costaba concentrarse y más aún confinado, me hubiera gustado tener un momento para hablar con mis compañeros como una clase, esos momentos entre pasillo...", destaca otro de los encuestados. En general, los estudiantes piden que haya más tutorías online con dinámicas y contenidos distendidos que ayuden a crear esos momentos. De igual forma, solicitan un sistema de prevención del acoso escolar online, "no reaccionar una vez ya ha ocurrido".

EL PAIS

Centenares de colegios concertados leerán a los alumnos un manifiesto contra la 'ley Celaá'

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA - 17 NOV 2020

Las movilizaciones de buena parte de la escuela concertada contra la nueva ley educativa, conocida como la *ley Celaá*, que se vota el jueves en el Congreso, arrecian. Centenares de centros educativos harán llegar este miércoles su rechazo a la norma directamente a los alumnos mediante la lectura de un manifiesto que se opone a ella en un tono encendido sosteniendo, por ejemplo, que "conduce hacia el dominio sistémico del Estado" y "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión". La medida ha generado malestar en medios sindicales por involucrar a los estudiantes y al profesorado.

El manifiesto ha sido elaborado por la plataforma Más Plurales, de la que forman parte las principales entidades relacionadas con la enseñanza concertada, entre las que figuran Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Escola Cristiana de Catalunya, Concapa, Confapa, la Federación de Enseñanza de USO y otra quincena de organizaciones. Fuentes de Escuelas Católicas aseguran que, a escala nacional, no se ha instado a leer el manifiesto en las clases, sino que se ha pedido a los centros "que adopten las iniciativas que consideren adecuadas para dar a conocer a la comunidad educativa lo que implica esta ley". Al menos dos organizaciones territoriales de Escuelas Católicas, la de Andalucía y la de la Comunidad Valenciana, sí han animado a los colegios de sus territorios a leer el documento a los alumnos. En Madrid, señalan las mismas fuentes, el manifiesto ya ha sido leído en algunos colegios en los últimos días.

En los centros concertados estudia el 26% del alumnado preuniversitario español. El 60% de ellos pertenece a Escuelas Católicas.

El manifiesto sostiene que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) "permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres", "crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias", impone "una ideología laicista impropia de un Estado no confesional" y "conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición". En uno de los colegios en los que está prevista la lectura del manifiesto, el mensaje que se ha distribuido al profesorado

aconseja que el texto, de folio y medio, se lea a los alumnos a partir de tercero de la ESO, y que a los más pequeños se les explique su contenido. Tanto unos como otros guardarán después un minuto de silencio.

La participación de los niños en el ámbito educativo es positiva, cree Miquel Martínez, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, "pero no lo es que los adultos los conduzcan a hacerlo de acuerdo con sus posiciones, en un tema que es complejo y en el que se hacen afirmaciones tan controvertidas", dice.

La Plataforma Más Plurales presentó este martes varios escritos en el Congreso en los que solicitó a los grupos la paralización de la tramitación de la ley. Ha iniciado una recogida de firmas contra la norma (este martes sumaban, según la entidad, un millón y medio). Tiene previsto concentrarse el jueves ante el Congreso. Y, el domingo, realizar "una manifestación en coches" en Madrid y otras ciudades.

europapress.es

Celaá reprocha al PP que el castellano no ha sido vehicular en la enseñanza hasta 2013: "Fuera catastrofismos"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reprochado al PP que las leyes de educación nunca han recogido que el castellano fuese una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013, por lo que ha instado a la oposición a dejarse de "catastrofismos".

"En época de su presidente de Gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor", ha formulado Celaá al senador 'popular' Miguel Lorenzo Torres, que ha preguntado a la ministra por la inclusión en el proyecto de ley de la eliminación de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular en la enseñanza. "Ah, ¿sí? Pues no lo ponía en ninguna ley", ha echado en cara la ministra al ver que el senador asentía con la cabeza.

"¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, año en que se sitúa el término vehicular en la LOMCE, el castellano era vehicular? ¿Con Gobiernos de UCD, con Gobiernos del PP, con Gobiernos del PSOE, era el castellano vehicular? ¿Sí o no? No lo ponía en ninguna ley", ha defendido ligeramente alterada.

La ministra ha reflexionado que si "no supuso nada" que la LOMCE (la también denominada 'Ley Wert'), ley actualmente vigente en España, incluyese que el castellano fuese vehicular, por qué entonces iba a suceder nada ahora si se vuelve a retirar de la ley educativa.

CONSECUENCIAS "MUY GRAVES" PARA LOS CASTELLANOPARLANTES

En cualquier caso, el senador ha reprochado a la ministra que con esta cuestión habrá consecuencias "muy graves" para los castellanoparlantes de Cataluña, los cuales se sienten "muy desprotegidos". Torres ha recordado a Celaá cómo este tema ha ido a parar a los tribunales en múltiples ocasiones, los cuales dictaron que se debía imponer un 25% de las clases en castellano. "Y ahora se encuentran con que no tienen apoyo legal porque suprimen de la Ley esto", critica.

En opinión del senador, esto supone "el mayor apoyo al 'procès' y a la independencia de Cataluña", echándole así en cara a la ministra que el Gobierno busque el apoyo de los partidos nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El 'popular' no solo ha criticado la enmienda del castellano de PSOE, Unidas Podemos y ERC, sino que ha lamentado que con la reforma educativa (la LOMLOE), el Gobierno esté "cercenando la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos", poniendo "fecha de caducidad a la Educación Especial" y lanzando un "proyector" contra la educación concertada. "Esa educación que tanto critican y mandan a sus hijos a este tipo de colegios", ha señalado Torres en referencia a las hijas de Celaá, lo que supone, según él, un "ejemplo de incoherencia y de hipocresía".

Así, el senador ha exigido a la ministra que escuche a la comunidad educativa y le ha pedido que rectifique, ya que "cuando lo hacen, aciertan", mencionando en este caso la realización de PCR para venir a España desde el extranjero o la bajada del IVA a las mascarillas. "No podemos dejar en manos de las comunidades autónomas que el castellano allí (en Cataluña) se convierta en una lengua extranjera", ha vuelto a insistir, zanjando su intervención reclamando un Pacto de Estado por la Educación.

En su turno de réplica, Celaá ha afirmado que "las lenguas son para las personas y no al revés", cuando el PP, a su juicio, "a lo largo de la historia, las ha utilizado como controversia política". Por ello, Celaá dice que el Gobierno ha trasladado al ámbito competencial la consideración del castellano como lengua vehicular, y que, aunque haya retirado esta consideración de la Ley, recuerda que sí se recoge que "todas las personas tendrán dominio pleno y equivalente en castellano y en las lenguas cooficiales si las hubiera". "Si antes, hasta el 2013, no era vehicular y no lo pusieron, sería porque no era necesario", ha insistido.

LA ASIGNATURA DE VALORES CÍVICOS LA IMPARTIRÁN PROFESORES CON CONOCIMIENTOS EN FILOSOFÍA.

La asignatura de Valores Cívicos y Éticos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, será impartida por profesores "competentes" con "conocimientos en Filosofía", según ha afirmado la Ministra de Educación, Isabel Celaá. Así lo ha indicado Celaá este martes 17 de noviembre en el Pleno del Senado, en respuesta a una

pregunta del senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño sobre lo que va a suceder con la asignatura de ética en la nueva ley educativa.

El senador de Más Madrid ha calificado de "incomprensible y inexplicable" que "se nieguen a restaurar la ética de 4º en el lugar y con el peso que le corresponde". "Es una absoluta decepción", ha valorado Fernández Rubiño, instando a la ministra a "rectificar" en el proceso de enmiendas en el Senado. Para el senador de Más Madrid, una de las cuestiones "más graves" de la Ley Wert fue "desplazar" del currículo la filosofía y la ética, una asignatura que "no es solo la historia del pensamiento de esta civilización, el origen de la fundamentación de la ciencia, el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de intentar responder, sino también la raíz de los cimientos del edicio jurídico y político en que se basa la democracia y la ciudadanía".

A su juicio, "no es suficiente con una asignatura de Valores Cívicos con "escasa carga curricular" e "impartida por profesores no especializados". "Porque no es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución Española, no es lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie de catecismo laico de buenas maneras", ha advertido.

Si bien, la ministra ha defendido que es suficiente con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. "Asumo todo lo que usted dice pero no es necesario más que incorporarlo a los Valores Cívicos y Éticos", ha subrayado, precisando que en esta materia, los alumnos conocerán no solo los valores constitucionales, sino también "la igualdad entre hombre y mujer o la educación para la transición ecológica", entre otros.

Además, ha asegurado que los profesores que impartirán esta asignatura serán aquellos "que tengan conocimientos en Filosofía" aunque ha precisado que todavía no se ha decidido qué profesorado tendrá que ser el competente para darlo. "Probablemente el que usted piensa, que tenga conocimientos en Filosofía porque la ética forja el carácter, es aquella parte de la filosofía moral que nos permite deslindar entre lo correcto y lo incorrecto, y obviamente esa es la esencia de toda la educación, porque la finalidad es hacer personas competentes, críticas, éticas, capaces deslindar entre lo verdadero y lo falso", ha enfatizado Celaá.

Precisamente, sobre este punto, el senador de Más Madrid ha recomendado a la ministra que "si quieren combatir las fake news, reinstauren la ética de cuarto". "No necesitan ninguna orden ministerial que le ponga más fácil a la derecha soltar soflamas contra supuestos ministerios de la verdad", ha indicado. La ministra de Educación ha recordado que, de acuerdo con la nueva ley de educación, la LOMLOE, todo el alumnado cursará Educación en valores cívicos y éticos en uno de los cursos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

EL PAÍS **EDITORIAL**

Retrasos que hieren

La ineficiencia administrativa demora la entrega de ordenadores a los sectores más desfavorecidos

EL PAÍS. 18 NOV 2020

Una ayuda que no llega a tiempo no es una ayuda eficaz y esto es especialmente grave en un momento en que las consecuencias económicas de la pandemia están agravando todas las brechas sociales. Es lo que ha ocurrido con la iniciativa destinada a asegurar que los alumnos más vulnerables dispongan de las herramientas tecnológicas necesarias para poder seguir el curso. El cierre de colegios durante el confinamiento puso de manifiesto la gravedad de la brecha digital en el sistema educativo español. Un número importante de alumnos no pudo seguir las clases a distancia por carecer de un ordenador o conexión a Internet. En un esfuerzo loable por garantizar la igualdad de oportunidades, el Ministerio de Educación anunció en junio un plan para adquirir 500.000 dispositivos dotados de conexión a repartir en el primer trimestre del nuevo curso. Cinco meses después, hay que lamentar que los ordenadores no hayan llegado aún a los escolares y las primeras entregas no se esperan hasta finales de enero.

El cálculo de necesidades se basaba en los datos del Informe Pisa de 2018, según el cual el 9% de los 5,5 millones de alumnos que cursan estudios preuniversitarios no disponía de un ordenador en casa. A ello hay que añadir aquellos hogares en los que sí hay un ordenador, pero los niños han de compartirlo con hermanos o padres que teletrabajan. El programa, dotado con 260 millones de euros, va por tanto en una dirección correcta, pero la ambición ha quedado empañada por una mala ejecución.

La compra debía gestionarse para que los ordenadores y tabletas llegaran a tiempo de cubrir la educación a distancia si fuera preciso y en todo caso, para mejorar lo antes posible las oportunidades educativas de los niños vulnerables. La aplicación del programa exigía firmar convenios entre el Ministerio de Educación, la empresa pública Red.es y cada una de las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Pero la maraña burocrática que rodea la contratación pública y la mala gestión de las comunidades ha hecho que hasta esta semana no se hayan podido licitar los primeros seis concursos.

Lo ocurrido con los ordenadores es un ejemplo de cómo la ineficiencia administrativa puede dificultar la aplicación de políticas sociales que para ser efectivas resulta vital que lleguen a tiempo. Esto resulta especialmente importante en un país azotado por una dura crisis económica y en el que, según apunta un reciente estudio, crece con fuerza la desigualdad. Lamentablemente, este programa no es el único caso. Nadie pone en duda la necesidad de mecanismos de control en la licitación pública y de la gestión compartida con las comunidades autónomas, pero ello no debería traducirse en una burocracia estéril que obstaculiza la rápida ejecución. El proceso administrativo es claramente mejorable en España.

europapress.es COMUNIDAD DE MADRID

Sindicatos y oposición reclaman mantener todos los contratos Covid de los centros educativos hasta final de curso

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) –

Sindicatos y partidos políticos como PSOE, Podemos y Más Madrid han reclamado el mantenimiento de todos los contratos Covid de los centros educativos como mínimo hasta final de curso en una concentración celebrada este martes frente a la Consejería de Educación y Juventud, ante la finalización del contrato de 1.117 docentes de refuerzo el 22 de diciembre.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, ha señalado que la concentración ha sido convocada para "dar apoyo al profesorado y a los otros perfiles educativos que se ha anunciado por parte del gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso que van a ser despedidos porque no se van a prorrogar sus contratos". "Estamos hablando de 1.500 profesionales de la educación, en torno a 1.000 profesores y 500 otros perfiles profesionales como educadores, integradores, auxiliares de control", ha indicado. Según Galvín, "estos profesionales han sido claves para el inicio de curso, la vuelta segura", y estos contratos de refuerzo Covid eran "uno de los pilares del plan de vuelta segura". "Sin este pilar, el plan se tambalea, y si se concretan los despidos, las no renovaciones de los contratos, a la vuelta de vacaciones de Navidad no se va a poder garantizar que las aulas puedan aplicar las medidas de seguridad contra el Covid, incluso la apertura y un funcionamiento adecuado", ha advertido.

Además, ha destacado que "si estos despidos se concretan dejamos sin la educación que necesitan a más de 20.000 alumnos y alumnas". Por ello, las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial (CC.OO., ANPE, CSIF y UGT) han exigido al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que se siente a negociar, con el fin de que "revierta esta decisión", ha recordado Galvín.

La secretaria de Enseñanza de la FeSP UGT Madrid, Teresa Jurdado, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que no han tenido respuesta al escrito registrado este lunes solicitando una reunión urgente, a pesar de ya plantearon la petición y el rechazo a la medida de forma unánime en la reunión de la Mesa Sectorial del pasado jueves al director general de RRHH. Jurdado ha señalado que la cifra de profesores pendientes de renovación es similar a la de aquellos que faltan por incorporarse a los centros educativos, que cifra entre 1.000 y 1.500.

Para los responsables de UGT, la Comunidad de Madrid "tiene que hacer un esfuerzo presupuestario" tanto para educación como para sanidad, y en concreto para mantener este profesorado. "No pueden pretender que sean otras administraciones quienes se hagan cargo de las necesidades de la Comunidad de Madrid", ha señalado, para agregar que se trata de la región con el PIB más alto de España "y la que menos invierte en educación".

A este respecto, ha apuntado que la media de inversión es un 4,3 por ciento y en Madrid "no llega a un 2 por ciento", por lo que "si hasta ahora no lo han hecho, ahora ya es el momento de que se pongan las pilas y dediquen a educación el porcentaje necesario para garantizar una educación de calidad". Asimismo, ha subrayado la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, acabar con la segregación y reducir la brecha digital y social que hay en los centros educativos.

MÁS ALLÁ DE ESTE CURSO

Galvín ha dicho que los mensajes del Gobierno regional de apoyo a la educación no se pueden "quedar en palabras", por lo que ha pedido que lo concreten "prorrogando los contratos de estos profesionales todo el curso pero además contratando a los profesores que faltan". "Están planteando despedir 1.000 profesores, 500 profesionales educativos, y todavía faltan en los centros, según la propia Consejería, en torno a 1.000 profesores, según nuestros datos, 1.500", ha apostillado.

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha subrayado que el servicio que están prestando estos docentes en los centros es "imprescindible", no solo por el refuerzo que están haciendo con los alumnos que no han podido seguir el ritmo por el confinamiento en la primera fase de la pandemia sino también porque han estado sustituyendo a los profesores que faltaban.

"Son imprescindibles para el desarrollo de la labor docente actualmente, de hecho son tan imprescindibles que pretendemos que continúen en la pandemia y que se queden incluso después", ha señalado. En concreto, ha pedido que se mantengan hasta que la OMS decreta el final de la pandemia, ya que considera que es posible que el curso que viene comience "con la misma incertidumbre".

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea, Marta Bernardo, ha destacado la necesidad de estos docentes porque "no ha terminado la pandemia" y "hay muchos niños que por circunstancias van a tener que estar en su casa en más de una ocasión".

El portavoz de Educación de Unidad Podemos-IU, Jacinto Morano, ha asegurado que el Gobierno regional tiene "recursos suficientes" para mantener esos contratos hasta final de curso "porque se los ha aportado el Gobierno de la nación", y ha exigido "que los destine a donde lo tiene que destinar que es a la educación pública y no a hacerle regalitos a sus amigos de la concertada". Morano ha indicado que su grupo parlamentario llevará una iniciativa al Pleno de la Asamblea la primera semana de diciembre para que todos los grupos voten la prolongación de los contratos, que espera sea respaldada por los grupos del Gobierno.

Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, ha planteado que estos refuerzos se mantengan no solo hasta final de curso sino "como un refuerzo estructural" del sistema educativo, ya que ha señalado que Madrid está a la cola no solo en la inversión sino también en el número de profesores, y las familias madrileñas son las que más pagan "de su bolsillo" para educar a sus hijos.

el Periódico de Catalunya

El purificador de aire en las aulas, un aliado para evitar contagios de covid-19

Algunos centros educativos de Catalunya han incorporado ya estos aparatos, que ayudan a mejorar la ventilación

El Periódico. BARCELONA - MIÉRCOLES, 18/11/2020

La ventilación de espacios cerrados es una de las claves para evitar contagios de coronavirus. Y con la llegada del frío, en que mantener las ventanas abiertas puede resultar más complicado, los purificadores de aire aparecen como unos buenos aliados a la hora de ayudar a mejorar la ventilación. Es la conclusión a la que han llegado algunos centros escolares de Catalunya, que ya han instalado estos aparatos en algunas de sus aulas.

Es el caso de las escuelas, institutos y guarderías del Ripollès y de Sant Quirze de Besora que, gracias a una donación solidaria de la empresa Sodeca, tienen ya un purificador de aire en sus instalaciones. El director de uno de estos colegios, los Salesianos de Ripoll, Arnau Ferrer, explica que "la principal duda era el mantenimiento, pero no es ni difícil ni caro". En el caso de los Salesianos, han decidido instalar el aparato en el comedor, el lugar más concurrido de la escuela --130 alumnos repartidos en dos turnos-- y donde los alumnos no usan mascarilla. Ferrer apunta que por lo demás siguen con el resto de medidas de prevención, como separación de las mesas, ventilación natural e higiene de manos.

Este colegio de Ripoll ha situado el purificador en el centro del comedor. El aparato filtra el aire y va indicando todos los niveles que hay en cada momento. "Si se pone rojo, significa que el ambiente está cargado, y abrimos las ventanas", explica Ferrer. Pasado el primer turno de comedor, la máquina no ha pasado del color naranja.

El balance que hace este centro es muy positivo. Y el aparato les ha llegado cuando ya habían empezado a poner la calefacción en momentos puntuales del día. Cuando bajen más las temperaturas, en pleno invierno, prevén seguir ventilando las aulas como marca el protocolo.

Desde que empezó el curso escolar, los Salesianos han tenido que confinar un grupo de 18 niños. El centro tiene 250 alumnos.

El director de los Salesianos explica que el funcionamiento y el mantenimiento del purificador es fácil. "Se puede programar con una app del teléfono o manualmente y la misma máquina te avisa cuando hay que limpiar los filtros". Sin embargo, admite que no ve viable comprar uno por aula. El modelo que tienen cuesta casi 1.000 euros.

Esta es la primera experiencia de las escuelas catalanas con los purificadores de aire. La Conselleria d'Educació hará un seguimiento para estudiar su implantación.

Comarca fría

El director general de Sodeca Group, Josep Font, explica que decidieron hacer la donación a las escuelas del Ripollès a raíz del debate social sobre la ventilación en las escuelas. "Estamos en una comarca de montaña y ventilar de forma natural con el frío puede ser problemático", apunta Font.

La iniciativa ha contado con la colaboración del Consell Comarcal del Ripollès. La tecnología que han diseñado cuenta con un sistema patentado que elimina bacterias, virus y microorganismos perjudiciales.

Batalla en Educación para mantener los contratos de los profesores de refuerzo

Padres y sindicatos exigen renovarlos todo el curso, y Madrid pide más fondos estatales

Sara Medialdea. Madrid 18/11/2020

Algo más de 1.100 profesores de refuerzo fueron contratados en septiembre para que, durante el primer trimestre del curso, suplieran las mermas en la educación de los escolares durante la caótica segunda mitad del curso pasado. Pero sus contratos acaban el 22 de diciembre y el Gobierno regional ya ha avisado que no los renovará porque no puede sostener ese gasto. La comunidad educativa protestó ayer en la calle contra la medida, que puede dejar, lamentan, a 20.000 alumnos sin docentes. Padres y sindicatos exigen a Educación que renueve a estos profesores para todo el curso, mientras el Gobierno regional plantea que los fondos Covid que paga el Gobierno Central hasta fin de año se mantengan hasta junio de 2021.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, hacía ayer balance del inicio de curso más complicado de la historia durante su participación en un Encuentro Digital de Europa Press. Allí, aportaba los últimos datos sobre incidencia del Covid-19 en los centros escolares: a día de hoy, hay 25.000 alumnos y 1.200 aulas en cuarentena, de un total de 1,2 millones de estudiantes y 60.000 aulas.

Destacó Ossorio los esfuerzos realizados: «Hemos contratado al 35% del total de profesores contratados en España», realizado test a 100.000 docentes y comprado 9,5 millones de mascarillas o 650.00 litros de hidrogel. Se han invertido 370 millones de euros en el último trimestre del año, «casi un 10 por ciento de nuestro presupuesto total». Justificó que no se vaya a renovar el contrato de estos 1.117 profesores de refuerzo y 200 educadores en infantil porque «sólo se les contrató para el primer trimestre», y existen otros programas el resto del curso.

Llenar huecos

Pero la decisión de no renovarlos abre una herida que ayer quedó patente en la protesta llevada a cabo por los sindicatos. Isabel Galván, de CC.OO., no entendía que se dejara de contar con estos docentes porque «en Educación saben que son necesarios». Tras anunciar Andalucía o Canarias que prorrogarían contratos de refuerzo hasta fin de curso, espera que Madrid «apueste también por la continuidad», antes incluso de saber si podrá contar con fondos del Gobierno Central, porque «no podemos tener al sistema educativo como rehén», recordó. Estos docentes, insiste, no sólo han reforzado, sino que han ido «llenando huecos» allá donde hacían falta: «Se resquebraja uno de los pilares que ha permitido una vuelta segura a las aulas» si dejan de estar, advierte.

Los padres también quieren que se amplíen sus contratos: Mari Carmen Morillas, de la Fapa Giner de los Ríos, insistía en ello, a la vez que recordaba que «aún no han llegado todos los docentes previstos a las aulas, y eso que estamos a mitad de noviembre». Citando al consejero, señaló que «faltan de 500 a 1.000; a nosotros nos llegan llamadas todas las semanas en este sentido».

Los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid insistieron al Gobierno regional en que haga estas contrataciones; Ángel Gabilondo no descartaba la llegada de fondos estatales para cubrir el gasto. Desde Vox, Rocío Monasterio pedía priorizar: «No queremos los recursos de los madrileños en el comisionado de bienestar animal, o más consejerías... queremos recursos para educación».

El Gobierno decidió controlar por ley la educación concertada tras los efectos de 20 años de políticas del PP en Madrid

Medidas como la prohibición de ceder suelo público para conciertos u obligar a los centros a tener "áreas de influencia" y un reparto equitativo del alumnado según su origen socioeconómico para evitar la segregación están inspiradas en los resultados de las políticas educativas populares en Madrid, según admiten responsables de la ley

Daniel Sánchez Caballero. 18/11/2020

Cuando se pregunta a altos cargos del Gobierno —o del PSOE o Unidas Podemos— sobre los cambios que afectan a la escuela concertada en la LOMLOE (popularmente, la 'ley Celaá') una muletilla se cuela cada pocas frases a la hora de poner ejemplos concretos: "Como sucede en Madrid". Es una constante que repiten unos y otros y que ha dejado su poso por toda la norma: desde la prohibición de la cesión de suelo público a centros con concierto hasta la pretensión de repartir equitativamente al alumnado por toda la red financiada con fondos públicos para evitar la segregación, pasando por la supresión de la repetida expresión "demanda social" para apuntalar centros concertados o la obligatoriedad de publicitar las plazas libres de profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Buena parte del articulado de la LOMLOE en lo relativo a la concertada se debe por tanto, según fuentes socialistas y del Ejecutivo, a las políticas educativas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid durante más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular. Unas políticas que han elevado a la concertada a base de, por ejemplo, la cesión del suelo público a centros que luego se concertarían pero que no existían previamente lo que contravenía la legislación (y que luego fueron arrojadas por la LOMCE de José Ignacio Wert en ciertos casos). ¿Cuánto de la nueva norma respecto a la educación concertada es debido a los efectos observados de la fórmula PP en la Comunidad de Madrid? "Casi todo lo relacionado con la concertada", concede un alto cargo del PSOE. También la ministra, Isabel Celaá, ha criticado en público la cesión de suelo público o, con carácter más general, la segregación de la Lomce.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no es ajena a que la LOMLOE amenaza el modelo educativo madrileño. El pasado viernes, el día que se aprobó la versión casi definitiva de la ley en la Comisión de Educación, anunció que presentará una ley que, "sin fisuras", defenderá "no sólo la educación concertada y la libertad de enseñanza en general" sino, sobre todo, la educación especial.

Por la "libertad de elección"

Bajo el lema de la "libertad de elección de las familias" en lo referente a la educación, el PP ha practicado dos décadas de apuesta por la escuela con concierto en Madrid. La expresidenta Esperanza Aguirre fue la paladín de este movimiento, que no perdió un ápice de fuerza con sus sucesores. El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, anunció que impulsaría la escuela concertada durante la legislatura. El resultado de estos 20 años es una región que si fuera un país sería el segundo que más segrega a su alumnado de toda Europa, segunda en estudiantes en la escuela concertada y subiendo (en porcentaje y en el total, pese a ser la tercera con más alumnado) y con un gasto en subvencionar centros privados del 20% del presupuesto educativo –sin contar el gasto en profesorado–, cinco puntos superior a la media nacional. Unos centros que, junto a los privados sin concierto, acumulan un tercio de los beneficios que gana el sector en toda España y que contratan a su profesorado sin pasar por el debido proceso de mérito y capacidad que rige las contrataciones que, como estas, se realizan con fondos públicos.

Los datos hablan solos. El alumnado en centros concertados de la región no ha parado de subir en la última década. Lo que en el curso 2007-2008 eran 280.656 alumnos (el 27,2%) diez años después eran 364.168 (29,9%, más que Andalucía, que tiene más población, y los mismos que Catalunya). Los de la escuela pública han pasado del 59,26% al 54,2% en el mismo periodo. El número de centros ha caído en términos relativos: de 524 (15,9%) a 558 15,2%. En el profesorado es más difícil seguir la evolución porque hace diez años no se separaban los de la privada sin concierto de los financiados con fondos públicos. Incluyendo a todos en el mismo saco, han pasado de ser 34.547 (el 40,7%) a 43.005 (45,2%) en una década. Respecto a la financiación, tampoco se distinguía lo dedicado a conciertos hace diez años, pero a día de hoy, la Comunidad traspasa uno de cada cinco euros a fondos privados, un total de 1.018 millones de euros el último año. Un último dato económico: el sector educativo privado madrileño –con o sin concierto– ganó en el curso 2014-15 un total de 122 millones de euros, según la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE. Estos beneficios son casi un tercio del total de lo ganado por el sector en toda España ese curso.

El distrito único y la cesión de suelo, comienzo de todo

El principio de casi todo, o al menos la medida más lesiva si hablamos de segregación, fue la creación del distrito único en toda la Comunidad en 2012, según constató un estudio. Se rompieron las áreas de influencia de los colegios para dar puntos para la escolarización y que las familias pudieran escoger su centro de preferencia en cualquier lugar de la región. En la práctica, según explicó una de las autoras del informe sobre segregación en Madrid, algunas familias pueden elegir más que otras. Esta medida vino acompañada de una rebaja del tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. A la vez, se daría un punto extra por tener un hermano en un centro (esto se modificó al año pasado para dar puntos por cada hermano, antes solo sumaba uno). ¿El resultado de estas medidas? Se disparó la segregación hasta un 13%. La principal segregación es de tipo económico (los ricos por un lado, los pobres por otro), pero no es la única.

La Comunidad también hizo de la cesión de suelo público para la construcción de centros que luego recibirían un concierto una práctica habitual. Una práctica habitual y un supuesto negocio, toda vez que el número tres de Aguirre, Francisco Granados, fue detenido precisamente por cobrar comisiones en la construcción de centros concertados a los que cedía suelo público. Aparte de este supuesto delito, la cesión en sí también exploró los límites de la ley antes de que fuera regulada por José Ignacio Wert en su Lomce. La región pasó años cediendo suelo a centros que no existían previamente, una práctica que la ley no contemplaba. Para dar un concierto, un colegio tenía que existir previamente y pedirlo. Madrid obvió esta parte regalando el uso –a 75 años– de muchas parcelas a centros que no existían más allá del papel.

Auge y caída de la "demanda social"

Relacionada con esta práctica está la invención del concepto de "demanda social", que introdujo la Lomce. Este concepto venía a traducirse en que si en una determinada zona la mayoría de las familias solicitaba una escuela concertada, la administración debía dar por bueno que la "demanda social" de esa zona era de más

escuela concertada. Lo que no explicaba la ley es cómo se pondera esta "demanda social" en un barrio que tiene tres colegios concertados y uno público (o directamente ninguno), por lo que la mayoría de las familias acudirán al concertado a matricular a sus hijos.

La LOMLOE aborda estas cuestiones que se dan "por ejemplo en Madrid", según citan algunos responsables de la ley y diputados que han trabajado en introducir enmiendas. La ley Celaá prohíbe directamente la cesión de suelo público para construir centros privados, tengan o no concierto, y elimina el concepto de "demanda social" de su articulado, que sustituye por una programación de las plazas por parte de la administración educativa "mediante una oferta suficiente de plazas públicas", según el texto de la ley. El espíritu de la norma es que las plazas educativas se garanticen en centros públicos: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública", se lee en el articulado.

Segregación y "áreas de influencia" de los colegios

La ley Celaá también tratará de evitar la segregación del alumnado, tan madrileña, para que los estudiantes se repartan de manera equitativa por todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada. Se primará de nuevo en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que recogía la LOMCE pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género", dice la LOMLOE.

Asimismo, y esto es novedad, la norma recupera las "áreas de influencia" de los colegios para reforzar este reparto, y encomienda a las Comisiones de garantía de admisión "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza (...). Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación".

Control de la contratación de profesorado

La LOMLOE también pretende corregir otra circunstancia que se ha creado en Madrid: la falta de transparencia a la hora de contratar profesores de la escuela concertada. Este elemento no es nuevo. Establecía la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 en su artículo 60 que "las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán públicamente". El Gobierno quiere velar por su aplicación, y añade que los principios de "mérito y capacidad" a respetar serán "en relación al puesto docente que se va a ocupar". Además, añade que la administración velará porque en los procesos de selección y extinción laboral se realicen de acuerdo a la normativa y procedimientos "que resulten de aplicación", en referencia a la ley. La Comunidad de Madrid no cumple con este precepto, según admitió el Gobierno regional, quizá sin querer, en una respuesta a un docente que solicitó información sobre la cuestión vía Consejo de Transparencia. "Se le ha dado traslado de la información de que la que se dispone actualmente", explicaba la respuesta. La información que se trasladó al docente era que no había información. Otras regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia o Navarra sí las publican a través de la Consejería de Educación.

europapress.es

Cuatro de cada 10 españoles apuestan por la educación totalmente presencial mientras dure la pandemia

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 38,9% de los españoles considera que las clases escolares deben mantenerse de forma exclusivamente presencial durante el tiempo que dure la pandemia, frente a un 35,7% que apuesta por una mezcla de clases presenciales y online, y un 10,8% que cree que lo mejor sería que todas las asignaturas se impartieran de forma virtual.

Así se desprende del avance de resultados del Barómetro de noviembre de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ha preguntado a los españoles sobre cómo debería organizarse la enseñanza de los niños y las niñas mientras dure la emergencia sanitaria de la Covid-19.

Aunque la mayoría opta por la educación presencial o semipresencial, también hay un 2,7% de encuestados que preferirían que no hubiese clases hasta que termine la pandemia.

Además, otros porcentajes reducidos (por debajo del 1%) apuestan por tomar una decisión u otra teniendo en cuenta diferentes factores como la evolución de la pandemia, las zonas, la edad de los niños, los recursos económicos y necesidades de los progenitores. Asimismo, un 0,5% opta por la presencialidad siempre que haya "más profesores y los grupos sean reducidos"

EL PAIS

Salman Khan: “Solo medimos las habilidades académicas. Pero el humor, la empatía o la creatividad son también importantes”

El creador de Khan Academy, y premio Princesa de Asturias, reflexiona sobre el papel de la tecnología en la mejora y la democratización del aprendizaje

NACHO MENESES. Madrid 18 NOV 2020

Cuando Salman Khan (Nueva Orleans, 1976) empezó a darle clases de matemáticas a su prima Nadia por Internet en 2004, poco se imaginaba hasta qué punto aquello le iba a cambiar la vida. Este matemático, ingeniero eléctrico e informático, formado en Harvard y en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), se dio cuenta de que muchas de sus dificultades se debían a vacíos que se habían ido acumulando en su aprendizaje, como la conversión de unidades, y que impedían que asimilara conceptos más avanzados: hasta tal punto la ayudó que más tarde la joven llegó a matricularse en Medicina. Cuando más familiares y amigos le pidieron ayuda, decidió crear una serie de tutoriales en YouTube en lo que sería el germen de Khan Academy, una iniciativa de educación gratuita que nació con el propósito de llevar educación de calidad a todos los rincones del mundo y que le valió la concesión del premio Princesa de Asturias de Cooperación 2019.

En 2009, Khan decidió dejar su trabajo como analista financiero en Silicon Valley para apostar todo a su nuevo proyecto educativo, que acabaría atrayendo el apoyo de mecenas como Google, Bill Gates o Carlos Slim. Hoy, Khan Academy tiene más de 100 millones de usuarios registrados en 190 países, y sus más de 7.000 vídeos educativos en materias que van desde las Matemáticas y la Economía a la Biología, la Química, la Historia o la Física se han visualizado 1.700 millones de veces. Recientemente, Salman Khan participó en la clausura de EnlightED, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación organizada por IE University, Fundación Telefónica, Fundación Santillana y South Summit.

Pregunta. Usted ha mencionado que la escuela actual, obligada a cumplir con un programa y un calendario, fracasa a la hora de llenar los vacíos que se van creando en el aprendizaje de los alumnos. Un sistema que les empuja a seguir avanzando aunque no todos hayan asimilado cada contenido. Cuando tienes 25 o 30 alumnos, solucionarlo parece tarea imposible...

Respuesta. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 50 años, la única forma de lograr algo así hubiera sido con más profesores y una ratio más baja; casi de uno a uno. Hoy, si tú eres un profesor con 30 alumnos en clase, cada uno con sus lagunas y ritmos de aprendizaje distintos, ¿cómo atiendes a sus necesidades individuales? En clase de matemáticas, por ejemplo, el profesor puede dejar que aprendan a su propio ritmo en Khan Academy, y que llenen esos vacíos. El rol de los docentes es muy importante, porque siempre habrá quienes necesiten ayuda con su motivación o con el contenido. Si el profesor puede monitorizar, en tiempo real, en qué punto se encuentra cada estudiante, también puede identificar si este y aquel siguen teniendo dificultades con, por ejemplo, los números negativos, sentarse con ellos y ayudarles 10 o 15 minutos, para luego dejarles trabajar por su cuenta mientras se sienta con otros cinco que tienen problemas con los decimales.

También puedes hacer que los estudiantes se ayuden unos a otros: si alguien tiene problemas con las fracciones, puedes hacer que otro alumno al que se le dan muy bien le ayude. Esto nos acerca a esa interacción humana del uno a uno que puede darse en el aula, pero que me hizo preguntarme si acaso podía ser mucho más extensa. Durante la covid, he lanzado otra organización sin ánimo de lucro, Schoolhouse.world, centrada en dar a todos los estudiantes acceso a pequeños grupos de tutorías online en contenidos específicos [por Zoom]. Quizás, en un futuro, si tienes dificultades en Khan Academy, además de ver un vídeo, practicar y mirar las soluciones, puedas conectarte en solo media hora a una sesión que haya en Schoolhouse.world sobre este tema (o, por supuesto, contar con la ayuda de un profesor o un padre).

P. Ha dicho también que “la escuela tradicional te castiga por experimentar y fallar”. ¿Por qué?

R. En la escuela tradicional, si te retas a ti mismo, optas por un camino más difícil y sacas una C [un bien], una D [un suficiente] o incluso suspendes la asignatura, eso te supone un estigma masivo en tu autoestima, en tu expediente académico... En muchas partes del mundo, si eres un estudiante de Secundaria y suspendes una clase, tus posibilidades de entrar en la universidad son muy bajas. La realidad es que el fracaso es simplemente una señal de que necesitas seguir trabajando sobre algo. Yo creo firmemente en las evaluaciones, pero estas nunca deberían ser permanentes. Imagina que tienes un hijo de ocho años; que le pones a intentar unos tiros libres de baloncesto y que encesta el 20 %. ¿Tú le dirías que es un jugador terrible? ¡No! Probablemente LeBron James era igual a los ocho años. ¿Y por qué es tan bueno ahora? Porque siguió practicando. Nadie le dijo “eres un tirador de libres mediocre”.

P. ¿Debería cambiarse la manera tradicional de evaluar los conocimientos?

R. Esto tiene dos niveles. La evaluación tradicional, que mide las habilidades académicas tradicionales, es importante. La manera de modificarla es hacer que no sea una única oportunidad. Si eres un estudiante de noveno grado [tercero de la ESO], tienes un examen de álgebra y sacas un 80 [sobre 100], eso va a tu libro de calificaciones. A mí me gustaría crear un mundo en el que pudieras ir al profesor una semana después, y decirle: "Oye, yo saqué un 80 pero he seguido trabajando y creo que ahora podría sacar un 95 o un 100. ¿Puedo intentarlo otra vez?"

Esto ha sido históricamente difícil porque los profesores tendrían que crear nuevas evaluaciones, calificarlas... Y los alumnos tendrían que aprender por su cuenta; es logísticamente complicado. Con Khan Academy, los estudiantes pueden hacer pruebas que se alimentan de bancos de preguntas muy amplios, por lo que podrías usar 10 o 15 de ellos y que todos fueran diferentes. Me gustaría ver un mundo donde la gente pudiera hacer uso de este tipo de herramientas para repetir una prueba evaluativa tantas veces como sea necesario, y que el profesor te diga: "Mira, el mes pasado sacaste un 75 pero has estado practicando y ahora has sacado un 90. Voy a cambiar tu nota".

P. ¿Y cuál sería el otro nivel?

R. Expandir lo que intentamos medir en esas evaluaciones. Históricamente, solo hemos medido las habilidades académicas porque son muy cuantificables. Pero aspectos como las habilidades comunicativas, la empatía, la creatividad o el humor, considerados intangibles, son también muy importantes, aunque ¿cómo les ponemos un número? Uno de los proyectos en los que estoy trabajando, Schoolhouse, permitiría, de una manera estandarizada, cuantificar lo que históricamente han sido aspectos subjetivos: no solo ofrecer tutorías de igual a igual, sino que los estudiantes pueden certificar su conocimiento haciendo un examen en Khan Academy mientras la webcam les graba y ellos hablan. Supón que sacan un 90; luego remiten esa prueba a la comunidad, y dos miembros al azar se asegurarán de que la calificación es correcta y de que el vídeo no ha sido alterado.

Ese alumno pasará entonces a dar tutorías sobre ese contenido a otros estudiantes, e irán mejorando su valoración como tutores. Es la evaluación definitiva, porque no solo demuestra que dominas el material, ya que puedes enseñarlo, sino que posees habilidades comunicativas y empatía. Una valoración alta como tutor destacaría estos aspectos. La Universidad de Chicago anunció, hace un mes, que usarán el nivel de valoración en Schoolhouse como un índice a tener en cuenta al valorar las solicitudes de admisión en su universidad.

P. ¿El futuro de la educación pasa por incorporar el modelo del aula invertida?

R. En su mayoría. Si la gente puede recibir clases a su propio ritmo, y que cuando vayan a clase se produzca una mayor interacción humana, que lo hagan. Estoy de acuerdo con esos dos principios. Pero creo que se puede ir más allá. Para algunos alumnos, en clase, funcionará el ver un vídeo, hacer ejercicios y que el profesor venga a ayudarles con aquello que necesiten; y lo mismo en casa. El aula es la herramienta más potente porque, si necesitas ayuda, tienes allí a tus compañeros y al profesor, además de la interacción social. Pero también quiero crear un mundo en el que, incluso por la noche, si tienes problemas con algo y Khan Academy no es suficiente para ayudarte, y necesitas hacerle preguntas reales a una persona real, puedas pinchar en un botón y una persona de verdad aparezca.

P. La pandemia ha acelerado la digitalización de nuestras sociedades, y movió gran parte del trabajo y de la educación a un entorno virtual. Cuando esto por fin se supere, ¿es posible que se olviden esos cambios y transformaciones, y simplemente se vuelva a las prácticas anteriores?

R. Es difícil predecir el futuro. Mi instinto me dice que, en una escala del uno al 10, donde 10 es una inmersión digital completa, y cero es ausencia de lo digital, si antes de la covid estábamos quizá en un tres, y durante la covid, en un siete u ocho, sospecho que vamos a volver a un cuatro o cinco. La pandemia tendrá un impacto permanente, con toda una generación de profesores que tuvieron que profundizar en su relación con la tecnología. Ha sido incómodo y complicado, pero la mayoría lo ha hecho bastante bien, y va a merecer la pena en el futuro; va a haber menos miedo a la tecnología, porque todos la han tenido que utilizar durante casi un año.

Lo mismo sucede con los estudiantes y sus familias, porque en una situación que no es ideal, ven algunos aspectos que son de hecho bastante interesantes, y se dan cuenta de que quizá su hijo pueda tomar algún curso de manera virtual, o que su hijo aprende mejor con esta modalidad, a su propio ritmo y con una personalización mayor. Yo creo que los padres no van a dejar que eso se pierda.

En estos momentos, con las escuelas más o menos abiertas, pero sin todos los alumnos presentes, los centros han tenido que desarrollar la capacidad de apoyar tanto a los que están presencialmente como a los que no. Porque incluso después de la covid, siempre habrá un 10 % de alumnos que a lo mejor están enfermos, o que han tenido que viajar, o estar lejos de clase... Y existirá una mayor flexibilidad. También está la posibilidad de que los estudiantes estén conectados no solo con los profesores de su escuela, sino con los de su distrito escolar, los de su país o los de todo el mundo.

P. Se ha hablado mucho de cómo el sistema educativo les está fallando a los estudiantes, pero ¿no cree que también les está fallando a los profesores, y haciendo que poco a poco pierdan esa pasión tan necesaria para que hagan su trabajo de manera efectiva?

R. Por supuesto. Siempre ha habido un montón de profesores excelentes, pero el sistema se preocupa siempre por los profesores que no lo están haciendo bien. Así que, para controlarlos, ponen más y más restricciones sobre todos los profesores, y alguno de esos buenos profesores se sentirán frustrados e incluso lo dejarán,

porque tienen menos autonomía. También hay un componente cultural: mi familia proviene de la India, y allí los profesores son reverenciados, lo son todo, mientras que, en Occidente, debido al énfasis que se pone en lo que uno gana, los estudiantes reciben incluso en casa el mensaje de que como los profesores ganan menos que, por ejemplo, los ingenieros, eso influye en cómo se les respeta y cómo se les trata. Es un problema muy serio y un círculo vicioso, porque si no tienes ese respeto, no vas a poder atraer a tantos profesores. Creo que ese puede ser uno de los beneficios de la pandemia, el que los padres entiendan ahora la educación de sus hijos un poco mejor, y tomen una mayor responsabilidad. Es un momento difícil para ser profesor, debido al salario, a las limitaciones, y por la actitud respecto a ese respeto.

P. En el contexto de aprendizaje permanente que se demanda hoy, ¿qué relevancia tendrán en el mercado laboral contenidos gratuitos como los de Khan Academy o los MOOCs, por ejemplo?

R. Un papel importantísimo. Los MOOCs son el perfecto complemento para ese aprendizaje permanente. Si eres un ingeniero mecánico de treinta y tantos años, y quieres convertirte en un ingeniero de programación, vas a Coursera o EdX, inviertes tiempo en tus noches y fines de semana, y aprendes y consigues una certificación en ciencia de datos, o en ingeniería de programación. Y muchas de esas personas, si tienen problemas con los prerrequisitos, van a Khan Academy, y vuelven a aprender esas matemáticas, o esa estadística, para poder luego aprender a un nivel de grado o posgrado. Y ese fenómeno solo va a acelerarse, a medida que más y más industrias se destruyen y se crean al mismo tiempo.

europapress.es

Un total de 31 proyectos de FP recibirán 408.000 euros en ayudas de la Fundación Bankia y FPEmpresa

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) –

La cuarta edición de la Convocatoria Ayudas Dualiza, de la Fundación Bankia y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, ha seleccionado un total de 31 proyectos de colaboración entre centros educativos de FP y empresas, distribuidos en 14 comunidades autónomas y Ceuta, que recibirán un total de 408.000 euros para su desarrollo, la mayor cantidad distribuida hasta ahora.

Por primera vez, la convocatoria introducía una categoría de proyectos en red para premiar la colaboración entre diferentes centros educativos, una categoría que ha sido un éxito ya que uno de cada cuatro proyectos premiados ha sido para desarrollarse en esta modalidad. Las entidades organizadoras han agradecido la amplia implicación mostrada por los centros educativos y por los docentes a la hora de presentar proyectos, ya que se han presentado más de un centenar de proyectos.

A la hora de evaluar, la comisión de evaluación ha tenido en cuenta que los proyectos sean innovadores; fomenten la coparticipación entre centros; tengan impacto social; diversiquen los agentes participantes; establezcan mecanismos de coordinación y comunicación; contemplen perdurabilidad para proporcionar resultados a largo plazo; sean transferibles; y faciliten la comunicación de los logros conseguidos. Entre los proyectos seleccionados este año guran algunos destinados a impulsar la robótica, la economía circular, el sector naval, la investigación sanitaria o el marketing. Además, destaca el carácter solidario que presentan algunos de ellos, lo que es especialmente relevante al mostrar el compromiso que la FP asume con la sociedad más allá del carácter meramente formativo.

El director de Fundación Bankia por la Formación Dual, Juan Carlos Lauder, ha querido agradecer el trabajo desarrollado por todos los profesionales de la FP del país, que han vuelto a confiar en la Convocatoria de Ayudas Dualiza presentando numerosos proyectos, del mismo nivel que en ediciones anteriores, pese al esfuerzo adicional provocado por el COVID. Además, ha mostrado su satisfacción por que "la Convocatoria se haya convertido ya en todo un referente para la Formación Profesional, tanto por el apoyo que supone a la hora de poder desarrollar proyectos, como por su capacidad para permitir compartir esas ideas entre toda la comunidad educativa".

Por su parte, el presidente de FPEmpresa, Luis García Domínguez, ha destacado que desde la asociación están "orgullosos" de todos los centros que, a pesar de la situación derivada por la pandemia, de semipresencialidad y de reorganización de la FP, "han mantenido el espíritu de innovación y han presentado estos proyectos a la Convocatoria Dualiza".



El PSOE, a la concertada: «Para qué nos vamos a reunir, está todo pactado»

El rodillo del Gobierno logrará hoy aprobar en el Pleno del Congreso el dictamen de la «ley Celaá»

Josefina G. Stegmann. MADRID Actualizado:19/11/2020

«Ya no hay nada que hacer», lamentan fuentes de la concertada, con la misma desazón que se percibe en la voz de los diputados de la oposición: «No llegamos con los votos», dicen fuentes parlamentarias del PP. «Podríamos votar una enmienda transaccional (acuerdo entre varios partidos) pero los votos son los mismos; no llegamos», lamentan.

El rodillo del Gobierno logrará hoy aprobar en el Pleno del Congreso el dictamen de la «ley Celaá» (es decir, el texto original con todas las enmiendas incorporadas hasta la fecha). También se votarán las enmiendas «vivas»; es decir, las que quedaron fuera del dictamen y las transaccionales presentadas hasta ayer a las 11.

Tal como avanzó ayer ABC, ninguna de estas últimas contenía una marcha atrás en los planes del Gobierno por lo que, salvo sorpresa de última hora («que se confunda algún diputado en la votación», bromeaban fuentes parlamentarias) todo indica que la «ley Celaá» saldrá adelante en la Cámara Baja. Y lo hará tal como se la conoce hasta ahora: con la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; con la concertada asfixiada con la creación de plazas públicas en detrimento de las subvencionadas con fondos públicos y con el cierre, en diez años, de los centros de educación especial.

Reunión in extremis

Aún así, la concertada sí intentó dialogar in extremis para solicitar, a través de entidades afines al PSOE, una reunión con el partido, según relatan a ABC fuentes de la concertada. Su intención era modificar la redacción del artículo 109, que perjudica seriamente al sector después de que el PSOE decidiera ceder en este punto a las peticiones de Podemos. La respuesta del partido a la solicitud de reunión fue clara, o más que respuesta lo que hubo fue un portazo: «Para qué nos vamos a reunir, ya está todo pactado». Al parecer, el PSOE no está dispuesto a limitar más las peticiones que el grupo morado les hizo sobre la «ley Celaá».

Constitucionalistas

Por otro lado, las entidades constitucionalistas Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana y S'ha Acabat! presentaron ayer en el Registro del Congreso una petición para que se mantenga en la Ley de Educación el carácter de lengua vehicular para el castellano y las demás lenguas cooficiales. «Los derechos lingüísticos de todos los alumnos quedaran en manos de la arbitrariedad de los gobiernos de las comunidades bilingües y el ejemplo es lo que ya ocurre en Cataluña», advirtió a ABC Ana Losada, presidenta de la AEB.

EL PAÍS

Educación en tiempo de pandemia: ¿reforma o mejora?

No tengo dudas de que nuestro sistema educativo requiere cambios profundos ni, tampoco, de que la actual ley Wert ha de ser enviada al “rincón de pensar”

JUAN M. ESCUDERO. 19 NOV 2020

Reforma y mejora de la educación, dos grandes palabras cuyos significados y prácticas nos resbalan, como el agua, entre las manos. Deberían en teoría ir convenientemente unidas, pero en realidad muchas reformas no conllevan mejoras significativas, y muchos cambios para mejor resultan para peor. Estas apreciaciones podrían venir, en tiempos de pandemia, para la próxima Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). La covid-19 nos ha pillado por sorpresa y se nos ha presentado repleta de amenazas, desafíos e incertidumbres. Ha puesto en jaque la vida humana y la sanidad, la economía y el mundo del trabajo, la sociedad, la cultura, la misma política y, desde luego, la educación. Supone retos sin precedentes y exige simultáneamente respuestas con urgencia. Tendremos que reconstruir modos de pensar en uso y prioridades, desplegar e implementar estrategias y actuaciones con determinación, humildad, solidaridad, reflexión y flexibilidad. La activación de sinergias sumando diversas perspectivas, compromisos y actores va a ser crucial: no será posible proteger bienes comunes y esenciales en juego, concretamente educación, yendo cada cual a su aire.

No tengo dudas de que nuestro sistema educativo requiere cambios profundos ni, tampoco, de que la actual Lomce (ley Wert) ha de ser enviada al “rincón de pensar”. Creo que la Lomloe será mucho más pertinente (valores, principios, objetivos, decisiones estructurales y otras) que aquella, pero no sé si es del todo oportuna. Al observar otros ámbitos clave también impactados por la pandemia como el empleo, los ERTE han representado mejoras concretas, aplazando una reforma laboral también pendiente. Dos apuntes pues. Primero, una advertencia: la pandemia está zarandeando severamente nuestra vivienda (educación). Quizás, en lugar de remover ahora el terreno para construir otra casa, es urgente apuntalar mejor la que tenemos, protegiendo de la intemperie a sus habitantes. Advertidos estamos de que el ir y venir entre reformas puede distraer de mejoras necesarias, de ayer, hoy y mañana. Y de ahora mismo.

Segundo, algunas mejoras ya mismo. Una, activar con conciencia renovada, determinación y eficacia un combate en firme en contra de la desigualdad e inequidades educativas, que son intolerables. Manos a la obra, entre todos, sin hacernos trampas en solitario: no bastará eliminar itinerarios prematuros ni recuperar diversificación curricular, pues el reto, el de antes y actual, es mucho más profundo. Dos, contamos con saberes y experiencias muy valiosas en materia de una educación de calidad justa y equitativa. Ojalá la Lomloe lo enmarque bien, pero no bastará con legislarlo. Empecemos, ya mismo, por crear condiciones favorables y cercanas a la cotidianidad educativa y sus protagonistas, movilizandorelaciones, canales, propósitos y prácticas que fertilicen a todos los centros y aulas, a todo el sistema educativo. Tres, déjense tantas retóricas a favor del profesorado y, en su lugar, surja reconocimiento, respeto, apoyo, derechos y deberes, entornos laborales ricos, estimulantes, éticos. Y no más atribución simplista de los males que nos aquejan a los y las docentes: constituyen una malla de corresponsabilidades con otros muchos actores (inspectores, administradores, políticos, ciudadanía, etc.). Cuatro, reconstruir a fondo el gobierno de toda la educación: roles profesionales e institucionales, corresponsabilidades, coordinación, integración (reconocimiento explícito de lo escolar, municipal, ONG...), cogobierno, enfoque sistémico.

Ahora sí que –el virus silente nos lo está diciendo– o vamos juntos o todos iremos a pique. Cinco, si no sabemos qué pasa, cómo y por qué, será muy difícil decidir con fundamento: datos, informaciones, evidencias idóneas, así en sanidad como en educación.

Ojalá la Lomloe llegue bien. Esas mejoras (urgidas más todavía por la pandemia) y otras a debatir y decidir podrían además para irle preparando el camino.

Juan M. Escudero es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia.

La debilidad de la Lomloe

Una ley educativa que no se sostiene en amplios consensos políticos y sociales, lo afirma la Comisión Europea, está abocada a ser débil y sin recorrido.

PEDRO J. HUERTA NUÑO. 19 NOV 2020

A una ley debemos pedirle que represente aquello mismo que legisla. Este es uno de tantos puntos débiles de la Lomloe (Ley Orgánica de la Modificación de la LOE), cuyo contenido y trámite no es modelo de educación para el diálogo, para el consenso o la pluralidad.

Débil es una ley educativa cuya carta de presentación es la derogación de ley anterior, que ni convenció ni convence, que solo entiende el consenso como trámite político, que solo escucha a quienes hablan desde el revanchismo y deja fuera del diálogo parlamentario a la comunidad educativa. Una ley educativa que no se sostiene en amplios consensos políticos y sociales, lo afirma la Comisión Europea, está abocada a ser una ley débil y sin recorrido.

Débil es una ley educativa que enfrenta a la comunidad educativa, que en lugar de abrir espacios de diálogo provoca conflicto, se permite textos con redacciones ambiguas, abiertos a las más diversas lecturas, que auguran futuras interpretaciones sesgadas y rupturistas.

Débil es una ley educativa que aunque dice busca el equilibrio y la moderación, se hace ley del péndulo, y con la supuesta intención de ser equitativa y deshacer los desequilibrios, acaba creando nuevas injusticias y nuevos problemas, porque los péndulos nunca han sido amigos de lo bueno y de lo justo.

Débil es una ley educativa que no afronta las mejoras sustanciales y necesarias del sistema educativo, maltrecho por años de recortes económicos, heredero de un histórico abandono de la formación y la función docente, necesitado de una real y efectiva autonomía de los centros.

Débil es una ley educativa que parchea la reforma pedagógica y metodológica, que no promociona el esfuerzo, que pretende evitar el fracaso escolar ocultándolo, que destierra asignaturas, como Ética o Religión, que promueven pensamiento crítico, que entiende la integración como incorporación y la equidad como planificación administrativa.

Débil es una ley educativa que esconde su déficit de propuestas abonando el enfrentamiento entre quienes están en primera línea de la labor tarea educativa, aquellos que no renuncian a ningún esfuerzo para que los colegios sean espacios seguros y a la vez educativos, integradores y generadores de convivencia, todo ello en medio de la crisis sanitaria, de la económica y de la demográfica.

Débil es una ley educativa que habla de derechos y libertades, pero relega a la subsidiariedad, y en un futuro breve al cierre, a quienes solo aspiran a cooperar en el servicio público de la educación. Legislese para evitar abusos, para regular los recursos públicos de forma equitativa, para frenar desigualdades, pero sobre todo legislese para crear espacios educativos, para converger en la mejora de la educación, igualar las condiciones de acceso y condiciones laborales, y para ofrecer a cada alumno los medios y el proyecto adecuados para su educación en libertad.

Débil es una ley educativa que solo promueve la escuela única frente a la pluralidad y la complementariedad, que no pone bases para un pacto educativo político y social, que se convierte en problema cuando debería ser parte de la solución.

Pedro J. Huerta Nuño es secretario general de Escuelas Católicas, principal patronal de la enseñanza concertada.

europapress.es

El nivel de inglés de España no mejora y se estanca en el ranking mundial, según un estudio

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

España continúa sin mejorar su nivel de inglés y sigue estancado en la cola de Europa, alcanzando niveles de hace una década, según el informe EF EPI 2020, que le sitúa en la 34ª posición dentro del ranking mundial, con una puntuación total de 537 puntos. El índice de nivel de inglés de EF Education First evalúa el dominio de este idioma en los adultos y clasifica los países y regiones no angloparlantes. En esta edición ha sido elaborado con los datos extraídos de la prueba de inglés EF SET, que han realizado 2,2 millones de participantes de 100 países.

La investigación indica que, de las cuatro mayores economías de la zona euro, Alemania ha obtenido una buena puntuación, mientras que Francia, España e Italia siguen estando en las últimas posiciones del ranking, al igual que en las anteriores ediciones. A nivel internacional, en esta edición, Países Bajos repite y por segundo año consecutivo ocupa el número 1 del ranking seguido de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Austria, Portugal, Alemania, Bélgica y Singapur.

MADRID, LA QUE MEJOR HABLA INGLÉS

En relación con los resultados españoles, el informe revela que la Comunidad de Madrid con una nota de 573, y la capital madrileña con la misma puntuación, son la región y la ciudad del país que presentan un nivel más alto de inglés, seguidas de Cataluña (568 puntos) y Barcelona (572 puntos). Por su parte, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias y Navarra obtienen un nivel alto de inglés, mientras que Cantabria obtiene un nivel medio con una puntuación de 543, ligeramente superior a la media española (534).

Por debajo de la media española, y con un nivel medio se sitúan la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y en última posición, Extremadura.

En cuanto a ciudades españolas, además de Madrid y Barcelona, Bilbao, La Coruña, Zaragoza, Sevilla y Málaga están por encima del nivel medio español, mientras que Valencia se posiciona un punto por debajo de la media.

Por otro lado, la investigación concluye que las personas de 26 a 30 años tienen el mayor dominio del inglés en todo el mundo. Además, los datos muestran que los mayores de 40 años tienen un dominio medio del inglés significativamente menor.

El Confidencial

EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES

José Antonio Marina: "Hacer una ley de educación con la que está cayendo es estar en la luna"

El filósofo y pedagogo se muestra "cabreado" con la 'Ley Celaá', diagnostica un "síndrome de inmunodeficiencia social" a nuestra ciudadanía y no cree que vayamos a salir mejores de la pandemia

Fran Sánchez Becerril. 19/11/2020

Filósofo, escritor, pedagogo y humanista son solo cuatro de las palabras que definen a José Antonio Marina. El toledano es una de las voces más acreditadas del pensamiento en nuestro país, dedicando su vida a investigar la inteligencia y el poder de la educación.

A sus 81 años, el filósofo sigue más activo que nunca y este jueves participará en el Encuentro de Centros de Enseñanza que organiza ESIC, como conferenciante de Thinking Heads.

Marina se muestra "cabreado" con la 'Ley Celaá', diagnostica un "síndrome de inmunodeficiencia social" a nuestra ciudadanía y no cree que vayamos a salir mejores de la pandemia. En El Confidencial charlamos con el pedagogo sobre el miedo, las falsas promesas de los políticos, la nueva ley de educación, el futuro de la enseñanza, los efectos negativos del covid-19 en el aprendizaje y el efecto de la pandemia en el desarrollo social de los más pequeños.

PREGUNTA. Decían que de esta íbamos a salir mejores y valorando las pequeñas cosas que teníamos, pero varios meses después del comienzo de la pandemia la crispación y el hartazgo se han adueñado de la sociedad. ¿Cómo cree usted que saldremos de ésta?

RESPUESTA. Igual que hemos entrado, las sociedades cambian con mucha lentitud. Lo que va a salir es una sociedad económicamente empobrecida y deprimida, algo que espero que dure poco.

Siempre he sido muy escéptico sobre la idea de que la pandemia nos iba a hacer mejores personas y valorar más las cosas que antes no nos parecían importantes.

P. Mucha gente lleva sintiendo todos estos meses vulnerabilidad y miedo. ¿Puede tener algo bueno este miedo?

R. Hay gente que tiene muchísimo miedo, no solo de la enfermedad, también al futuro económico, que está en el aire.

El gran problema es que cuando uno se acostumbra demasiado a ciertos miedos se relajan los sistemas de protección, algo que está pasando con conductas como la falta de preocupación respecto al peligro de la pandemia. Mantener una postura equilibrada, ni ser temerario ni hipocondríaco, es clave. Debemos hacer un esfuerzo para darnos cuenta de los peligros reales, ni minusvalorados ni obsesionarnos con ellos.

P. La llamada al civismo y la responsabilidad individual ha sido una constante en los últimos meses, pero en algunos casos ha fracasado: botellones, gente sin mascarilla por la calle, sin respetar la distancia social en bares... ¿podríamos decir que ha fallado la educación social que recibimos?

R. Sí, ha fallado. El problema es que no tenemos una educación cívica muy arraigada como, por ejemplo, la que hay en los países del norte de Europa que tienen una formación ciudadana mucho más estable que la nuestra.

Nosotros no hemos cuidado la educación cívica por una razón, durante muchos años hemos insistido en que la moral cívica era una bobada, que la moral o era religiosa o no había moral. Cuando la religión pierde vigencia nos quedamos en una situación de anomia.

Tenemos que fomentar los hábitos ciudadanos. Se intentó hacer con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero el debate sobre esta materia fue sumamente torpe, sectario y absurdo. Daba la sensación de que estábamos muy poco maduros para conservar una ética social.

Llevo mucho tiempo diagnosticando una enfermedad social al que he llamado 'síndrome de inmunodeficiencia social'. La inmunodeficiencia fisiológica hace que un organismo no produzca anticuerpos para defenderse de las infecciones, pues con la sociedad española sucede igual, tampoco produce anticuerpos sociales para defenderse de las enfermedades sociales como la corrupción de alta o baja intensidad. No algo delictivo como tal, sino de la gente que no cumple bien sus deberes, de una especie de dejadez y descuido; y sobre todo que soportamos a mucho sinvergüenza. Todas estas cosas producen una sociedad que tiene muy pocos sistemas de defensa.

P. Aunque en aquel momento el debate sobre Educación para la Ciudadanía fuese "torpe, sectario y absurdo", ¿considera que ahora estamos suficientemente maduros como sociedad para formular nuevos planteamientos educativos sobre educación cívica?

R. Sin duda alguna. Pero no de una manera tan precipitada como se está haciendo con la nueva ley de educación, que no se ha hablado con nadie, por lo tanto va a tener una vigencia muy corta como el resto de leyes educativas.

Hemos vuelto otra vez a pensar que todo Gobierno tiene que hacer su ley de educación, y a la vista está que nunca ha servido para nada. Todos los gobiernos han caído en la ingenuidad de pensar de que si se cambia una ley, se cambiaba la educación y eso no es verdad. La educación se cambia cuando cambia lo que sucede dentro de las aulas y una ley muchas veces ni llega a las aulas. Hay que acercarse a las aulas, formar a los docentes, a los equipos directivos, estar en contacto con los padres y formar un ambiente de apoyo a la escuela, cosas que no se hacen por ley.

El efecto escuela en el éxito o fracaso no llega al 40%. El éxito viene de la procedencia económica y social de los alumnos. Tenemos que ayudar a las familias, porque las escuelas no lo pueden hacer todo. Y eso no se consigue con una ley, sino con un trabajo mejor organizado de movilización de los profesores y de la sociedad; pero sobre todo no perdernos en debates del siglo XIX y que son los que han estado impidiendo siempre que se pueda hacer un pacto educativo.

Otra vez estamos debatiendo si la educación debe ser concertada o no concertada, si la religión debería estar en la escuela, si tenemos que tener un currículo igual en toda la nación. Esto son cosas que las naciones avanzadas lo tienen ya superado y nosotros estamos todavía pataleando en el mismo pantano ideológico.

P. ¿Qué otros fallos tiene la 'Ley Celaá'?

R. Principalmente el que ya hemos hablado, como no se ha acordado con nadie, no va a tener recorrido. Cuando cambie el Gobierno, cambiará la ley otra vez.

Durante mucho tiempo he trabajado por un pacto educativo, pero ahora no es el momento del pacto educativo. Ahora tenemos que ir mucho más allá, tenemos que hacer un pacto por una sociedad del aprendizaje en la que todos los agentes sociales se den cuenta que, o todos nos ponemos a aprender y no solo en la escuela, o toda España se va a quedar muy atrasada.

Se está poniendo de manifiesto que estamos sometidos a la ley universal del aprendizaje, que dice que toda persona, institución o empresa para sobrevivir necesita aprender, al menos, a la misma velocidad a la que cambia el entorno; y si quiere progresar debe ir a más velocidad. Esto tienen que hacerlo empresas, políticos y las administraciones públicas porque el mundo cambia con mucha rapidez, algo que estamos viviendo especialmente ahora con la pandemia.

Ahora, únicamente en el terreno escolar necesitamos organizar los currículos de otra manera, introducir las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, saber cómo se puede organizar lo que el alumno tiene que aprender y lo que puede encontrar en un ordenador.

Tenemos que hacer un aprendizaje rápido de lo que está funcionando en otros países. Todos los países están en estado de emergencia educativa y tenemos que ver quién lo ha hecho bien, quién lo está haciendo mejor y no quedarnos ahora en enseñanza concertada o pública. Debemos observar las buenas escuelas gestionadas por un sistema público o privado, pero que estén dentro de la enseñanza pública, que sigan las indicaciones de una buena política educativa donde seguimos teniendo mucho fracaso escolar.

P. Dicen que los meses de telecolegio y las clases anómalas que se están viviendo ahora mismo en las escuelas están provocando un nivel de asimilación de conocimientos menor. ¿Cómo atacamos esas faltas de conocimiento en el futuro?

R. La pandemia ha traído consigo efectos negativos en los conocimientos adquiridos por los chicos, pero se pueden recuperar con mucha facilidad. Lo que me preocupa realmente es que se han perdido los hábitos de estudio, de trabajo, de comunicación y de sociabilidad, que son prácticas difíciles de recuperar.

Desde junio venimos alertando a las autoridades de la necesidad de diseñar de manera distinta este curso 2020/2021 porque veníamos de tres meses de confinamientos. Lo primero que teníamos que hacer en este primer trimestre del curso era ver cuál era la situación de nuestros alumnos, porque había muchos que se nos han perdido y no sabemos donde están; por eso el primer trimestre debería haber sido de recuperación para que cada uno pudiera recuperar lo perdido. Esto no se hizo y los alumnos cuya familia no valorase el aprendizaje, sin hábitos de trabajo en casa, ni los medios tecnológicos necesarios o un espacio en casa donde trabajar telemáticamente, y que además están en colegios que no han trabajado el colegio telemático bien, esos sí que van a tener realmente unos prejuicios muy serios.

Por ejemplo, pertenezco a Trilema, una fundación que gestiona seis colegios. En estos meses no solo nos hemos tenido que encargar de la adaptación, en algunos casos también hemos tenido que mandar alimentos a las familias de nuestros alumnos. Así que imagínate hasta qué punto las dificultades económicas están influyendo en el resultado de nuestros alumnos.

En este momento, con la que está cayendo, que el Ministerio se dedique a hacer una ley de educación... es que están en la luna. Ahora tendrían que estar mañana, tarde y noche yendo a las escuelas, viendo lo que se está haciendo en las escuelas, ayudando a los profesores, a los padres, colaborando con el resto de administraciones públicas y haciendo que los servicios de bienestar social estén coordinados con las escuelas. Y en lugar de estar haciendo todo esto lo dejan y se van a lo fácil que es 'vamos a hacer una ley de educación', como comprenderás yo estoy muy cabreado con esto.

P. La enseñanza se ha adaptado a toda prisa con la escuela telemática, clases semipresenciales... ¿Cuál cree que es el futuro de la educación?

R. Acabo de publicar un libro que es el resultado de un programa de investigación que se llama 'El proyecto centauro'. Los niños que están en las escuelas van a tener la experiencia de un cambio realmente brutal en ciertas cosas, sobre todo, por el desembarco de un sistema potentísimo de inteligencia artificial que nos van a obligar a cambiar una parte importante del desarrollo de la inteligencia de nuestros alumnos. Van a estar trabajando con una tecnología muy sofisticada, donde lo que se va a defender no es lo que se sabe, porque eso va a estar con un acceso muy fácil, sino lo que comprenden.

Toda la escuela tiene que estar muy centrada en formar a personas que sean capaces de comprender toda la información que tiene alrededor y de tomar decisiones; y ese es un modo distinto de educar la inteligencia. Lo que tenemos que prever es cómo se puede llevar a los currículos educativos.

El 60% de los puestos en los que van a trabajar los alumnos que ya están aquí no se han inventados, pues las herramientas que van a utilizar no se han inventado, ni los conceptos, ni cuáles van a ser sus problemas. La educación va a ir por delante y tendremos que enseñar a los alumnos una serie de cosas muy bien diseñadas para que tengan capacidad de aprender con rapidez, capacidad de aprender y que tengan fuerza de carácter para tomar decisiones en un mundo en que mucha gente va a querer tomar decisiones por ellas. Ese es un reto de educación que no se está tomando en serio.

En este momento la investigación más puntera sobre educación no la hacen las universidades, ni los sistemas educativos, lo están haciendo las grandes tecnológicas. Están investigando muchísimo porque quieren ser los grandes educadores del universo, pero no porque haya una conspiración, es que es un gran negocio.

Por ejemplo Microsoft está trabajando en los asistentes personalizados automáticos, vamos que los alumnos van a tener un profesor que va a ir aprendiendo con ellos. Cuando eso empieza a llegar a las escuelas no vamos a tener más remedio que comprarlo y da la sensación de que nadie se está tomando en serio el asunto.

La educación se debería elegir desde el mundo educativo, no el empresarial y eso lo estamos dejando a parte. Y no nos tomamos en serio el asunto, el problema que tenemos es que a nadie le interesa la educación. En las

encuestas del CIS no aparece como prioritario para la ciudadanía la educación y a los políticos tampoco les interesa.

P. ¿Perjudicará al desarrollo social de los más pequeños esta forma de socializar con menos contacto físico o la relación con menos niños?

R. Eso puede depender de lo que dure esto. Si se prolonga es posible que sí, en ese caso, deberíamos pensar cómo enfrentar este problema que se puede presentar; y ahí tiene que entrar la cooperación entre las familias y la escuela.

Hace 10 años lancé la Universidad de Padres para llamar la atención de lo importante que es que la comunicación entre escuela y familia sea más intensa, sobre todo en determinadas edades. Las edades de los estudiantes de Infantil, Primaria y el primer curso de Secundaria son fundamentales para resolver los problemas de sociabilidad y los emocionales. En estas edades se están configurando los hábitos del miedo, la timidez, la agresividad, la tenacidad y la relación con los demás, que se van configurando para bien o para mal dentro de los primeros años de la escuela. Haber resuelto algunos problemas antes de pasar a Secundaria como la timidez, la agresividad o los miedos es muy importante.

En la pandemia, por esta situación de aislamiento, estos problemas se están agravando y debemos tenerlo previsto e intentar hacer planes en el campo educativo al respecto.

P. La generación 'millennial' lo ha tenido todo, han viajado cuando han querido, han salido de fiesta como han querido... Pero los niños de la generación actual viven bajo un 'régimen' en el que hay que respetar muchas normas, ¿será una generación más disciplinada?

R. No lo creo, porque son hábitos muy concretos que solo vivirán en una parte concreta de la vida. El auténtico problema de las generaciones jóvenes no viene por ahí, viene por la relación con las redes sociales, ese es el problema serio que tenemos por varias razones.

Primero, el interés por las redes sociales está dando demasiado interés al yo público de los chicos. Ahora lo importante es estar en las redes, tener muchos 'likes' y hay mucha influencia de la estructura de la personalidad, que a mi juicio no es buena. Las redes sociales están tomando demasiada preponderancia dentro del comportamiento individual.

En segundo lugar, las formas de contacto, con mensajes muy cortos, están endureciendo y simplificando la comunicación. En mensajes muy cortos puedes decir muy poco, insultos, consignas o chistes, pero no puedes decir argumentos. Asimismo tener como contacto una pantalla, que te puedes salir como quieras, sin tener un punto de cortesía, hace que las relaciones estén muy brutalizadas.

En 'El proyecto centauro' una de las cosas importantes que hacemos es llamar la atención sobre las redes sociales. Estamos creando una especie de servidumbre de la red que limita muchísimo la capacidad de toma de decisiones y de libertad de nuestros chicos, ahí es donde está el problema. Tenemos que fortalecer la personalidad de nuestros alumnos para que no quede difuminada su influencia por las redes.

P. Los españoles estamos acostumbrados a las falsas promesas de los políticos, una de las últimas que hemos escuchado es que la vacuna del covid-19 llegaría en Navidad. ¿Pueden afectar especialmente las mentiras a la sociedad en esta época?

R. Un problema muy serio, que no es solo de España, es la absoluta falta de confianza de la ciudadanía en los políticos y eso es gravísimo. Yo creo que los políticos se deberían tomar en serio que tiene que recuperar la credibilidad, porque sino hay un desfase entre los políticos que van por un lado y los ciudadanos que van por otro.

La sociedad actualmente está completamente desconectada, en parte, afortunadamente. Por ejemplo, la agresividad que hay en el Parlamento es completamente política, los ciudadanos somos más tranquilos, pero si esa gresca continua en el Congreso acabará contagiándonos.

Hay que hacer una llamada de responsabilidad a los políticos para que no se comporten así. El Parlamento se hizo para que se puedan pelear los argumentos y no tengan que pelear las personas. Ahora da la impresión de que es continuamente una pelea personal con insultos, descalificaciones y falta de clase.

El hecho de que entre las tres primeras preocupaciones de los españoles estén los políticos es una cosa detestable, que demuestra que deberían hacérselo mirar. Los políticos están para solucionar problemas, no para convertirse en un problema. La clase política está defraudando a la ciudadanía y la ciudadanía no se fía de ella.

La concertada se echa a la calle y utiliza alumnado menor de edad para protestar contra la 'ley Celáa'

El Gobierno se indigna porque la plataforma Más plurales, que reúne patronal de la escuela concertada, asociaciones de familias católicas y sindicatos del sector, insta a sus centros a mostrar su rechazo a la LOMLOE en la calle implicando a su alumnado.

Daniel Sánchez Caballero. 18 de noviembre de 2020

La escuela concertada va con todo contra la ley Celaá (LOMLOE). La plataforma Más plurales, más libres, más iguales, formada por varias asociaciones de la patronal de escuelas concertadas, organizaciones de familias católicas, y sindicatos, ha sacado este miércoles a su comunidad educativa a la calle, alumnado incluido, para mostrar su rechazo a la nueva ley de Educación, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso camino del Senado. La plataforma no se está guardando nada en su lucha contra la nueva ley educativa: instó a los centros a mostrar su rechazo e incluir al alumnado, da igual la edad, en las protestas. Muchos colegios acogieron la idea con entusiasmo y en los últimos días las imágenes de menores, tan pequeños como de unos cinco años, portando los lazos naranjas identificativos de la campaña o participando en acciones están por todas las redes.

La patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia y que posee en torno al 60% de la escuela concertada, envió una misiva a sus centros hace diez días –al menos alguna de sus delegaciones territoriales lo hizo– en la que les explicaba que la plataforma había decidido convocar un paro con dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios, y les instaba a que "haya una representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)". Al final de la protesta se ha leído, en aquellos centros que la han seguido, el manifiesto elaborado por Más plurales con los motivos de su rechazo a la LOMLOE.

Los elementos que han motivado la campaña de la escuela privada sostenida con fondos públicos contra la LOMLOE son conocidos y se pueden resumir en estos argumentos, incluidos en el comunicado que se ha leído en la puerta de los colegios: "Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado (...). La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostiene, pese a que en ningún sitio de tal Declaración pone que la sociedad tenga que pagar a los padres su elección educativa. "Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–", continúa, aunque en realidad se limita a poner la escuela pública como garante de la oferta de plazas públicas; "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", obviando que la mayoría de los países Europeos tienen poca escuela concertada o nada y que solo tres tienen más que España; "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio", la ley deja a la materia sin contar para la media, pero sigue siendo de oferta obligatoria por los centros; "y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial", que es su interpretación de que la ley dé un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de recursos manteniendo los de educación especial.

El Gobierno está indignado con la campaña. Fuentes del ministerio y del PSOE explican que pueden llegar a entender la campaña, aunque no la compartan por estar basada, aseguran, en falsedades, pero añaden que el uso de menores –hay fotos en las redes de pequeños con apariencia de estar en Educación Infantil– supera todas las líneas. "Luego dicen que en Catalunya se adoctrina", se sorprenden. También añaden las fuentes que la escuela concertada, sobre todo en ciertas zonas como Madrid, recibe a familias de todo tipo de ideologías que no necesariamente tienen por qué estar en contra de la nueva ley.

La concertada no tiene planeado parar. Varios centros están enviando misivas a las familias solicitando su adhesión a la campaña de Más plurales. El Regina Mundi de Granada, por ejemplo, poco menos deja caer que la escuela concertada va a desaparecer: "La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos", explica. Otra de un centro de Salesianos anuncia "una acción colegial de protesta" por la que va a suprimir la última hora lectiva del próximo viernes 20 para realizar una cadena humana alrededor del colegio.

Este periódico ha preguntado a Escuelas Católicas sobre esta campaña y el uso de alumnado menor de edad en la misma, pero no ha obtenido respuesta.

EL PAIS

Ganar el futuro educativo para todos

España tiene una tasa muy alta de repetición con consecuencias en el abandono escolar. La nueva ley se marca un objetivo de esfuerzo común para que todos puedan progresar hasta el máximo de sus capacidades

ENRIQUE ROCA. 19 NOV 2020

En 1990, se estableció en España, como en el resto de los países occidentales, la educación obligatoria para todos hasta los 16 años. En la mayoría de los países occidentales se añadió en esa década el objetivo de que ningún alumno o alumna se quedara atrás. Por otra parte, a finales del siglo XX y a principios del actual,

Unesco y OCDE propusieron los saberes fundamentales y las competencias básicas que deberían proporcionarse a todos los ciudadanos, a fin de habilitarlos para el éxito personal. La UE trasladó estas propuestas de futuro a los “objetivos educativos” para 2010 y para 2020, e incorporaron también la reducción del abandono temprano de la educación y la formación por debajo del 10% o, dicho en positivo, que más del 90% de los ciudadanos alcanzaran ese nivel de educación secundaria superior. El resultado fue que en la mayoría de países occidentales esos objetivos se han transformado, en la práctica, no solo en educación universal hasta los 16, sino hasta los 18 años.

En España se dedicaron enormes esfuerzos inversores —se pasó de menos del 2% de gasto en educación con respecto al PIB en los años setenta al 5% en 2001—. Ese impulso inversor desapareció con la crisis de la segunda década de este siglo, de modo que en unos pocos años se perdió casi un punto porcentual del gasto en educación. Por otra parte, se formó mejor al profesorado (todos universitarios) y en 2006, con la LOE, se introdujeron los cambios legales en esa dirección: educación para todos, competencias básicas y su evaluación colegiada, objetivos educativos europeos... Nos sumamos, por tanto, a esos objetivos, aunque no nos quitamos lastres históricos: enseñar y evaluar los contenidos (enciclopédicos) de las materias, en lugar de poner el énfasis en las competencias básicas y los aprendizajes imprescindibles, y se mantuvo la “selección” del alumnado a los 16 años.

La Lomce propuso en 2013 un camino inverso al sugerido por las instituciones internacionales en estas cuestiones: estableció la evaluación por materias y estándares educativos, en lugar de evaluaciones colegiadas de competencias. Se recuperaron las evaluaciones finales de etapa anteriores a 1970 (reválidas), es decir, más selección de alumnado. Se abandonaron las evaluaciones de diagnóstico, cuya finalidad es conocer y mejorar el conjunto de la educación y apoyar al profesorado en la definición, trabajo y evaluación de las competencias básicas y los aprendizajes. Se exigió, en una palabra, el “esfuerzo” al alumnado, requisito para promocionar de curso y etapa, que sería valorado con las evaluaciones señaladas. Este esfuerzo fue y es defendido a ultranza, en especial por los detractores de la educación para todo el alumnado hasta los 16, incluso hasta los 18 años.

El estudio comparado del Consejo Escolar del Estado (CEE) El éxito educativo en educación primaria y secundaria ha puesto de manifiesto las muy elevadas cifras de la repetición en España, los efectos selectivos del título de la ESO y las consecuencias de ambas circunstancias sobre el abandono temprano de la educación y la formación.

La repetición de curso en 7 de los 10 países analizados no llega al 4% al final de primaria, mientras que, en España, no baja del 12%-14% desde el año 2000. Al final de la ESO, la repetición sigue próxima al 30%. La comparación internacional de dicho estudio pone de relieve que, para acabar con la repetición de curso del alumnado, sería altamente recomendable adaptar los currículos actuales, así como las metodologías y los procesos educativos, y poner el énfasis en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias básicas.

Es preciso impulsar y generalizar el trabajo en equipo de los docentes, de modo que puedan adoptar colegiadamente las concreciones de los currículos y las decisiones de promoción de curso, que deberían basarse en la adquisición de las competencias y el dominio de los aprendizajes esenciales. Y es inaplazable ofrecer al profesorado los recursos y el tiempo semanal necesario para reflexionar y proponer medidas para conseguir el éxito educativo de todo su alumnado, medidas encaminadas a convertir la repetición en un recurso realmente excepcional, como señalan las leyes educativas españolas y ocurre en los países estudiados.

Por otra parte, algo más del 25% del alumnado español no logra todavía hoy el título de la ESO, y ese alumnado procede, en su inmensa mayoría, de las clases menos favorecidas. Esto significa que, como país, estamos negando a estos jóvenes el derecho a una educación universal y al futuro formativo después de los 16 años. Es un problema educativo y de segregación por razones socioeconómicas y culturales de impacto duradero. Este fenómeno es el denominado “fracaso escolar”, que se atribuye casi en exclusiva al alumnado; pero conviene insistir en la responsabilidad de una parte importante de la sociedad, que asume con indolencia, y sin rigor, que hay jóvenes “que no quieren” estudiar, o “no valen” para el estudio, y que es aceptable que se enfrenten a la vida adulta sin ninguna cualificación, ni académica ni laboral.

En los otros países analizados por el CEE no existen a los 16 años barreras o selecciones. En ellos se otorgan diplomas o se realizan certificaciones que recibe todo el alumnado, que incluyen sus respectivas calificaciones (todas), junto con un informe de orientación y recomendación sobre sus posibilidades educativas y formativas en el que participan los equipos docentes y las familias. Este tratamiento del final de la educación secundaria básica permite el paso a la inmensa mayoría del alumnado a distintas vías formativas: las académicas, las de formación profesional y las de aprendizaje profesional, vías de aprendizaje estas últimas, recientes en algunos países y consolidadas en otros, que facilitan la obtención de una cualificación profesional de primer grado. Estas diversas soluciones “educativas” han permitido constatar que, en prácticamente todos los países europeos estudiados por el Consejo, el abandono temprano de la educación y la formación esté ya en el objetivo europeo o por debajo del 10% (más del 17% en España), y que, en el resto de los países más del 90% del alumnado termine alcanzando una certificación y cualificación de nivel 3.

Entre los objetivos que propone la nueva ley me permito destacar los que requieren poner todos los esfuerzos y recursos sociales, económicos y educativos (esfuerzos colectivos, sí) para que todo el alumnado pueda progresar hasta el máximo de sus capacidades, no solo hasta los 16 años, sino con futuro y oportunidades formativas hasta los 18. La nueva Ley pretende, a mi modo de ver, impulsar, particularmente en las etapas obligatorias, los aprendizajes y competencias básicas (nuevo currículo) y su valoración, con el objetivo de mejorarlos (evaluaciones de diagnóstico), en beneficio de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Propone también el trabajo en equipo del profesorado y la toma de decisiones colegiada sobre qué y cómo enseñar y sobre cómo evaluar y orientar al alumnado en el paso de curso y de etapa.

Una educación para todos, sin ninguna exclusión durante los cursos y etapas, es la llave que permitirá mejorar la formación individual de todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, la riqueza del país. Esa riqueza individual y social que proporciona la educación no puede ser enajenada, sustraída o aprovechada con otros fines distintos de la prosperidad de los individuos que la disfrutan y de las sociedades que la ofrecen.

Enrique Roca es presidente del Consejo Escolar del Estado.

europapress.es

El Gobierno saca adelante la 'Ley Celaá' en el Congreso con los apoyos de Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País

El debate se ha centrado en la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y en la educación concertada

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

El texto ha salido adelante con 177 'síes', mayoría absoluta de la Cámara, una mayoría que necesitaba alcanzar para salir adelante, ya que se trata de una modificación de una ley orgánica, frente a los 148 'noes' de PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.

El dictamen que se ha aprobado recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Ante esto, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).

El texto también incluye otros cambios como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

RECHAZADAS TODAS LAS ENMIENDAS EXCEPTO UNA

En cuanto a las enmiendas 'vivas' que quedaron sin aprobar en Comisión -- más de 600--, sólo se ha aprobado una durante el Pleno. Se trata de una enmienda transaccional de Más País-Equo y Compromís, que ha contado con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat, para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.

El texto, al que tuvo acceso este miércoles Europa Press, establece que "en algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos". Y recoge que, en dicha materia, "se incluirán contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia".

EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR, LO MÁS CRITICADO

El debate se ha centrado en la enmienda ya incluida en el texto que suprime el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, iniciativa que ha motivado las duras críticas por parte de la oposición hacia el Gobierno, al que han acusado de eliminar derechos y de 'dar alas' al independentismo. También ha sido un tema central la educación concertada, con la derecha defendiendo la pluralidad de la red educativa y la izquierda negando que la LOMLOE suponga un "ataque" a este tipo de enseñanza.

La diputada del PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha celebrado este "día histórico" en que se deroga la 'Ley Wert', ha acusado a la derecha de decir "mentiras" sobre la LOMLOE, como que la Ley acaba con el castellano, que se cerrarán las escuelas de educación especial o que se eliminan las pruebas para acceder al cuerpo de inspectores de educación. "Ya está bien de utilizar la palabra 'libertad', defienden el concepto solo para aquellos que tienen recursos, eso es manipulación", les ha afeado.

Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna también ha recalcado que con la aprobación de la LOMLOE se pone "punto final" a la LOMCE y su "modelo elitista" e igualmente ha acusado a la derecha de poner en marcha una "campaña de desinformación y bulos". También Joan Mena se ha felicitado por este proyecto, aunque ha admitido que desde la formación 'morada' van a "seguir avanzando" porque "hay cosas que se han quedado atrás".

A todo ello, el PP ha afirmado que la LOMLOE es un proyecto "profundamente ideologizado" que trata de "asfixiar" al que no se somete al "pensamiento único", que "suprime la cultura del esfuerzo" y que "destierra" el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La diputada 'popular' Sandra Moneo, ha echado en cara que la nueva Ley elimine el castellano como lengua vehicular. "Es una ruptura de nuestro modelo competencial, de nuestra Constitución", ha dicho.

También el diputado de Vox, Joaquín Robles, ha criticado duramente la LOMLOE, sobre todo la supresión del castellano como lengua vehicular, afirmando que el objetivo de la norma es que las escuelas catalanas se conviertan en "fábricas de independentistas". "Con la Ley, se adquiere el certificado de legalidad", ha advertido, para tachar la norma de "sectaria" y "peligrosa".

Del mismo modo se ha mostrado en contra Cs. Su diputada, Marta Martín, que ha definido la LOMLOE como una ley "más ideologizada que la propaganda electoral", ha cargado contra la enmienda del castellano, asegurando que la supresión del carácter vehicular obedece a un "mercadeo zafio" por "un puñado de votos" que hará que los secesionistas se vean "reforzados" y los constitucionalistas se sientan "vendidos".

A favor de la Ley se ha posicionado ERC, por tratarse de un "deber moral" derogar la 'Ley Wert'. La diputada, Montse Bassa, ha dicho que como pedagoga se siente "orgullosa" de esta nueva Ley, pero como independentista "no tanto". Así, aunque a su juicio no permite desarrollar con plenitud la innovación pedagógica que quiere su formación, admite que "nunca" habían tenido un nivel de competencias "tan alto". Y ha finalizado su discurso asegurando, en catalán, que en Cataluña, "el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza".

Mientras, Josune Gorospe (PNV) ha celebrado la aprobación de la LOMLOE, que al menos permite desarrollar, según comenta, el sistema educativo vasco, pues, en su opinión, recoge reivindicaciones del PNV en materia de becas, currículo, lengua propia, FP y evaluación, mientras que Inés Sabanés (Más País), ha dicho que el "problema" de España no es la lengua, "conflicto" que, dice, fue introducido en la 'Ley Wert'.

EN CONTRA DE LA LEY: CC, CUP, PRC Y UPN

Han mostrado su rechazo a la ley CC, la CUP, el PRC y UPN. Desde la formación canaria, Ana Oramas ha criticado que la LOMLOE sea un proyecto "sin cabeza", mientras que para la CUP no es suficiente esta norma porque, a juicio de su diputado, Albert Botran, "no blindo la inmersión lingüística" en Cataluña.

Por su parte, José María Mazón (PRC) ha hecho énfasis en que el tema del castellano era un "conflicto innecesario" que supondrá sin embargo ahora "un paso más hacia la independencia de Cataluña", y Sergio Sayas (UPN) considera que esto signicará "un pago al radicalismo".

Bildu se ha abstenido, al igual que JxCat, BNG y Teruel Existe. La diputada vasca Isabel Pozueta, ha reconocido que la nueva ley no es el instrumento que necesita el País Vasco porque se queda "corta" en sus demandas, si bien también ha admitido que comparten el objetivo que tiene la ley de derogar la LOMCE. "No es la ley que nosotros hubiéramos dibujado", ha indicado asimismo el diputado de JxCat, Sergi Miquel i Valentí, que no obstante, celebra que la LOMLOE derogue la LOMCE y deenda la ley de educación catalana.

Por su parte, no considera "suficiente" el diputado Néstor Rego (BNG) "volver a la situación pre-LOMCE", aunque ha celebrado que ésta se derogue, y Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha lamentado que cada 7 años se apruebe en España una nueva ley educativa.

THE NVERSATION

Hacer o no hacer: la importancia de la ética en la enseñanza

Txetxu Ausín. Científico Titular, Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)

"Ser o no ser" es una pregunta clave en la filosofía. Pero no menos relevante es la pregunta de "hacer o no hacer", otro de los tópicos centrales de la filosofía: remite a la capacidad del ser humano de actuar de maneras distintas y, por tanto, de responsabilizarse o hacerse cargo de ello. Es la pregunta de la ética.

Preguntarse y pensar sobre aquello que hacemos y que tiene un impacto en nuestro entorno, personal, familiar, social y natural es interrogarse por nuestra vida moral. Atribuimos una responsabilidad moral a las personas en

función de su capacidad para actuar de una manera u otra y por ello la libertad es una condición necesaria para la vida moral.

Las raíces de la moral se encuentran en la libertad del ser humano en tanto en cuanto se ve en la necesidad de “elegir” entre una gama de posibilidades y, sobre todo, dicho individuo debe hacer la buena elección y hacerse responsable de ella.

Seres sociales, seres morales

‘Bien’ y ‘deber’ son los dos términos morales fundamentales y el ser humano, en tanto que ser social, es necesariamente también un ser moral. Y la moral es un hecho social constatable por dos vías:

1. Tiene un lenguaje específico: imperativos, expresiones normativas (deber, permiso, obligación, prohibición), expresiones valorativas (justo, recto, injusto, bien, mal...) relativas a aprobación o desaprobación.
2. Su institucionalización parcial en el Derecho. Así, la moral es un hecho social (toda sociedad posee un código de normas) que es vivido colectiva e individualmente (dimensión social y personal de la moral).

Moral vivida, moral pensada

Cuando justificamos racionalmente la moral, estamos haciendo ética. Por tanto, la ética es una reflexión acerca de la moral, acerca de los fundamentos de la propia conducta.

La ética (que es prescriptiva) tiene por objeto el establecimiento y justificación de criterios muy generales que pueden ser recomendados como preferibles y que permiten una fundamentación de las normas morales concretas (“algo es un deber”) y, más en general, de los juicios morales (“algo es bueno”). Aranguren llama a la moral “moral vivida”, y a la ética, “moral pensada”.

La ética es, por tanto, la rama de la filosofía que reflexiona precisamente sobre el bien y el deber, y está indefectiblemente ligada a la acción y a la dimensión práctica y vivencial de la conducta humana. ¿Pero sólo a las acciones? ¿Y las omisiones?

No hacer: la omisión

Una omisión consiste en no hacer algo que uno podría hacer (y en ocasiones debería) haber hecho y no hace. Así como la acción consiste en un obrar positivo, un hacer, la omisión en cambio, consiste en un no hacer, en un no actuar, en un abstenerse.

Pero no todo lo que no hace una persona es una omisión. Hablamos de omisión cuando pudiendo hacer una actividad y teniendo alguna razón para hacerla, no se lleva a cabo. Las omisiones implican eludir una conducta “esperada” en algún sentido (como cuando unos padres no alimentan ni cuidan a sus hijos, o cuando no se socorre a quien está en peligro) y estas omisiones pueden ser no solo intencionales sino también por negligencia y abandono.

El ejemplo de la eutanasia

Sin embargo, no es fácil distinguir las acciones de las omisiones. Por un lado, la propia caracterización de las conductas como activas u omisivas viene determinada por las valoraciones que se hacen de esas conductas: las personas tendemos a clasificar como omisivos los comportamientos que nos parecen moralmente más aceptables y como activos los que nos resultan más inaceptables.

Por ejemplo, en cuestiones tan debatidas como la eutanasia, se sostiene que no se puede actuar para matar aunque está permitido omitir para dejar morir (limitación del esfuerzo de soporte vital).

Pero la cuestión se complica si se puede matar por medio de omisiones (no suministrando un medicamento vital) y dejar morir por medio actos (quitando un respirador a petición de un paciente) o si se entiende que hay omisiones que merecen más reproche moral que acciones con idénticos resultados (dejar morir de hambre y sed a un enfermo desahuciado o suministrarle una sedación terminal).

En definitiva, nuestra valoración previa condiciona de antemano lo que distinguimos como acciones y como omisiones.

¿Es peor hacer algo malo o no hacer algo bueno?

Por otro lado, se ha demostrado en psicología el llamado “sesgo de la omisión”, esto es, la tendencia que tenemos la mayoría de los individuos a juzgar como moralmente más graves los comportamientos dañinos fruto de una acción que los que son resultado de una omisión.

Además, parece que entre acciones y omisiones cabe considerar un abanico más amplio de posibilidades: no impedir, facilitar hacer, contribuir. Por ejemplo: empujar a alguien desde un acantilado al mar constituye hacer un daño; si veo que alguien se va lanzar al agua con riesgo de su vida y no hago nada, no impido el daño; si no le lanzo una cuerda que tengo a mano, permito el daño con mi omisión; si no dejo que otra persona le lance una cuerda para evitar que se ahogue, estoy facilitando un daño.

Quien facilita o no impide un daño no inicia el proceso causal por el cual se comete el daño, pero sin su conducta, el daño en cuestión no se llevaría a cabo del todo.

El efecto espectador

Y en este punto hay que hablar sobre la dilución de la responsabilidad y el “efecto espectador”, según el cual la probabilidad de intervenir en situaciones de emergencia es inversamente proporcional al número de espectadores que las presencian.

¿Cuál es nuestra responsabilidad como observadores y conocedores del mal, pero que no actúan? ¿Son la dejación, la pasividad, la indiferencia, la apatía o la inacción aceptables éticamente? Podemos planteárnoslo desde la perspectiva de algunos de los más acuciantes y urgentes desafíos globales de nuestro tiempo, como la pobreza y la exclusión, las migraciones o el cambio climático, sin duda relacionados entre sí.

En definitiva, la cuestión ética no pivota solo sobre el hacer, sino también y mucho sobre el no hacer y todas las variantes entre uno y otro. No hacer nada es, evidentemente, una forma de hacer algo. Como sujetos de un mundo de espectadores, profusamente interconectado, no podemos eludir nuestra responsabilidad, ni por acción, ni por omisión.

Un mundo de espectadores sin ética en los colegios

Este tercer jueves del mes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Filosofía. Este 19 de noviembre de 2020 también se vota definitivamente en el Parlamento español la inclusión o no de la asignatura de Ética en 4º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Sus señorías tienen la posibilidad de hacer o no hacer, de posibilitar o no una docencia rigurosa de los conceptos, teorías y argumentos de la ética para que nuestros jóvenes, las futuras generaciones, se hagan las preguntas sobre hacer o no hacer y no se conviertan en meros espectadores de un futuro desafiante y por construir.

Hacer o no hacer para ser sujetos activos de la vida social. Esta es la cuestión.

Cómo fomentar el espíritu crítico en los jóvenes sin convertirlos en opinadores de todo

Francisco Esteban Bara. Filosofía de la Educación Superior, Universitat de Barcelona

Cuenta la historia que Sócrates era conocido entre sus conciudadanos como “el tábano de Atenas”. Se dice, además, que estaba encantado con ese sobrenombre porque le describía muy bien: su misión era la de aguijonear al personal a través de preguntas y explicaciones de esas que incordian y que, sobre todo, despiertan.

Eso sí, al gran filósofo griego le salió muy caro el poner a pensar a determinada gente que, en verdad, prefería seguir durmiendo. A este “tábano” que no para quieto hay que darle cicuta, acordaron.

Sin embargo, su espíritu crítico ha dado como resultado una de las mayores revoluciones de la historia. Esa invitación a pensar con criterio –preguntarnos el por qué las cosas son así y no de otra manera, tratar de descubrir verdades y dismantelar falsedades, y no dejar de decir, como él mismo hacía, “solo sé que no sé nada”–, no tiene parangón.

Básicamente, porque el espíritu crítico nos libera de la ignorancia, es decir, de cualquiera o cualquier cosa que pretenda pensar por nosotros; y ya sabemos que estamos rodeados de personas y dispositivos tecnológicos dispuestos a tal cosa.

Únase y apueste por información basada en la evidencia.

Ciertamente, no hay como conversar con personas en las que anide ese espíritu, ellos nos enseñan todo lo dicho y nos demuestran que hay gente con la que es muy placentero hablar.

Nuestro actual y mayoritario modo de pensar en la educación, esa voz que indeterminada y envolvente que nos marca el camino, apuesta por el espíritu crítico.

Espíritu “de bisutería”

Las nuevas generaciones, se viene a decir, deben mejorar el mundo, necesitamos a muchos Sócrates en oficinas, hospitales, escuelas, partidos políticos, calles y plazas. Sin embargo, la realidad demuestra que con ese discurso no solo se forma el espíritu crítico, sino que también, y cada vez más, versiones poco logradas del mismo.

No son pocos los jóvenes que, tras recorrer las diferentes etapas educativas, universidad incluida, se presentan en sociedad con un espíritu crítico “de bisutería”, muy alejado del de Sócrates.

O repensamos la educación y sus políticas y la comunidad empieza a valorar más a espíritus críticos que a futbolistas y famosos o el profesorado y las familias que tratan de cultivarlos día a día verán que su gozo queda en un pozo. Veamos tres de esas imitaciones, y acaso algunos remedios.

Algunas imitaciones

1. *El espíritu crítico es el conjunto de opiniones que uno defiende.* El famoso lema que dice que el alumno es el protagonista de la educación podría ser la principal causa de esta curiosa imitación. Eso es lo que queremos que sea, por supuesto, pero deberíamos reconocer que no puede serlo de buenas a primeras, por lo menos no con relación al espíritu crítico.

Y no porque no se quiera, sino porque el alumno no está en condiciones de asumir tal papel. Quienes pensamos que el acontecimiento educativo consiste, precisamente, en conducir al alumno hacia la conquista de su protagonismo, eso es, de su autonomía intelectual y moral, nos quedamos sorprendidos cuando se escucha que tal cosa “ya viene de fábrica” y que lo que hay que hacer es potenciarla al máximo.

Así las cosas, se educa al “opinólogo”, un individuo convencido de que su opinión es tan válida como la de cualquiera, también como la del que más sabe; y animado para presentarse en cualquier conversación sentando cátedra.

No hay espíritu crítico cuando nos llevamos por delante aquel principio que dice que para opinar antes hay que conocer, cuando dejamos de valorar que la autonomía intelectual y moral consiste en recorrer un largo y duro trecho de verdades.

2. *El espíritu crítico es el dominio y el conocimiento de lo que se cuece hoy y ahora.* Y eso es lo que estamos haciendo desde hace años: educar en respuestas útiles, rentables y eficaces. Sin embargo, si hay algo que mantiene vivo al espíritu crítico son las grandes preguntas que a todos nos afectan y nunca pasan de moda, y deberíamos pensar por qué hay muchos jóvenes que finalizan la travesía educativa sin apenas tener nada serio que preguntarse sobre ellos mismos y el mundo en el que habitan.

Esas grandes cuestiones suelen encontrarse en los clásicos del pensamiento, sí, en esas obras que, como decía Italo Calvino, tienden a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no pueden prescindir de él.

Por eso un clásico, sea de hace siglos o de hace diez años, un libro o una película, es un clásico porque nunca acaba de decir lo que está diciendo, porque siempre nos interpela. Por mucho que cueste creer, un espíritu crítico sin clásicos anda a tientas, si es que realmente anda, y nos extraña que los universitarios, estudien la carrera que estudien, no tengan un primer curso de artes liberales, grandes ideas, humanidades, cultura general o como se le quiera llamar.

3. *El espíritu crítico se demuestra de muchas formas, va con el carácter de cada uno.* Quizá los medios de comunicación y las redes sociales sean el mejor escaparate para ver lo que aquí se está diciendo. Sin embargo, algo nos dice que la cosa va en dirección contraria, que ese espíritu se conquista, que es uno el que debe adaptarse a él.

Lo demuestran aquellas personas que han aprendido a filosofar con delicadeza, humildad, prudencia y buenas palabras, que huyen de la calentura, la ordinariez, el rencor y la venganza fría. El espíritu crítico también tiene su estética, algo que, todo sea dicho, no suele encontrarse en la lista de competencias de nuestros planes de estudios escolares y universitarios.

Esa estética se aprende muy bien con el ejemplo. Iría bien seleccionar unos cuantos de ellos y analizarlos semanalmente junto a nuestros alumnos.

En fin, no dispondremos de jóvenes con el espíritu crítico solo con pretenderlo, mucho menos con potenciar imitaciones que no hacen más que desdibujar y malbaratar la invitación de Sócrates y de tantos otros que han seguido su camino.

MAGISTERIO

La ley Celaá llega el jueves al Congreso con enmiendas "vivas" para hacer cambios

La mayoría de los grupos parlamentarios mantiene "vivas" de cara al pleno del Congreso de este jueves las enmiendas a los artículos de la Lomloe examinadas en la Comisión de Educación con el fin de que se pueda cambiar parte del contenido de la norma, han dicho a Efe fuentes de diversos partidos.

REDACCIÓNMartes, 17 de noviembre de 2020

La eliminación de establecer que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que Ética no sea obligatoria en 4º de la ESO son algunos temas que volverán a tratarse en la Cámara baja tras haber concluido el dictamen de la Comisión de Educación.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha adelantado este martes, no obstante, que no van a retirar la enmienda ya aprobada en el dictamen, junto con Unidas Podemos y ERC, para que el castellano no figure como lengua vehicular pero que los alumnos deben dominarlo junto con las lenguas cooficiales correspondientes. Sobre este asunto siguen siendo muy críticos partidos como PP, Ciudadanos, Vox y UPN.

El líder del PP, Pablo Casado ha dicho este martes que la ley Celaá es una “contrarreforma educativa” y ha defendido el español como lengua vehicular, pues le parece “ridículo” que se limite.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha calificado de “atentado contra los derechos lingüísticos de todos los españoles” la eliminación del castellano como lengua vehicular, por lo que volverán a exigir la retirada de esa enmienda. Y ha explicado a Efe que su grupo tratará de “arreglar el destrozo” que la

Lomloe “hace con la libertad de elección” respecto a la enseñanza concertada y la Educación Especial a la vez que mantiene vigentes las enmiendas sobre el currículo, las evaluaciones independientes, la bajada de nivel o la Inspección.

Sergio Sayas, portavoz de Educación de UPN, mantiene para el Pleno sus enmiendas al articulado de la Lomloe, que defienden también la libertad de los padres para elegir un centro concertado para sus hijos o que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza.

Unidas Podemos, por su parte, volverá a pedir que la Ética sea obligatoria en 4º de la ESO para que el alumnado sea “capaz de comprender y argumentar no solo sobre lo que se debe hacer, sino también sobre por qué se debe hacer lo que se debe hacer, que es el enfoque aportado por la Ética o filosofía práctica”. Asimismo, quieren que se aprueben sus enmiendas sobre la reducción de ratios en clase o que la religión no figure dentro del horario escolar.

ERC deja asimismo “vivas” todas sus enmiendas al articulado de la Lomloe, entre ellas figura el desarrollo de la empatía hacia los animales o que será requisito obligatorio para el acceso y la renovación de los conciertos que la titularidad de los centros sea ostentada por una entidad con propósito específico educativo y sin ánimo de lucro.

El PNV mantiene 21 de sus enmiendas. Por ejemplo, que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en comunidades que carezcan de lengua cooficial; en las comunidades con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos u normativa”. Además, sobre la Religión insta a un “enseñanza del hecho religioso”. Y rechaza la disposición sobre la Educación Especial de la Lomloe a considerar que es “una extralimitación” en un área en el que ya están ejerciendo sus competencias.

[DOCUMENTO: Dictamen de la Lomloe que se votará el jueves \(PDF\)](#)

Salud digital, la clave para abordar la digitalización

El Gobierno de La Rioja aplica con éxito un proyecto de innovación educativa con el que forma a centros escolares y al profesorado en salud digital, un concepto que se preocupa por la relación de los alumnos con las nuevas tecnologías y del que Guillermo Cánovas es pionero.

RUBÉN VILLALBA Martes, 17 de noviembre de 2020

En 2015 Guillermo Cánovas publica *Cariño: he conectado a los niños*, la primera guía de salud digital para padres, alumnos y profesores que se edita en España. Desde entonces, el concepto de salud digital ha ocupado la labor investigadora de este profesor y experto en temática adolescente, que ahora lleva a la práctica en colegios de La Rioja a través del proyecto de innovación educativa (PIE) *El uso saludable, seguro y responsable de la tecnología en la mejora de la convivencia*.

El proyecto, implantado por la Consejería de Educación de La Rioja, va ya por su segunda edición y se enmarca dentro del Programa de Cooperación Territorial de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Su objetivo es proporcionar a centros y profesores de la región estrategias y conocimientos que van desde el uso saludable de la tecnología hasta la adquisición de nociones sobre legislación aplicada a internet, pasando por la detección de situaciones de riesgo del alumnado, como el ciberacoso.

Son cuestiones que se enmarcan dentro del concepto de salud digital, que para Cánovas descansa sobre cinco pilares: el impacto técnico en los alumnos (desde el punto de vista físico y psíquico), la conectividad móvil, las redes sociales, la seguridad digital y la comunicación online. Algunas de las incógnitas que se plantean en esta línea son: ¿a qué edad es recomendable que los niños tengan su primer móvil? ¿Cómo se va configurando la identidad digital de un adolescente? ¿Cómo podemos anticiparnos ante un posible caso de tecnoadicción? ¿Qué hacer ante una situación de ciberacoso?

Responsabilidad

Cánovas, que actualmente también dirige el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología EducaLIKE, recuerda que los alumnos no solo demandan información sobre seguridad. Propone, por ello, agregar los conceptos de salud y responsabilidad: “La salud digital implica desde el trabajo sobre su reputación digital y el establecimiento de formas de relación saludables en internet, hasta los problemas derivados del exceso de información: cómo encontrar lo que necesito en Google y cómo verificarlo. Desde la utilización correcta de WhatsApp hasta cómo manejar la obsesión por los ‘me gusta’ en Instagram”.

Cánovas advierte que “la mayoría de centros no es consciente de la importancia de las redes y está lejos de tener la sensibilidad y los medios para afrontar ese reto”. En este sentido, señala que “es muy importante que entiendan que todo lo que suceda entre sus alumnos en el entorno digital va a tener una relación con el entorno físico del colegio”. También alerta de un problema muy generalizado en los centros y del que pocas veces son conscientes: la usurpación de identidad: “Suelen ser exalumnos que han creado un perfil del colegio; estas

situaciones se dan porque no hay personal que se encargue de que el centro tenga presencia en las redes sociales, por tanto, no controlan lo que en ellas se publica”.

Todas estas cuestiones se vuelcan en el proyecto desarrollado por Cánovas, para el que la Consejería de Educación selecciona cinco centros sostenidos con fondos públicos. Una vez seleccionados, el equipo directivo debe informar al Claustro de la solicitud de participación en el mismo y se solicita la inscripción de, mínimo, dos docentes que impartan enseñanzas en los cursos comprendidos entre 5º de Primaria y 2º de ESO. Uno de los profesores del equipo de trabajo asume las funciones de coordinador y debe enviar los cuestionarios iniciales de convivencia al alumnado implicado. Posteriormente, debe remitir los resultados al responsable, junto con el plan de convivencia del centro.

El proyecto se materializa en cuatro ámbitos de actuación. El primero se centra en analizar el clima escolar del centro, a través de un cuestionario anónimo que es cumplimentado por los alumnos y profesores de los niveles implicados en el PIE. Una vez obtenidos los resultados, el ponente del proyecto realiza un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), que concluye en un informe individualizado.

Asesoramiento

El segundo ámbito contempla un curso de formación semipresencial de 25 horas para el profesorado, en el que se abordan contenidos como el acceso a la información en internet, la privacidad y la reputación digital. Además, se tratan cuestiones como la *gestión de las emociones virtuales*, los procesos cognitivos detrás de las TIC o la empatía digital, y dedica todo un apartado a las tecnoadicciones y el ciberacoso.

Un tercer ámbito forma al equipo de trabajo del centro para analizar su propio plan de convivencia y proponer así las mejoras necesarias. Para ello, cada centro cuenta con asesoramiento externo e individualizado. En esta fase, también se hace entrega del material didáctico para trabajar posteriormente con los estudiantes de los niveles implicados.

El proyecto concluye con una última parte de desarrollo de actividades con los alumnos. Los docentes tienen que diseñar, al menos, dos unidades didácticas del material anteriormente proporcionado y cumplimentar finalmente una ficha de documentación con la valoración de las actividades de su aula.

Lomloe, nueva oportunidad perdida

José Mª de Moya. Director de Magisterio

Al Ministerio y al PSOE sensato no le gusta cómo ha quedado la Lomloe. Al menos es lo que me cuentan, pero fíate de las verdaderas intenciones y de lo que piensa realmente un político... ni ellos lo saben. En todo caso parece claro que la ley les ha quedado muy escorada tras su tramitación parlamentaria y no les gusta. Querían una vuelta a la LOE y les ha salido una ley netamente de izquierdas, de corte estatalista y que respira por todos sus poros desconfianza hacia las familias y hacia la iniciativa social. Querían una norma equilibrada y les ha salido un bofetón a las políticas educativas liberales o de centro derecha. Eso es lo que querían o, al menos, lo que nos dijeron que querían, a saber.

Hay un síntoma incontestable de esto que digo. Todas las críticas están llegando por la derecha; la izquierda, aún la más radical, está encantada y se contiene la risa. El silencio de sindicatos de ultraizquierda como STES o la propia Ceapa, habitualmente abonados al mamporrazo, ahora resulta atronador. Todas las leyes educativas hasta ahora habían respondido al mismo patrón: críticas furibundas de los adversarios y críticas contenidas por parte de lo tuyos, que querían más. A la Lomloe poco más se le puede pedir por la izquierda; bueno sí, podrían haber suprimido el régimen de conciertos, sacado la Religión de las aulas... Finalmente ese sería el deseo de los que han ganado la batalla política, pero son conscientes de que aún es pronto y hay que ir paso a paso.

De ahí la importancia de ganar la batalla de las ideas; las batallitas políticas son efímeras por definición. A la Lomce seguirá la Lomloe y a esta la siguiente. ¿Tiene la Lomloe alguna posibilidad remota de unirnos en torno a unos acuerdos básicos sobre Educación y perdurar? Ninguna, porque no se ha sustentando en un debate de ideas, ni siquiera en un serio debate parlamentario, sino en banales intercambios de cromos. Se ventilaron cientos de enmiendas en pocas horas, hasta el punto de que el presidente de la Comisión confesó que estaba perdido y que ya no sabía ni lo que se estaba votando (sic).



Luces y sombras de la reforma educativa

Dos meses de trámite parlamentario a puerta cerrada se han traducido en la aprobación de 320 enmiendas al texto original del Ministerio de Educación y FP para la nueva ley educativa. Un documento que no parece haber concitado, en la calle, todos los apoyos.

Pablo Gutiérrez de Álamo. 18/11/2020

La Lomloe, la nueva ley educativa, llega esta semana al Pleno del Congreso en el que, si no hay sorpresas de último minuto, conseguirá los apoyos parlamentarios necesarios para que siga su curso hacia la aprobación.

Más de tres centenares de enmiendas han pasado el corte de las 1.100 que se habían presentado en total. Más o menos una cuarta parte. Las últimas fueron rechazadas o aprobadas en la sesión de la Comisión de Educación del pasado viernes que, durante alrededor de 10 horas, supuso un ejercicio de paciencia y aguante para propios y extraños.

De todas las medidas, más o menos importantes o de más o menos peso, cabrían destacar las conducentes a evitar que continúe acrecentándose la segregación escolar en todo el país (aunque con diferencias autonómicas) y la creación de guetos educativos y, al mismo tiempo, aun no suponiendo la apuesta por el fin de la escuela concertada que ciertos sectores esperan, las diseñadas para poner cierto coto a la privada financiada con fondos públicos.

Guetos, segregación y concertada

Algunas de las medidas aprobadas por el texto y que, presumiblemente, pasarán todos los trámites necesarios, ponen el ojo en uno de los problemas que en los últimos años más ha crecido en el sistema educativo. La segregación, principalmente socioeconómica, de los centros educativos. En la mente, los datos de la Comunidad de Madrid, una comunidad a la cabeza en la formación de centros gueto en los que se reúne, de forma más o menos sobrerrepresentada, alumnado de estrato socioeconómico bajo, otro de procedencia migrante, o con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Lomloe trata de abordar este problema otorgando nuevas funciones a las comisiones de escolarización que, además de realizar su trabajo habitual, tendrán que estar atentas a que no se produzca una segregación entre los centros educativos de las zonas de escolarización. Además, existe la pretensión de que esta escolarización tenga en cuenta a la población socialmente heterogénea.

En paralelo, mientras la demanda social desaparece como uno de los criterios que ha de tenerse en cuenta a la hora de la admisión de alumnos, vuelve a tomar peso la cercanía del domicilio al centro educativo.

Parte de las medidas relacionadas con la disminución de los guetos guardan relación con las que pretenden atajar a la concertada, como la eliminación, como veíamos, de la demanda social como criterio de escolarización, o la programación de la red por parte de las administraciones atendiendo a criterios que eviten la segregación.

En este cajón de sastre también podrían contarse la vuelta de tuerca a la prohibición del cobro de cuotas por parte de los centros privados sostenidos con fondos públicos. Una práctica prohibida desde la LODE pero que, de una manera u otra, se ha estado incumpliendo. A partir de la aprobación de la Lomloe, no se podrán pagar estas cuotas voluntarias y se intenta evitar que actividades complementarias por las que se cobra ocupen el horario lectivo o que supongan una discriminación del alumnado.

Estas, y otras medidas, como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción y gestión de centros concertados (que ha supuesto sonados casos de corrupción, amén de dejar a barrios de nueva construcción sin ningún centro público cercano), han encendido los ánimos de la comunidad educativa de la concertada.

Hace semanas comenzaron una campaña bajo el nombre de Más Plurales, en la que han recogido cientos de miles de firmas, además de organizar varias concentraciones frente al Congreso de los Diputados en los últimos días. Una campaña que no parará hasta que consigan paralizar la tramitación de la Ley. Algo que parece complicado.

Educación pública, eje vertebrador

Este ha sido uno de los mantras de la ministra, Isabel Celaá en los últimos meses. Con los cambios introducidos en los últimos dos meses a base de enmiendas, todavía lo será un poco más.

En varios lugares se apuesta por la creación de más plazas públicas. En la media estatal, los centros públicos tienen un peso aproximado del 65% de la escolarización, frente al 35 % de la privada y privada concertada. Claro está que hay enormes diferencias entre territorios como Madrid, País Vasco y Cataluña, en donde el peso de una y otra está mucho más cerca del 50 %, frente a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha... en donde la pública siempre ha tenido que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la población.

Tal vez la materialización más clara de esta intención se refleja en la escuela infantil de 0-3, para la que ya se ha anunciado un programa de cooperación territorial que ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros para la creación de plazas públicas para el ciclo. En la ley también se habla de esto y se deja muy clara la intención de que estas plazas sean, además de públicas, «asequibles», principal problema para muchas familias que, simplemente, no pueden hacerse cargo de los costes. La intención, aumentar la escolarización de un 30 % a, aproximadamente, un 50 %

El articulado también hace referencia a la creación de plazas públicas allá donde sean necesarias. En los últimos años, además de esos barrios que nunca han tenido un centro público, hemos visto cerrar otros por

falta de escolares mientras en los cercanos concertados se mantenían los conciertos o aumentaban. El hecho de que la ley recoja que «la Administración debe ofertar plazas públicas suficientes» no es una simple fórmula. Es uno de los elementos para el incremento progresivo de los puestos de titularidad pública.

Bien es cierto que algunas de estas medidas, así como otras que desde la derecha y la concertada católica se han interpretado como un ataque a la libertad de elección de las familias, han sido lo necesario para que el PP avisara a los partidos que apoyan la Lomloe de que, en cuanto esta sea publicada la llevarán ante el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón, como siempre, es quién pagará el desarrollo y puesta en marcha de la nueva legislación. Esta no va acompañada de una memoria económica, aunque ya hace unos días, el Ministerio hizo públicos los datos que le corresponden dentro de los Presupuestos Generales del Estado de aprobarse. Unos 5.900 millones, un 139 % más que el presupuesto anterior y que, lógicamente, juega con un elevado porcentaje de los fondos europeos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Habrà que esperar a ver cómo se traducen estos fondos en las diferentes comunidades autónomas también, pero un paso importante es que el texto legal asume el compromiso, al menos de palabra, de alcanzar en unos pocos años, el 5 % del PIB dedicado a la educación. Hoy estamos por debajo del 4 % y esa diferencia puede suponer unos 10.000 millones de euros más.

Luces y sombras

Como viene denunciando buena parte de la comunidad, la Lomloe no supone ningún cambio en las ratios que rigen el sistema educativo (20 en primaria y 25 en secundaria obligatoria). Unas ratios que solo en parte se están cumpliendo ahora, con la pandemia y que, en buena medida eran superiores en los centros educativos gracias a la excepcionalidad de poder ampliarla un 10 % en el caso de que fuera necesario. La excepcionalidad, durante los años de la crisis se convirtió en la normalidad, con aulas, en la postobligatoria, por encima de los 30 chavales y chavalas.

A esto podríamos sumar otros elementos que han podido pasar más o menos desapercibidos, como el sistema de entrada a la inspección educativa que, de seguir como reza el texto, dejará de ser a través de concurso oposición para ser, sin más, una valoración de las aptitudes de quien quiera entrar en esta rama de la docencia.

Y todavía más dudosa es la disposición adicional cuadragésima octava en la que se pone sobre la mesa la posibilidad de retirar a un docente funcionario de la atención educativa directa con alumnado cuando muestre «una manifiesta falta de condiciones para ocupar su puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición». Aclara el texto (aunque no demasiado) que este cambio se produciría como consecuencia de «un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa». No se aclara la base para decidir qué es una manifiesta falta de condiciones para ocupar el puesto.

Aunque la ley realiza algunos avances, de mayor o menor calado, en relación a la inclusión educativa, como la escucha de la preferencia de las familias hacia la escolarización ordinaria frente a la especial; o la apuesta en infantil por la detección precoz y la puesta en marcha de medidas y ajustes razonables, o la consideración de las necesidades educativas a la hora de evaluar al alumnado en las diferentes etapas, el *statu quo* actual se mantiene, dejando la puerta abierta a la creación de más aulas específicas y centros de educación especial a pesar de las críticas del Comité que vigila el desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Casi un siglo después, sigue siendo cierto que ‘en España el respeto es revolucionario’

José Luis Pazos

El 8 de octubre de 1931, Fernando de los Ríos intervino en el debate sobre los artículos referentes a religión, familia y enseñanza de la Constitución Española aprobada ese año durante la Segunda República. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras: “En España el respeto es revolucionario”. Casi un siglo después, la frase es plenamente actual; lo demuestra casi cualquier debate que se pueda producir en el Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas. Es constante la falta de respeto al otro, que demasiados representantes políticos tienden a ver como enemigo y no como oponente político. Ni en la pandemia han cambiado su forma de actuar; al revés, han empeorado sus conductas y es generalizado el hastío de la población que no se comporta como fanática de quienes así proceden.

Pero siempre se puede aprender del pasado y del presente para que el futuro sea diferente. Incluso en los contextos desfavorables dirán algunas personas, sobre todo en momentos de grandes dificultades digo yo. Y esta pandemia es un ejemplo claro de que se pueden extraer valiosas conclusiones sobre las que conviene hablar con nuestros hijos e hijas, aportándoles una información que no siempre les llega, que cuando lo hace suele estar inmersa y a menudo bastante oculta entre otras generadas para confundir tergiversando la realidad, y que pocas veces tienen tiempo suficiente para digerirla y hacer su propio análisis crítico.

Así las cosas, ante una sacudida tan demoledora como la actual, que ha enfrentado a la sociedad mundial a uno de esos cataclismos que tardan en aparecer muchas décadas o incluso siglos, conviene que promovamos

el análisis de lo que nos rodea, resaltando los debates reales e importantes y dejando de lado las maniobras de distracción de quienes quieren campar a sus anchas aprovechando la tragedia de los demás.

Sé que desde esta óptica el listado de asuntos puede ser inabarcable, pero el enemigo de lo bueno es lo óptimo, y no es lógico dejar de resaltar algunos por no poder tocarlos todos. Así que se deben priorizar los que cada persona considere lo suficientemente importantes como para hablar de ellos con sus hijos e hijas, tratando de ayudarles con la reflexión conjunta a que puedan tomar criterio propio y se favorezca su educación integral, cuestión que forma parte de nuestra incuestionable función educadora. Habrá quien piense «sí, vale, pero cuáles, porque decirlo es fácil pero acertar, no tanto». Apuntaré lo que me parece capital en este momento.

Para mí es insoportable ver cómo esta sociedad admite actuaciones carentes de cualquier rasgo de humanidad, que tiene serias dificultades para sobresalir cuando la falta de respeto que mencionaba está tan presente, impregnando por desgracia a la sociedad. No hace falta rebuscar mucho para poner ejemplos de ello: declaraciones en las que se afirma que se puede prescindir del 1% de la población para que la economía pueda seguir su frenético ritmo; familias con niños menores que son desahuciadas por un banco público; personas mayores que no son llevadas al hospital porque se decide que cuesta menos trabajo y dinero dejarles morir sin el tratamiento mínimo que merecen; otras que sufren enfermedades que se convierten en mortales cuando responsables políticos deciden no distribuir el medicamento porque cuesta más dinero del que están dispuestos a gastarse...

En educación también podemos encontrar muchos ejemplos: alumnado sordo que no se puede comunicar porque las mascarillas que lo harían posible están pendientes de trámites burocráticos; otro que verá cómo sus ilusiones de futuro se frustran al no poder superar la EVAU porque a estas alturas de un curso siempre muy reducido aún no conoce al profesorado de algunas materias; a una parte del alumnado no se le dan los medios para poder seguir la denominada enseñanza semipresencial y lo pagará con repeticiones y abandono escolar; menores cuya comida más adecuada era la que realizaba en el comedor escolar y ahora ya no tiene acceso a ella;...

Como he dicho, reconozco que llevo muy mal que se tomen decisiones o se realicen actuaciones en las que no se encuentre atisbo alguno de la humanidad que debería estar muy presente. Y para que esto deje de ocurrir, tenemos que educar a nuestros hijos e hijas para que sus actos estén guiados siempre aplicando algo muy sencillo: hacer a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Así de sencillo y de fácil, pero difícil de conseguir en una sociedad que premia el individualismo y el egoísmo personal.

Por eso debemos trasladarles que, para que esta realidad dé un giro de 180 grados y comience a premiar siempre el bien común, es imprescindible que se impliquen en intentar cambiar el entorno que les rodea. Debemos enseñarles que el respeto a los demás debe guiar su forma de proceder, lo que no significa claudicar ante lo que otros defiendan, porque deben también asumir que los derechos que les corresponden, o los defienden, o los perderán. Y es que los defensores del individualismo, esos que tienen la máxima de «sálvese usted solo, si puede», son los mismos que tratarán siempre de atacar los derechos de la mayoría para preservar los privilegios de la minoría poderosa, a la que normalmente pertenecen. Son los mismos que están interesados en hablar durante la pandemia de tomar medidas de distanciamiento social cuando en realidad deberíamos hablar de distanciamiento físico. No es un lenguaje inocente sino deliberadamente calculado. Cuando salgamos de la pandemia, habrá mucha gente que habrá interiorizado que es peligroso relacionarse demasiado con los diferentes. Y esto debe ser combatido, contrarrestando los mensajes de quienes promueven esa forma de pensar y de actuar, que no son otros que los actores de la derecha del capitalismo salvaje, la que no negocia con el diferente porque solo sabe imponer, y que no respeta al otro porque trata de aplastarlo, ya sea usando la democracia o por cauces que están fuera de ella y que usan para cuestionarla y atacarla. Son lo que ahora se llama ultraderecha o derecha ultraconservadora, pero que se define mejor como fascismo.

Para frenar a esta parte minoritaria de la sociedad, pero muy peligrosa, hay que explicarles a nuestros hijos e hijas que el fascismo, la ultraderecha, no se puede legitimar democráticamente. Esto lo tienen claro en democracias más consolidadas que la nuestra, pero en nuestro país aún se coquetea con la posibilidad de poder redimirla y encauzarla hacia comportamientos democráticos. En mi opinión esto obedece a una mezcla de ingenuidad y de cierto complejo de inferioridad por parte de la izquierda de este país. Pero a base de fracasar en el intento de democratizarla, ese camino se irá abandonando y nuestros hijos e hijas deben darle el carpetazo definitivo, si es que nuestra generación no lo consigue en los próximos años, algo más que deseable para nuestro bienestar y el futuro de nuestra sociedad. Su deslegitimación democrática es más que una necesidad. Pero, para no fiarla a la suerte, debemos educar bien ahora para que el futuro sea diferente y mucho mejor. Y eso exige un abordaje serio en el currículo escolar formal, pero también en los currículos no formal e informal.

Esperemos que la nueva ley educativa, la LOMLOE, en principio pensada para derogar la nefasta y fracasada LOMCE, recupere los cimientos para que vuelva a caminar la legislación educativa por una senda que no debió verse truncada. Si bien es cierto que yo hubiera preferido mantener la LOMLOE en el escenario de simple

derogación de la LOMCE, y una vez conseguido esto que empezáramos a construir una ley educativa que diera un salto cualitativo sobre el modelo educativo actual, buscando un gran consenso social en su promulgación, espero con impaciencia el resultado final de este proceso negociador que parece encaminado a tener las dos cosas en un solo momento. Solo espero que se acierte porque no será fácil hacer nuevos cambios sustanciales en los próximos años. Eso sí, cuando tengamos el texto definitivo publicado en el BOE, será el momento de analizar qué cosas quedaron pendientes y comentar con nuestros hijos e hijas qué trabajo de construcción educativa conjunta nos queda para el futuro. Porque la idea de que la política es solo cosa de otros, debemos dejarles claro que la deben descartar. Hacer política es intervenir como pueblo en las cosas que nos son propias. Y si no hacemos política con mayúsculas, otros la harán por nosotros y, muy posiblemente, en nuestra contra. Si no se implican, nadie les respetará y la revolución no llegará. Y debe llegar.

ESCUELA

La clase social importa para la educación digital. EDITORIAL

A raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el modelo educativo ha cambiado y la enseñanza digital se ha impuesto como una realidad. La propuesta por una educación mixta presencial y online ha cogido fuerza, pero no en todos los centros ni en todas las regiones funciona de la misma manera. Según la investigación «De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento», realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, nuestros estudiantes de más de 15 años han sido los mejor parados. La pandemia dificultó el aprendizaje de muchos.

De hecho, según esta investigación, 9 de cada 10 jóvenes pudieron continuar sus estudios durante el confinamiento, aunque el 20% con bastantes dificultades. Las dificultades sufridas por las y los jóvenes tienen que ver con no poder concentrarse en el hogar (31,4%); falta de preparación del profesorado (28,9%); dudas que no pudieron resolver en soledad (24,7%) o no encontrarse bien anímicamente (23,1%), entre otras. A pesar de estos inconvenientes, casi el 70% de los jóvenes afirman haber satisfecho todos o casi todos los objetivos del curso académico.

La tecnología está transformando la educación gracias a la integración de herramientas digitales más interactivas, colaborativas, eficientes y divertidas. No obstante, la clase social a la que se pertenece ha condicionado la manera de vivir la educación a distancia. En el informe se destaca que la clase social declarada es determinante para el nivel de adaptación de los jóvenes a los entornos cambiantes en la educación. Se han acomodado mucho mejor aquellos chicos y chicas posicionados en las clases altas y medio altas frente a sus compañeros de clases medias y medias bajas. España es el segundo país con la brecha más amplia en la repetición entre alumnos con mayor y menor capital socioeconómico. Las diferencias aumentan la probabilidad de abandono escolar de los estudiantes más pobres.

La organización escolar y las enmiendas al proyecto de reforma educativa de la LOMLOE

Francisco J. Cuadrado Muñoz. *Inspector, Córdoba*; Florencio Luengo Horcajo. *Proyecto Atlántida*; Ángel Pérez Pueyo. *Grupo Actitudes*; Carmen Pellicer Iborra. *Fundación Trilema*

La escuela, como organización compleja que es, lleva a cabo una organización y alineamiento del alumnado de forma excesivamente institucionalizada. Lo hace a partir de la acción del profesorado, en un conjunto coordinado de actividades que estructuran la experiencia de aprendizaje y educación del alumnado participante. Se hace, y debería hacerse más, dentro de las expectativas y cambios que se producen en un entorno próximo y amplio, «de la sociedad española y del contexto europeo e internacional», tal como se establece en el proyecto de Ley LOMLOE⁽¹⁾. Por ello, es primordial *reorganizar el aprendizaje* como eje vertebrador del conjunto de la organización y funcionamiento de los centros educativos. Nos encontramos así, con una de las claves de ese aprendizaje que sin duda es el currículo establecido y su necesaria reformulación, si se considera indispensable la reorganización del aprendizaje.

Entre las enmiendas formuladas en el Congreso de los Diputados sobre currículo, por parte de los diferentes grupos parlamentarios, unas apoyan y concretan la creación de una unidad administrativa en el Ministerio de Educación que fije y revise los aspectos básicos del currículo regularmente, en colaboración con las comunidades autónomas, y con una amplia participación de profesorado, universidades y centros educativos, incluso planteándose unificarla con el organismo de evaluación del sistema. Otro grupo de enmiendas se orientan a que los contenidos no formen parte de los aspectos básicos del currículum que constituyen las enseñanzas mínimas que regula el Estado para asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes. Hay pronunciamientos a favor de diferentes porcentajes de enseñanzas mínimas en los horarios escolares de las comunidades autónomas, o que sean los organismos propios de las comunidades autónomas los que establezcan las enseñanzas mínimas, homologuen y expidan las titulaciones de las enseñanzas reguladas en la Ley.

Junto al debate de quién ha de establecer, qué aspectos lo conforman y cómo debe desarrollarse el currículo, apostamos a que la reforma curricular ha de contemplar las aportaciones de profesionales e investigadores junto con la demanda social y una integración efectiva de las competencias clave, retos de sostenibilidad y habilidades del siglo XXI. La ley anuncia aspectos de este tipo, las enmiendas entran de lleno en el debate, pero estamos ante un asunto de tan alto calado que será necesario consensuar cuando sea posible. El plano curricular que REDE ha expresado en otros documentos conlleva unas claves organizativas, que nos permiten acentuar la necesidad de reconfigurar espacios más allá del aula convencional con proyectos interdisciplinares en los que puedan trabajar simultáneamente diferentes grupos de alumnado y profesorado. Será necesario apostar por el uso flexible del tiempo que permita al alumnado más control e iniciativa sobre sus aprendizajes, para progresar el ritmo en función de sus intereses, etc. Hay elementos más que suficientes para construir consensuadamente las claves de un currículo básico, común, competencial y sostenible, sin dejar de contemplar la reorganización del centro dentro del contexto o entorno en el que cobra sentido de comunidad.

En relación con otras claves, se han presentado numerosas enmiendas sobre la clasificación y configuración de los distintos cuerpos, modificación de determinadas condiciones de acceso a cada uno de ellos, inspección educativa. Se han tratado diversos aspectos de la carrera docente, la inclusión de la lengua oficial de la comunidad autónoma como requisito obligatorio de acceso, propuesta de traspaso de todas estas regulaciones a las comunidades autónomas o la adaptación de titulaciones a la Reforma de la Educación Universitaria Europea que se ha desarrollado en los últimos años, tras la LOE, sin que se encuentren actualizados los requisitos de acceso en la normativa en vigor desde 2007. Siendo, todas ellas, cuestiones importantes para estructurar la función docente, que tratamos en nuestro texto sobre profesorado, hacemos constar aquí que es necesario «reorganizar la propia docencia» contemplando una mayor apertura del modelo hegemónico, basado en el aula, que establezca, entre otras opciones, la realización de proyectos multidisciplinares, que integren diferentes áreas o materias en conexión con la realidad y la práctica vivida por el alumnado, y que promueva intercambios y redes colaborativas entre el profesorado.

Para hacer posible los retos de reorganización de la docencia, van a ser necesarios planes de Desarrollo Profesional Docente ambiciosos, bien dotados económicamente, y obligatorios, que hagan posible la formación inicial, ahora ya en contacto con la práctica, y la actualización metodológica continua del profesorado, también en la propia práctica del centro, contemplando los diferentes aspectos que REDE ha definido en varios de sus temas centrales. Al respecto, la LOMLOE ya establece: «Las Administraciones educativas impulsarán que los centros establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado.» (Once. Artículo 19.4). Es cuestión de concretar y hacer viable su aplicación efectiva en su posterior desarrollo normativo. Toda reforma educativa relevante se fundamenta en su capacidad para transformar y modernizar la función docente. Bien harían los responsables de trabajar en paralelo a la ley una apuesta decidida por esta necesaria reorganización de la docencia, que sería la garantía de que muchos retos pendientes puedan avanzar. Ese *Desarrollo Profesional* no debe limitarse meramente a las metodologías y la docencia directa sino contemplar también los diferentes roles que los profesores y profesoras desempeñan en los centros, como la tutoría, y la coordinación de diferentes proyectos y ejes educativos.

En lo relativo a la dirección escolar, las enmiendas al proyecto de ley de la LOMLOE se plantean sobre múltiples aspectos, como son los requisitos de las candidaturas a la dirección de los centros, méritos de los aspirantes y limitación de mandatos de quienes ejercen el cargo, órgano responsable de la selección, proyecto de dirección a presentar o formación específica para el ejercicio del cargo, atribución de funciones a la dirección y al equipo directivo. Se continúa con medidas para reforzar la función directiva y su ejercicio, modelo de dirección, con una tendencia al fortalecimiento de la profesionalización y del liderazgo pedagógico. En este sentido nos parece necesario ahondar en una redefinición de responsabilidades que establezca el necesario ejercicio de *una dirección pedagógica y profesional*, que permita coordinar eficazmente y sin limitaciones las actividades de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de un proyecto educativo. Paralelamente, la formación inicial y permanente apuntamos que es necesario promover la profesionalización del cargo, y se deben articular procedimientos de evaluación orientados al desarrollo y aplicación del proyecto de dirección seleccionado y grado de consecución de los objetivos establecidos en el proyecto educativo del centro. Será preciso, especialmente, analizar los avances en lo relativo a la mejora de los logros escolares del alumnado, junto con otros aspectos relevantes como el liderazgo pedagógico que venimos propugnando, especialmente deficitario y susceptible de un amplio margen de mejora en nuestro sistema educativo. El diseño más estructurado de la carrera docente debe contemplar cómo hacer uso de la experiencia acumulada en los diferentes roles para potenciar el talento de todo el equipo docente.

Las enmiendas al proyecto de LOMLOE reiteran la necesaria autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, alguna incide en novedades del proyecto como que «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía» (Cuatro. Art. 6.5) o que «los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas,

programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.» (Sesenta y uno. Art. 120.3 y 4). La cuestión está en cómo se desarrollarán de nuevo estos planteamientos que ya estaban en 2006 en la LOE y confirmó la LOMCE (2013) sin que los procedimientos actuales de dotación de personal, cupos o presupuestos, el desarrollo de normativas de organización y funcionamiento de los centros, o los cada vez más telemáticos e individualistas sistemas de formación del profesorado, obstaculicen su desarrollo y generalización a un amplio número de centros, como ha venido ocurriendo.

Se propone en alguna de las enmiendas que los centros completen el currículum de las enseñanzas que imparten, disponiendo del 10% de los horarios escolares, lo que podría posibilitar el desarrollo de proyectos educativos innovadores y propios en las condiciones apuntadas, o establezcan una especialización curricular en alguno o diferentes ámbitos de conocimiento. Aparece al fin una piedra de toque al necesario proceso innovador que cada centro puede y debe aprovechar para diseñar un proyecto curricular propio, con seña de identidad que lo inserte de forma real en el contexto en el que se desenvuelve. Es la hora de la innovación en centros, que grupos y editoriales deberán fortalecer y visibilizar. La medida, bien definida, puede dar lugar a redes de intercambio entre centros innovadores, con proyectos propios

Siendo valores necesarios en la reforma del sistema educativo la transparencia pública y promover la participación, mirando hacia la comunidad, son numerosas las enmiendas al proyecto de LOMLOE con referencias a la participación en los procesos educativos. Posiblemente sea esta una de las palabras de más amplia utilización en el conjunto de todas las enmiendas presentadas, no solo referida a la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, especialmente la del alumnado en el Consejo Escolar incluyendo al del tercer ciclo de Educación Primaria, sino también de la participación infantil y juvenil en diferentes aspectos de la vida del centro.

La apuesta por la profundización en las claves participativas es clara, pero las claves del reto van a estar relacionadas con la apuesta real por una dirección democrática bien profesionalizada, que tenga entre sus desafíos la participación real de su comunidad, y una docencia que asegure el compromiso con una nueva apuesta de desarrollo profesional comunitaria, que es necesario incentivar con medios y formación específica. La participación en las instituciones educativas, no solo propicia la corresponsabilidad y el compromiso con los fines de la institución, sino también la transparencia, la equidad y la calidad del sistema educativo en una sociedad democrática.

Corremos el riesgo, aún reconociendo avances en los aspectos organizativos de la propuesta legislativa, de realizar una reforma más de Ley Orgánica de Educación, con fecha de caducidad en el horizonte electoral, sin tiempo para su desarrollo y para que realmente se asuman las transformaciones necesarias más allá de lo formal y lo retórico. Si así fuera, nos veríamos otra vez acompañados de nuevo de un círculo vicioso, sin cambios estructurales sustanciales ni búsqueda de consensos, hasta una próxima y no muy lejana nueva reforma de Ley Orgánica de Educación, como consecuencia de la alternancia política, tal como nos enseña nuestra historia en las últimas décadas, desoyendo una vez más el clamor de unos necesarios e imprescindibles acuerdos educativos. Es preciso acabar con los continuos vaivenes legislativos, para centrarse realmente en lo nuclear que haga posibles cambios estructurales significativos, que aquí abordamos en lo relativo a la organización de los centros educativos.

De ahí nuestra preocupación, y la reiterada puesta en escena de nuestras claves de mejora, tal y como defiende REDE en sus documentos de análisis y propuestas: *reorganizar el aprendizaje*, porque reorganizándolo de acuerdo con el conocimiento científico y la investigación, se hace necesario *reorganizar la docencia* con una formación y actualización acordes, con un nuevo currículum que integre las competencias clave y las habilidades del siglo XXI. Para ello, reiteramos será necesario redefinir *una dirección pedagógica y profesional*, acompañada de un eficiente liderazgo pedagógico que coordine incluso en las aulas y los equipos docentes, el adecuado desarrollo de proyectos educativos propios, dentro de una autonomía al servicio de la mejora, primordialmente de los logros escolares del alumnado.

Deseamos acabar reiterando nuestro convencimiento, de que, sin dejar de reconocer cuantos avances se han realizado en las apuestas parlamentarias por definir un modelo educativo de progreso, incluida esta, será posible observar cómo aumenta en nuestro país el convencimiento de que solo el encuentro real entre los modelos que subyacen en tantas y diferentes enmiendas permitirá establecer un marco de acuerdos que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo. Y esa finalidad, perseguida por REDE, es la que pretendemos poner en valor ante el conjunto del sistema educativo.

(1)

Formulamos esta reflexión, tomando como referencia los documentos de La Red por el Diálogo Educativo (REDE), tratando de encontrar puntos de encuentro entre estos informes y las enmiendas a la LOMLOE que se discuten en el Parlamento. Lo hacemos respetando el proceso parlamentario, de obligado cumplimiento, y tratamos de contribuir a sumar ideas que favorezcan un modelo final compartido, que otorgue mayor estabilidad al sistema educativo. De acuerdo con nuestros análisis y propuestas, tal como se titula en su documento/propuesta de organización escolar, Transformar la Organización. Hacia un nuevo modelo, identificamos algunos aspectos nucleares como los que se

definen en estas claves: reorganizar el aprendizaje, reorganizar la docencia, una dirección pedagógica y profesional, autonomía al servicio de la mejora, transparencia pública y promover la participación, abriendo vías a la comunidad.

Los cambios de la Ley Celaá, a corto y a largo plazo

Mar Lupión

Esta semana está previsto que la LOMLOE sea ratificada en el Congreso de los Diputados y, de ahí, pase al Senado, subiendo así un peldaño más hacia su aprobación.

Esta ley educativa, la octava de la democracia, está generando polémicas en torno a los temas más sensibles, como puede ser, la lengua vehicular en las aulas o la financiación de las escuelas concertadas. Es más, en los últimos días hemos visto como la también conocida como «Ley Celaá», se ha convertido en la moneda de cambio de algunos grupos políticos para ofrecer o no su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que, en estos días, se negocian y debaten en la Cámara Baja. Este texto se ha convertido, también, en uno de los argumentos más empleados por algunos partidos a modo de reproche contra el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Sin ir más lejos, el Partido Popular, principal formación de la oposición, se ha unido a las protestas de los defensores de la escuela concertada y está previsto que se incorpore a las próximas protestas organizadas por este colectivo. De hecho, ha participado en la recogida de firmas que busca «proteger» este modelo educativo.

La LOMLOE viene a derogar la que, hasta ahora y desde 2013, ha sido el texto que ha regido la enseñanza en nuestro país. Hablamos de la LOMCE, también conocida como «Ley Wert», que salió adelante en su momento gracias a la mayoría que ostentaba en aquel entonces el PP. Un documento que ha despertado, desde su aprobación, fuertes antipatías entre amplios sectores de la educación española.

Entre voces a favor y en contra y, al margen del ruido político que se ha generado en las últimas semanas, la comunidad educativa asiste con interés, preocupación —en algunos casos— e incertidumbre a los cambios efectivos en la vida escolar que supondría la aprobación de la LOMLOE.

Queda en el aire si el castellano será o no lengua vehicular en las escuelas

El papel del español en colegios e institutos ha sido, sin lugar a dudas, uno de los puntos que más debate ha suscitado en las últimas semanas.

Desde que se conociera que el texto de la LOMLOE no incluía específicamente que el castellano como lengua vehicular, las alarmas han saltado para muchos. En concreto, el documento establece que las administraciones tienen la obligación de garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza «en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable».

Es decir, cabe la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan cuál es la lengua vehicular de la región en el ámbito de la educación. Las formaciones políticas que han dicho «sí» a esta enmienda defienden que se busca «facilitar los programas de inmersión lingüística» de las regiones en las que existe una lengua cooficial.

Para hacernos una idea del cambio que puede suponer en las aulas, hay que recordar que es la Ley Wert la que indica, por primera vez en democracia, que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable».

Antes de 2013, no se concretaba que el castellano tuviera ese papel. Algunas de las referencias al español que reflejaba la LOMCE sufrieron la anulación por parte del Tribunal Constitucional.

Fue el caso del artículo que señalaba que las comunidades autónomas tendrían que hacerse cargo del coste de la matrícula en centros concertados o privados de aquellas familias que solicitasen que sus hijos recibieran las clases en castellano. En realidad, esto se ha traducido que, desde 2019, 8 familias catalanas de un total de en torno a un millón y medio de estudiantes, han recurrido a la Justicia para pedirlo. Tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han establecido en varias sentencias que los estudiantes que así lo deseen deben recibir un 25% de las horas lectiva en castellano. El Constitucional, por su parte, señala que esta lengua ha de ser la vehicular en la enseñanza.

Siguiendo con Cataluña, vemos que la normativa autonómica no incluye ninguna mención a que el español tenga carácter vehicular y considera al catalán como lengua de uso normal en las escuelas. Podemos leer en ella, por ejemplo, que «todas las personas tienen derecho a recibir enseñanza en catalán» y contempla que

queda en manos del cuerpo directivo de los centros su regulación dependiendo de las necesidades y las características de los alumnos.

Es importante destacar que esto no implica que el castellano no sea también vehicular. En la práctica y, de acuerdo con el informe realizado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), en los colegios catalanes es el catalán la lengua que se emplea en las comunicaciones ente el centro, las familias y para la impartición de todas asignaturas, con la excepción de la Lengua Castellana. Lo que nos dicen aquellos que conocen de cerca el Derecho es que mientras siga vigente la Ley de Educación de Cataluña, que recoge lo anteriormente mencionado, nada va a cambiar en las aulas de esta comunidad y los tribunales seguirán siendo lugar al que recurren aquellas familias que insistan en que sus hijos estudien en castellano.

El propio Consejo de Europa, en su informe de diciembre de 2019 asegura el castellano se aprende por impregnación social y que, al ser la lengua mayoritaria, no corre peligro de desaparecer.

Hay división entre los expertos en Lingüística. Los hay que consideran sorprendente que el debate político se centre en estos aspectos y abogan por la inclusión de las lenguas cooficiales. Argumentan que, si no se apuesta por su inclusión, irán desapareciendo. En otro sentido va, por ejemplo, un artículo de la Fundación Sociedad y Educación firmado por Jorge Calero y Álvaro Choi, de la Universidad de Barcelona, en el que aseguran que «el alumnado que usa el castellano en el hogar, al estar educado en un régimen de inmersión lingüística en catalán, alcanza un rendimiento inferior en la competencias evaluadas en PISA al de sus compañeros cuya lengua usada en el hogar es el catalán, a igualdad del resto de características personales, socioculturales y económicas».

Mayor autonomía en las escuelas

La Ley Celaá da respuesta a una reivindicación de gran parte los expertos en educación e innovación: la de proporcionar mayor independencia a las escuelas. Incluso la OCDE lamentaba que los profesores no fueran «dueños de su práctica» y no tuvieran tiempo «de estar con los compañeros, no pueden participar en las decisiones del centro. Es como si trabajasen en una cadena de producción».

Una vez la LOMLOE sea una realidad, las comunidades autónomas serán las encargadas de establecer el porcentaje en el que los centros tienen libertad de decisión y se permite trabajar por ámbitos interdisciplinares y no solo por asignaturas. De esta manera, los centros gozarán de una mayor autonomía curricular. Se espera que el gobierno determine el 50% de los contenidos de conocimiento en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en el resto de regiones. Las administraciones educativas tendrán que establecer «el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo integral de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal en todas las áreas, materias y ámbitos».

Vicent Mañés, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Infantil y Primaria (FEDEIP) nos cuenta que están de acuerdo y celebran una mayor autonomía de los centros «siempre y cuando exista un elemento común, un baremo para todos para evitar que se produzcan desigualdades». Una medida que también aplaude Ainara Zubillaga, experta en Educación e Innovación de COTEC, aunque echa en falta «profesionalización de los cuerpos docentes y directivos, para poder aprovechar esa mayor autonomía. Falta que se apueste más por la innovación y por la transformación digital, en un momento en el que ha quedado más que demostrada su importancia».

Freno a las «escuelas gueto» y a la financiación de la segregación por sexos

Según los datos que recogen varios informes, entre ellos, el elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid, España es el sexto país europeo en cuanto a segregación escolar. Una situación a la que también se ha referido la ONU. En la escuela pública está matriculado el 79% de los estudiantes inmigrantes y 9 de cada 10 alumnos procedentes de hogares con rentas bajas.

Zubillaga considera que «es la primera vez que una ley educativa incluye explícitamente medidas que buscan poner fin a la segregación socioeconómica y a las llamadas escuelas gueto. No creo que sea el momento de caer en debates sobre la titularidad de las escuelas. Es lógico que el Estado vele y garantice el derecho a una educación de calidad para todos».

Se conoce con este término a aquellos centros en los que más de la mitad del alumnado pertenece a familias con pocos recursos económicos. La LOMLOE plantea una mejor distribución de este alumnado en centros tanto públicos como concertados a través, por ejemplo, de la creación en las comunidades autónomas de comisiones de escolarización que analicen las admisiones y eviten así una posible discriminación socioeconómica. El criterio prioritario a la hora del reparto de las plazas será la cercanía entre el hogar y el centro.

Por otro lado, los gobiernos autonómicos tendrán que reservar un porcentaje de las plazas para los alumnos con necesidad de apoyo educativo, desde el inicio del plazo de matriculación y hasta el arranque del curso en septiembre. Podrán dar luz verde, si así lo consideran, a un aumento de un 10% en el número máximo de alumnos para poder integrar a los que se incorporan después.

En cuanto a la segregación por sexos, la LOMLOE solo les exige un plan de igualdad para poder mantener el concierto. Sin embargo, la ley Celaá señala que «con el fin de favorecer la igualdad de derechos u

oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación y no separarán al alumnado por su género». Esto se traducirá, una vez se apruebe la LOMLOE, en la eliminación del concierto de los centros que separan por sexos. Es posible que esta medida encuentre escollos legales, puesto que ya existen sentencias del Tribunal Constitucional que fijan que la educación diferenciada es un modelo educativo más.

La concertada, con límites

Los representantes de los colegios concertados han estallado tras conocerse los cambios que contempla la LOMCE y que, consideran, ataca a este modelo educativo.

En nuestro país, el porcentaje de escolarización en la pública es de un 67%, frente al 81% de la media de la Unión Europea. La nueva ley busca acercarse a la realidad de los socios comunitarios: prohíbe la cesión de suelo público para centros privados, una posibilidad que introdujo, en su momento, la Ley Wert. En otra de las enmiendas, se habla de la cuestión de la intrafinanciación de estos centros. Se pretenden que exista una comisión, formada por patronales y sindicatos, en la que se calcule el coste total de la «impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad» para incluirlo en el plan de incremento del gasto público. Sobre las cuotas «voluntarias», están en manos de los gobiernos regionales pero el gobierno veta que las actividades complementarias de pago se inserten en el horario lectivo.

La universalización de la educación entre los 0 y los 3 años se queda por el camino

La LOMCE no recoge el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de universalizar la educación gratuita en esta etapa. El texto habla de la intención de las autonomías de aumentar progresivamente la oferta de plazas en la red pública. Un compromiso que se traduce en 200 millones de euros en el proyecto de los Presupuestos para la creación de nuevas plazas. 8 años es el plazo que se pone el gobierno para elaborar un plan, junto con los ejecutivos regionales, para que el 0-3 pueda ser accesible.

Para FEDEIP, la importancia de la educación en estas edades tempranas es reseñable «sobre todo en el segundo ciclo de Educación Infantil. No existe ningún motivo ni argumento que vaya en contra de que los niños se incorporen a las escuelas a esas edades. Eso sí, esto implica un mayor gasto en becas comedor, de transporte, etcétera. Quizá no se ha hecho porque supone un importante desembolso económico, lo que nos parecería muy mal», reflexiona Vicente Mañés. En relación con ese segundo ciclo de Infantil que menciona FEDEIP, la Ley Celaá recoge que las comunidades «garantizarán una oferta suficiente» de plazas tanto en escuelas públicas como concertadas.

La institucionalización de la palabra «no» en el contexto educativo

«Ante esto, y sin interés alguno de hacer una catarsis contra el "no", posiblemente un primer paso sería hacer un buen análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades y en base a ese análisis, ser sinceros y armarnos de valor y ánimo para trabajar por nuestras metas»

Gustavo Toledo Lara

La disposición y la voluntad por hacer cosas, crear e innovar puede verse quizás condicionada o hasta influenciada por una palabra que lamentablemente está muy presente en nuestro vocabulario habitual. Es aquella palabra que, aunque necesaria sin lugar a dudas, tiene dentro de sí un fuerte componente si se quiere «energético» que inclusive nos puede coaccionar hasta el punto del desánimo. Se trata de la palabra «no». Lamentablemente en el contexto educativo, el «no» ha ganado mucho terreno.

Tanto en estos tiempos, como desde hace ya varios años, la necesidad de adaptarse a los cambios es una competencia profesional que ha de fomentarse evidentemente desde la escuela, pero de forma voluntaria o inconsciente en muchas oportunidades el «no» por respuesta puede llevarnos a una calle sin salida que hace imperiosa la necesidad de ser asertivos en medio de tantos «no» que solemos imponernos.

Por ejemplo, al tratar de fomentar un cambio, puede ser que se nos diga que «no» se puede, o «no» es el momento, o «no» hay financiación. Al ejercer actividades de inspección o de supervisión de cualquiera de los momentos que constituyen el proceso pedagógico, existe un riesgo latente de que «no» se permitan hacer ciertas cosas bajo el subterfugio del cumplimiento normativo que indudablemente pueda estar sujeto a una futura revisión y adaptación a un contexto determinado.

Así las cosas, esa palabra sobre la que aquí estamos tratando, extrapola su influencia en nuestra cotidianidad y evidentemente en nuestro quehacer diario cobrando cada vez más poder y pareciera entonces que debemos acostumbrarnos a nadar contracorriente para no dejarnos desanimar por el «no». Si se solicita algo, puede ser que «no» se pueda ya que falta un papel. Si se intenta hacer algo nuevo o también optar por una mejor oportunidad laboral, puede ser que nos digan que «no» es el momento, o que sencillamente «no» se puede. ¿consecuencias? Docentes, alumnos, estudiantes que lamentablemente ante tantas negativas, caemos en el

desánimo colectivo y en aplicar la ley del mínimo esfuerzo ya que «no» es lo que se está pidiendo o «no» es lo que se nos permite. La verdad que diferenciarse y hacer bien las cosas pareciera que actualmente es más difícil, o que el contexto que nos rodea se ha vuelto tan competitivo que bajo la excusa de la excelencia muchas oportunidades se han perdido porque sencillamente «no» se puede hacer o «no» tenemos tal o cual certificado, diploma, o constancia.

Ante esto, y sin interés alguno de hacer una catarsis contra el «no», posiblemente un primer paso sería hacer un buen análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades y en base a ese análisis, ser sinceros y armarnos de valor y ánimo para trabajar por nuestras metas. Mucho se nos dice que hay que levantarse al caer, y que donde se cierra una puerta se abren mil ventanas. Pues al parecer de eso se trata: de ver las cosas en su justa dimensión ya que no debemos olvidar que los docentes somos seres humanos e igualmente nos mueve una energía que se llama «motivación». En efecto, tenemos aspiraciones personales e interés por logros y satisfacciones personales y eso pasa lógicamente por superar aquellos momentos que la vida misma nos ofrece a modo de prueba. Poco a poco, un paso a la vez.

Hace un tiempo, una de mis estudiantes que cursaba estudios para obtener el nivel de grado, me comentaba que tenía casi 20 años de vida docente y que se sentía estancada porque percibía que durante muchos años ha estado haciendo prácticamente lo mismo. Mientras esto ocurría, ella me transmitía sensaciones de desánimo ante varios intentos de hacer cosas nuevas o de impulsar ciertos cambios en su quehacer docente pero el contexto (lo cual incluye normativas, procedimientos, burocracia, compilación de títulos, situaciones a lo interno de los centros y demás) no le había resultado muy favorecedor y en lugar de encontrar una oportunidad, lo que más recibía era un «no» por respuesta ante un sector educativo que permanentemente exige de sus docentes una constante modernización bajo ciertos estándares de excelencia.

Esta situación, es más común de lo que parece solo que pocas veces se socializa con el volumen necesario para que llegue a donde tiene que llegar. Es importante tener presente que las personas experimentan altibajos en sus estados de ánimo, es decir, algunas veces puede estar muy arriba mientras que otras veces puede que no esté en sus mejores momentos de ánimo y es por eso que la palabra «no», genera un impacto diferente en cada uno de nosotros. Quizás resulte útil saber lo que realmente está en nuestras manos y eso sí que lo podemos tomar como piedra angular tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ese saber lo que podemos hacer nos puede dar además de seguridad, una gran satisfacción ya que lo que reposa sobre nuestros hombros estará en buenas manos y que, aunque el contexto quiera hacernos ver que «no» se puede, lo cierto es que caerse es humano, pero levantarse es vital.